

LA AMAZONÍA SAQUEADA: LAS RAÍCES DE LOS DELITOS AMBIENTALES EN LAS REGIONES DE TRIPLE FRONTERA

COLOMBIA

BRASIL

PERU

“Mapeo de los delitos ambientales en la cuenca amazónica”: Introducción a la serie

La serie de estudios de caso “Mapeo de los delitos ambientales en la cuenca amazónica” pretende comprender la dinámica actual de los delitos ambientales en la cuenca amazónica y generar recomendaciones de políticas para las partes interesadas en la lucha contra los delitos ambientales a nivel regional, nacional y local.

La cuenca del Amazonas se extiende a través de ocho países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) y un territorio (Guayana Francesa). En los últimos años, y de manera progresiva, los investigadores y formuladores de políticas han desarrollado una sólida comprensión de la dinámica de la deforestación y la degradación en la región, y las formas en que los actores económicos explotan los recursos forestales bajo diferentes regímenes estatales. Esta serie arroja luz sobre una dimensión menos explorada del fenómeno: el papel que desempeñan los actores y las economías ilícitas en el fomento de la deforestación.

Esta serie de estudios traza un panorama complejo del impacto socioambiental que de manera continua producen las actividades económicas tanto autorizadas como ilícitas en la selva amazónica y en su población. Por otro lado, muestra la dinámica espacial y temporal de categorías específicas de delitos ambientales y su intersección con actividades económicas legalizadas, así como sus vínculos con otros tipos de delitos y violencia social. Además, arroja luz sobre la economía política subyacente a los mercados criminales, las

características organizativas de los grupos criminales y la colusión de las agencias gubernamentales en los delitos ambientales. Los informes también discuten el historial de medidas gubernamentales previas y actuales para interrumpir y dismantelar las redes criminales que han diversificado sus delitos ambientales en toda la cuenca amazónica.

Los estudios de esta serie ilustran cómo, en diferentes países de la cuenca amazónica, tanto los actores lícitos como los ilícitos interactúan para cometer los delitos ambientales y causar la degradación en un momento de emergencia climática y de acelerados cambios sociopolíticos en toda la región. Por otro lado, la atención y la acción del Estado para combatir los delitos ambientales en los últimos años, principalmente para reducir la deforestación y la minería ilegal, se ve obstaculizada por el debilitamiento de las protecciones ambientales y las regulaciones de la tierra. La mayoría de las veces, las élites políticas y económicas suelen ser cómplices de la destrucción de la selva amazónica, o bien soslayan esta realidad.

Esta serie está liderada por el Instituto Igarapé, un grupo de pensamiento y acción independiente ubicado en Río de Janeiro y que busca soluciones para las agendas de seguridad pública, climática y digital, en asociación con InSight Crime, una organización sin ánimo de lucro que realiza reportajes periodísticos e investigaciones sobre temas relacionados con el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

LA AMAZONÍA SAQUEADA: LAS RAÍCES DE LOS DELITOS AMBIENTALES EN LAS REGIONES DE TRIPLE FRONTERA

Este informe fue liderado por InSight Crime. Los hallazgos y el análisis del presente informe se basan en investigaciones documentales, entrevistas telefónicas y trabajo de campo en las regiones fronterizas de Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, de la siguiente manera: en los municipios de Puerto Carreño, Inírida y Leticia, en los departamentos colombianos de Vichada, Guainía y Amazonas, respectivamente; en la ciudad de Puerto Ayacucho, en el estado venezolano de Amazonas; en la ciudad de Tabatinga, en el estado brasileño de Amazonas, y en la ciudad de Santa Rosa de Yavarí y el Valle de Yavarí, en el departamento peruano de Loreto. Las entrevistas se realizaron en 2022 con expertos en delitos ambientales, funcionarios gubernamentales y de seguridad, miembros de comunidades locales, agricultores y miembros de organizaciones internacionales.¹

El informe examina la dinámica de los delitos ambientales en dos regiones de triple frontera: Brasil, Colombia y Venezuela, por un lado, y Brasil, Perú y Colombia, por el otro. En todo el mundo, las zonas fronterizas son conocidas como sitios de intensa circulación de personas y bienes. En América Latina, las fronteras también están profundamente conectadas a múltiples formas de tráfico. Las regiones de la triple frontera de la Amazonía son áreas importantes que deben investigarse debido a su papel central en las cadenas de suministro ilegal de productos forestales. Más que zonas fronterizas oficiales bastante definidas, o ciudades limítrofes, vemos estas triples fronteras como regiones fronterizas que abarcan miles de kilómetros cuadrados y están profundamente conectadas con la dinámica transnacional: rutas, flujos de bienes y personas, prácticas comerciales y redes criminales.

A diferencia de otras regiones fronterizas de la región, las fronteras amazónicas son áreas muy remotas, de difícil acceso y, a menudo, muy distantes de otros centros políticos y

económicos importantes. Además de la espesa selva y sus innumerables ríos, ambas regiones albergan una riqueza natural incomparable. La triple frontera entre Venezuela, Brasil y Colombia es el único lugar del mundo donde se encuentran tepuyes, mesetas gigantescas que esconden minerales como oro y diamantes; por su parte, la triple frontera con Perú contiene maderas valiosas como la caoba y el cedro. Estas regiones han sido históricamente el hogar de varias comunidades indígenas, con una presencia muy débil de las instituciones estatales y de infraestructura.

Las remotas regiones de triple frontera, protegidas por su inaccesibilidad, entre Brasil, Colombia y Venezuela, y Brasil, Perú y Colombia, son fundamentales para las formas contemporáneas de delitos ambientales transfronterizos. Durante más de 20 años, las arterias fluviales que conectan estos países han servido para el trasiego de drogas desde Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, hasta Brasil, una de las principales puertas de entrada de drogas a los mercados internacionales. Esta infraestructura criminal ya se ha puesto al servicio de la minería ilegal y el tráfico de madera. En estas fronteras se encuentran poderosos actores criminales. Las guerrillas colombianas se han refugiado en ellas, y en Venezuela han engrosado sus filas con reclutas venezolanos.

Además de presentar una singular descripción de la dinámica criminal específica que tiene lugar en estas regiones fronterizas, y el alto costo que tiene para las comunidades locales, en particular para las comunidades indígenas, el estudio señala que los principales desafíos para combatir los delitos ambientales en las regiones de la triple frontera se ven agravados por la falta de recursos y experiencia, así como por corrupción y la falta de articulación entre los países.

Contenido

Resumen ejecutivo	5
Minería ilegal de oro	10
Oro y guerrillas: el Parque Nacional Yapacana en Venezuela.....	16
La fiebre del oro ilegal atrae a grupos criminales a la reserva Yanomami de Brasil...	20
Tráfico de madera.....	30
Coca y narcotráfico	35
Resiliencia estatal	45
Conclusiones y oportunidades de intervención	56
Notas finales.....	60

Resumen ejecutivo

En lo profundo de la cuenca del Amazonas se encuentran dos regiones de triple frontera, donde los delitos ambientales y sus perpetradores no reconocen fronteras nacionales. En estas vastas áreas selváticas, importantes extensiones aisladas de bosques primarios están siendo arrasadas para extraer oro, cultivar coca y cosechar madera.

En la frontera norte de Brasil con Colombia y Venezuela, con una extensión de casi

4.000 kilómetros a la que en su mayor parte se puede acceder solamente por barco o avioneta, los buscadores de oro están en una loca carrera por extraer el mineral precioso.

Decenas de miles de ellos han invadido el territorio del pueblo indígena Yanomami, que habita una gran franja de tierra en zonas de Brasil y Venezuela.² Los mineros han arrasado la tierra y han dejado pozos de barro en la reserva Yanomami.

Triple frontera amazónica entre Venezuela, Colombia y Brasil



En el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela, un poco al norte de esta zona de triple frontera, la minería ilegal de oro ha crecido a una velocidad alarmante, como señala el observatorio SOS Orinoco.³ Los buscadores ilegales incluso han arrasado el bosque en la cima del Cerro Yapacana, una montaña de escarpadas laderas que se eleva sobre el parque.⁴



Imagen satelital de deforestación en el Cerro Yapacana y en sus alrededores (Cortesía de SOS Orinoco)

“En la región, todo depende del oro”, le dijo a InSight Crime un experto en minería en la Amazonía venezolana, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.⁵ “La actividad en el Cerro Yapacana no se detiene nunca. Extraen oro todo el tiempo”.

En la otra triple frontera, entre Brasil, Colombia y Perú, los actores criminales y las economías ilícitas fluyen y se fusionan como los abundantes ríos de la región.

Al noreste de Perú, la selva amazónica está siendo talada para cultivar coca.⁶ Desde los

sitios de procesamiento de la selva en esa región, se contrabandea cocaína a Colombia y luego a Brasil, donde es distribuida por todo el país más grande de la región, con el fin de abastecer el consumo local, y luego se envía a Europa y a otras regiones.⁷

Tres ríos, el Caquetá (conocido en Brasil como el Japurá), el Putumayo y el Amazonas, y sus abundantes afluentes, sirven como arterias para este tráfico transfronterizo. Las vías fluviales comunes también sirven como carreteras para la madera cortada por madereros ilegales, y allí las dragas de oro son operadas por mineros ilegales.

La triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil



insightcrime.org

Los nexos entre drogas y delitos ambientales en estas dos regiones de triple frontera en la Amazonía han llevado a una explosiva mezcla de actores criminales en una región remota con mínima presencia de la policía y el Estado. El poco orden que existe suele ser impuesto a bala por los grupos criminales.⁸

En el departamento de Amazonas, Colombia, de gran extensión y con poca vigilancia, comunidades indígenas enteras han sido tomadas como rehenes.

“Nunca había visto tanto miedo a la violencia debido a tal presencia de grupos armados

ilegales”, dijo un funcionario de una entidad humanitaria que trabaja con comunidades indígenas en Amazonas y pidió no ser identificado por razones de seguridad.⁹

Desde 2019, las comunidades indígenas no solo están atrapadas en el fuego de la violencia criminal, sino que dependen cada vez más de las empresas criminales para su sustento. Procesar coca, cosechar madera ilegal y servir como mano de obra en balsas de dragado de oro son algunas de las pocas oportunidades de empleo en estas regiones remotas.¹⁰ Algunos de estos habitantes son jóvenes que tienen poco que decir al respecto.

Las comunidades indígenas también están expuestas a altos niveles de mercurio tóxico, utilizado por los mineros para separar el oro. Los rastros de mercurio están contaminando ríos y bosques.

Estas mismas comunidades han sido históricamente devotos guardianes y defensores de primera línea de estos bosques y vías fluviales, interesados en proteger sus tierras, ricas en biodiversidad. Escuchar las necesidades de estas comunidades, proporcionarles ayuda financiera y medios de vida alternativos, y brindarles seguridad, son pasos necesarios para abordar la variedad de delitos que agravan la deforestación en estas dos regiones de triple frontera en la Amazonía.

También se necesitan políticas más amplias, que incluyan la cooperación entre los representantes regionales de todos los países que comparten estas fronteras, la generación de imágenes satelitales y aéreas para monitorear los bosques, una mayor vigilancia sobre las reservas y los parques, y la aplicación de las leyes y tratados de protección ambiental vigentes. Se requiere una enorme voluntad política.

Aunque la lejanía de ambas triples fronteras las ha protegido parcialmente de la extensa deforestación que ha afectado a otras regiones de la Amazonía, ya se están sembrando las semillas de la destrucción en estas importantes regiones de triple frontera.



Deforestación en el departamento de Guainía, Colombia, marzo de 2022. Fotografía de Luisa Acosta, InSight Crime

MINERÍA ILEGAL DE ORO



MINERÍA ILEGAL DE ORO

La minería ilegal es, de lejos, el delito ambiental más extendido y perjudicial en las regiones de triple frontera de la Amazonía.

A principios de la década de 1980, los buscadores de oro comenzaron a devastar las tierras de triple frontera del Amazonas.¹¹ Desde esa época comenzaron a utilizar personas pobres y en condiciones desesperadas, así como a las comunidades indígenas, como fuerza laboral disponible. Estas personas trabajan en operaciones de minería ilegal sofisticadas y estructuradas que les proporcionan maquinaria de excavación y dragado y les pagan en pequeñas cantidades de oro.

En Colombia y Venezuela, los delincuentes, que incluyen desde unos pocos hombres armados hasta facciones de grupos armados no estatales (GANE), cobran impuestos sobre las actividades mineras y los negocios que han surgido alrededor de los sitios de explotación. Entre dichos grupos se encuentran las ex-FARC,¹² formadas por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desmovilizaron en 2017, así como unidades del último grupo guerrillero que queda en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).¹³ La pandilla más poderosa de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC),¹⁴ también parece estar incursionando en el comercio ilegal de oro.¹⁵

Una extensa red de empresas criminales se encarga del lavado del oro. Usando flotas de avionetas, las compañías de transporte aéreo llevan suministros y sacan oro. En Brasil, los propietarios de estas empresas han sido investigados por facilitar la minería ilegal y el lavado de oro.¹⁶

En Colombia y Brasil, los comerciantes les compran el oro ilegal tanto a los buscadores particulares como a los propietarios de operaciones mineras. Los empresarios que poseen redes de empresas se benefician en todos los pasos de la cadena de oro ilegal.

Cuando el oro finalmente se funde, se pierden sus orígenes ilegales.

Balsas de dragado invaden los ríos colombianos

Las frondosas orillas de los ríos que atraviesan Brasil y Colombia resuenan con el estruendo de los “dragones”, enormes balsas de dragado que aspiran los lechos de los ríos mediante mangueras industriales para extraer partículas de oro.¹⁷

Los mineros brasileños circulan libremente por esta remota región amazónica.¹⁸ Según un militar colombiano, las balsas de dragado se construyen principalmente en el lado brasileño de la frontera, donde operan en gran parte sin control.¹⁹

En una foto aérea, en una curva del río Puré, que fluye desde Colombia hasta Brasil, se puede ver el techo de un dragón, así como los efectos del dragado constante. A un lado de la balsa, el río es claro, pero por el otro lado se ve turbio.²⁰ Lo que no se puede ver son los efectos del tóxico mercurio, utilizado para separar el oro, que se ha vertido en este paraje.²¹

Las balsas de dragado de oro invadieron por primera vez la Amazonía colombiana a principios de la década de 2000, cuando fueron vistas en el río Caquetá, que se convierte en el río Japurá en Brasil. Una década más tarde, sus operaciones se habían extendido por el río Putumayo, más al sur.²²



Una balsa de dragado en el río Pureté en la triple frontera (Cortesía Ejército Nacional de Colombia).



En septiembre de 2022, el ejército colombiano destruyó cuatro balsas de dragado en el río Pureté, que fluye desde Brasil hasta la región colombiana de Tarapacá (Cortesía Ejército Nacional de Colombia).

En los últimos años, han aumentado las operaciones de las dragas tripuladas por mineros ilegales en esta región fronteriza del Amazonas, particularmente en Tarapacá,²³ región colombiana que colinda con Perú y Brasil y se ha convertido en un foco de minería de oro gracias a los numerosos ríos que la atraviesan. El río Putumayo cruza la frontera sur de Tarapacá, y el río Cotuhé se cruza con el Putumayo allí. En el extremo noreste de Tarapacá, el río Puré pasa de Colombia a Brasil.

De los diez ríos analizados en 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el río Puré tuvo la mayor cantidad de minería ilegal de oro.²⁴ Algunos tramos de los ríos Putumayo y Cotuhé en Tarapacá también registraron bastante actividad el año pasado, según el informe de la ONUDD.²⁵

Las balsas de dragado ilegales de Brasil aprovecharon la reducción de los patrullajes militares durante la pandemia de COVID-19 para hacer incursiones en la región, según funcionarios del gobierno y activistas indígenas que trabajan en el departamento de Amazonas, Colombia. Jhon Fredy Valencia, secretario de agricultura y medio ambiente del departamento de Amazonas, afirma que la minería ilegal ha aumentado notablemente en los últimos años.²⁶

Tanto Valencia como el militar colombiano dicen que abordar la minería ilegal en la triple frontera es demasiado difícil. Para llegar al río Puré, por ejemplo, los agentes de seguridad tienen dos opciones. La primera es cruzar el río en una travesía que dura seis días desde Leticia, e implica ingresar a territorio brasileño, lo cual, debido a asuntos de soberanía territorial, requiere una coordinación de alto nivel entre los militares y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. La otra opción es llegar en helicóptero, pero esto alerta a los mineros y trunca la efectividad de las operaciones.²⁷

“Los mineros trabajan con balsas que se mueven fácilmente a través de los ríos y, cuando las operaciones militares se llevan a cabo en un solo lugar, simplemente cruzan la frontera”, cuenta Valencia.²⁸

De balsas de dragado a dragones

La mayoría de las balsas de dragado se construyen sobre tablones o troncos. Cada uno sostiene un motor de gasolina, a veces de un remolque viejo de tractor, y una manguera de unas 8 pulgadas de diámetro, o aproximadamente del tamaño de una pelota de fútbol. La manguera aspira el barro del lecho del río. El lodo arrastrado se empuja hacia una esclusa, que recoge sedimentos y partículas de oro, en tanto que la suspensión regresa al río.²⁹

La construcción de las balsas cuesta entre US\$8.000 y 10.000, y pueden producir unos 40 gramos de oro al día.³⁰ Esa cantidad se puede vender a nivel local por US\$400 o 600, y llega a valer hasta US\$2.000 en el mercado internacional. Sin embargo, este tipo de minería fluvial no se puede realizar durante todo el año debido a los cambios en los niveles del agua.³¹

Los llamados dragones son el tipo más grande de balsa. Suelen tener varios pisos y llevan equipos mucho más grandes, pesados y caros que los de las balsas pequeñas.³² Los dragones cargan motores de 60 caballos de fuerza y varias mangueras con diámetros de hasta 15 pulgadas.³³ La construcción de los dragones más grandes, elaborados de madera y metal con el fin de sostener dichos equipos, cuesta unos US\$45.000, según múltiples fuentes policiales.³⁴

Los brasileños son al parecer los principales operadores de las balsas. Antonio Torres, cónsul de Brasil en Leticia, dijo en agosto de 2022 que tres ciudadanos brasileños, dos hombres y una mujer, fueron encarcelados por cargos de minería ilegal.³⁵ En una operación en septiembre de 2022 en el río Puré, las autoridades colombianas arrestaron a seis ciudadanos brasileños.³⁶

Los colombianos también están involucrados. Por ejemplo, durante la confiscación de diez balsas de dragado en el río Puré en el año 2020, fueron arrestadas tres personas, dos ciudadanos brasileños y un colombiano.³⁷

Cómo funciona una draga típica

Las dragas operadas por mineros ilegales están invadiendo los cursos de agua del Amazonas que comparten Colombia y Brasil. La fiebre del oro es devastadora para los pueblos indígenas, que están siendo sometidos a altos niveles de mercurio tóxico.

La construcción de una draga cuesta entre 35 y 45 millones de pesos colombianos (unos US\$10.000).

Una draga puede producir en promedio unos 40 gramos de oro al día, con un valor aproximado de US\$2.000 en el mercado internacional.



3. Los motores utilizados para mover las bombas de succión suelen tener entre 5 y 16 caballos de potencia. A menudo se emplean motores antiguos de remolques de tractores.

4. El lodo fluye sobre una esclusa, atrapando el oro y los sedimentos.

2. Se utilizan mangueras de hasta 8 pulgadas de diámetro para aspirar el lodo del lecho del río

5. El sedimento de oro se mezcla con mercurio para lixiviar las partículas de oro.

Toma de la draga

1. Un buceador maniobra con una manguera por el fondo del cauce.

Buceador

Arenas negras

Oro en las profundidades de las grietas

Operador de máquina

Motor

Soportes flotantes

Manguera

Mayo 2023

Brasil tomó pocas medidas contra la minería ilegal durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022). Si bien las autoridades brasileñas destruyeron parte de la maquinaria pesada,³⁸ sus esfuerzos fueron mínimos en comparación con los estragos ambientales causados por los mineros ilegales, a quienes Bolsonaro animó con su permisiva agenda extractiva.³⁹ Sin embargo, con el regreso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, la postura de Brasil contra la minería ilegal ha tomado otro rumbo. Desde febrero de 2023, las fuerzas de seguridad de Brasil han estado llevando a cabo operaciones para expulsar a los mineros ilegales de las tierras Yanomami y destruir su maquinaria.⁴⁰

Las autoridades colombianas han tenido ciertos logros en la interceptación y destrucción de las balsas de dragado en la región. En 2021, destruyeron varias balsas de dragado ilegales en el Puré, según afirma José Reinaldo Mucca, director de asuntos indígenas en el departamento de Amazonas, Colombia.⁴¹ En septiembre de 2022, el ejército interceptó y destruyó cuatro balsas de dragado en el río Pureté.

Debido a su tamaño y a que constantemente están agitando los lechos de los ríos, los dragones son las dragas más fáciles de detectar desde el aire. Con el fin de ocultarlos, los mineros ilegales de oro les pintan los techos de verde y los ponen a navegar cerca de las orillas de los ríos, y en ocasiones han hundido sus propias dragas para evitar las labores de incautación.⁴²

Sin embargo, el gobierno colombiano no cuenta con los recursos adecuados para hacer patrullajes constantes o adelantar acciones por parte de los organismos de seguridad, o para instalar hombres en puestos militares en la selva. Los mineros han frustrado los intentos de vigilancia aérea e interdicción al monitorear las operaciones y cruzan a Brasil o Perú cuando detectan a las autoridades colombianas.⁴³ Esto, junto con las dificultades geográficas y la falta de coordinación entre los tres países, hace que detener la minería ilegal sea una tarea desalentadora.

La minería ilegal atrae innumerables actores criminales

Debido al costo de construcción de las balsas, es probable que los mineros reciban ayuda de financistas ilegales de oro en Brasil o Colombia. Una sola balsa puede recoger más de 14 kilos (494 onzas) de oro al año, cuyo costo puede ser de US\$150.000 o US\$200.000 a nivel local y ascender a los US\$877.000 a nivel internacional, según el precio internacional de una onza de oro en 2022.⁴⁴

El oro se procesa semanalmente en los ríos y se lleva a Brasil.⁴⁵ Una vez allí, se mezcla fácilmente con oro de otras fuentes y luego se blanquea. Los compradores colombianos también adquieren pepitas de oro directamente en las balsas y mueven el mineral a través de los mercados colombianos.⁴⁶

En el departamento de Amazonas, Colombia, la minería ilegal parece estar controlada parcialmente por grupos armados. En Tarapacá, un grupo conocido como los Comandos de la Frontera (del que se hablará en la sección de narcotráfico del presente informe) ejerce una influencia desmesurada y es probable que esté al frente de la minería ilegal.⁴⁷

El funcionario de derechos humanos que presta ayuda en el departamento de Amazonas dice que los Comandos de la Frontera se benefician no solo del narcotráfico sino también de la minería ilegal.⁴⁸ Mucca, el funcionario de asuntos indígenas coincide con la afirmación según la cual el grupo quizá está involucrado en ambas actividades.⁴⁹ Los seis brasileños detenidos en el Pureté en septiembre de 2022 estaban al “servicio” de los Comandos de la Frontera, según dijo a los medios el general Jaime Galindo, comandante de la Sexta División del Ejército.

“Desde el Cotuhé y más arriba, hay una mafia”, afirma Mucca.

Efectos de la minería ilegal en las comunidades indígenas

Las comunidades indígenas, que son la primera línea de defensa contra la minería ilegal que arrasa a la Amazonía, se han convertido en blanco de amenazas y ataques de las redes mineras.

La presencia de actores mineros en sus territorios ha dejado a las comunidades indígenas sin otra opción que ajustarse a las operaciones mineras. Esto genera todo tipo de dificultades para las comunidades, entre ellas la violencia, como señala un representante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

“En algunos sectores mineros ha habido denuncias de asesinato de líderes indígenas y desapariciones de algunos de ellos”, afirma el representante.⁵⁰

Las pocas oportunidades económicas en las zonas de triple frontera han llevado a algunas comunidades locales a luchar contra las incursiones de la minería ilegal. Los jóvenes suelen ser empleados como buzos que mueven las mangueras alrededor de los lechos de los ríos. Las mujeres son empleadas como cocineras y los hombres como operadores mineros. Les pagan en efectivo o en cupones que pueden canjear por artículos en algunas tiendas en Tarapacá.⁵¹

Mucca, dice que los líderes indígenas, o caciques, de algunas de las comunidades del Amazonas colombiano han hecho tratos con los buscadores de oro.⁵² En Tarapacá, por ejemplo, a algunos ancianos indígenas les pagaron 3 millones de pesos (unos US\$680) para que permitieran que las balsas mineras ilegales vertieran residuos en sus vías fluviales.

La minería suele ser realizada por grupos ilegales respaldados por patrones⁵³ que tienen la capacidad financiera para llevar equipos costosos a estos territorios, según dijo el representante de la OPIAC.⁵⁴

La minería ilegal también ha generado riesgos para la salud. Los sedimentos que contienen oro se mezclan con mercurio para extraer el oro, generalmente cerca de las vías fluviales o incluso en las propias balsas. Parte del mercurio sobrante se vierte de nuevo a las vías fluviales.

Según un estudio de 2018 sobre la contaminación por mercurio en la Amazonía colombiana, se descubrieron altos niveles en muestras de cabello de personas de las comunidades indígenas de Tarapacá.⁵⁵ De las nueve comunidades analizadas, todas tenían al menos el doble del umbral considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (una ingesta diaria de 1,6 partes por millón), y cuatro tenían niveles al menos siete veces superiores a ese límite. Es casi seguro que los niveles actuales serán más altos.

La intoxicación por mercurio puede afectar el desarrollo de los niños, dado que causa daños al cerebro y otras partes del sistema nervioso. El mercurio también puede ser tóxico para los adultos, pues causa daño cerebral y renal, así como ceguera y enfermedades cardíacas.⁵⁶

Según Valencia, el funcionario del gobierno colombiano en Amazonas, varios funcionarios del gobierno, la salud y la justicia han sostenido reuniones con comunidades indígenas para hablar sobre el tema del mercurio.

“No es solo cuestión de ir donde ellos y decirles que hay un problema”, dice. “También es necesario ofrecerles soluciones”, incluida la atención médica para los afectados.

ORO Y GUERRILLAS: EL PARQUE NACIONAL YAPACANA EN VENEZUELA

Los pozos de lodo son una señal de los sitios de minería de oro ilegales en el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela, donde existen imponentes mesetas y cascadas. En un video se puede apreciar⁵⁷ un montón de ramas de árboles mustios dispersos dentro de un cráter pantanoso.

El Parque Nacional Yapacana se encuentra en el suroeste de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia.⁵⁸ Según un informe de 2019 de SOS Orinoco, las operaciones mineras en la reserva aumentaron de aproximadamente 220 hectáreas en 2010 a más de 2.000 hectáreas en 2018, lo que equivale a unas 1.500 canchas de fútbol.⁵⁹ Al año siguiente, las operaciones mineras destruyeron 200 hectáreas más, y se pasó de 36 sitios en 2018 a 69 en 2019, según la organización.⁶⁰

De los países amazónicos, Venezuela tiene el segundo mayor número de minas ilegales, superado solo por Brasil, que es un país mucho más grande.⁶¹ De los 4.472 sitios de minería ilegal en toda la región, al menos 1.423 se encuentran en la Amazonía venezolana, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).⁶² Y Yapacana es el área minera más grande y menos regulada en toda la región de la Orinoquia y la Amazonia, como señala SOS Orinoco, el observatorio de la minería ilegal.⁶³

Las abundantes minas han dejado tierras desbrozadas en todo el parque, que es más grande que Luxemburgo.

El periodista y activista político venezolano Luis Alejandro Acosta, quien reside en el estado venezolano de Amazonas y ha viajado al Cerro Yapacana, dice que en los sitios mineros puede haber hasta 10 retroexcavadoras trabajando a la vez.⁶⁴

“La producción allí nunca se detiene”, dice. “Ni de día ni de noche”.

Una mina de oro de las ex-FARC Mafia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recurrido a la venta de oro ilegal para sostener su régimen frente a las sanciones y la fuerte disminución de la riqueza petrolera.⁶⁵

Las guerrillas colombianas están en gran parte al frente de la fiebre del oro en el Parque Nacional Yapacana.⁶⁶ Según Acosta, el predecesor de Maduro, el difunto Hugo Chávez, cedió el parque a los guerrilleros de las FARC a principios de la década de 2000.⁶⁷

Chávez les concedió la reserva a los guerrilleros en gran parte de la región fronteriza. Él veía a la fuerza insurgente como una herramienta estratégica a raíz de un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en abril de 2002, que le quitó el poder de manera temporal. Otorgarles refugio a las FARC también sirvió como protección contra una Colombia cada vez más hostil, aliado importante de Estados Unidos en la región.⁶⁸

Actualmente, Venezuela no es solo un refugio para las guerrillas. Las ex-FARC se han extendido por el territorio venezolano, tomando el control de las comunidades y las economías criminales. Y lo que antes era una guerrilla colombiana es ya un grupo binacional.⁶⁹

A principios de la década de 2000, la triple frontera le brindó amplias oportunidades de tráfico de drogas al Bloque Oriental de las FARC y su Frente 16,⁷⁰ el cual le exportaba unas 20 toneladas de cocaína al mes al narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa, alias “Fernandinho Beira-Mar” o “Fredy Seashore”. El comandante de las FARC Géner García Molina, alias “Jhon 40”, controlaba el contrabando de drogas en la región, manejando hasta 100 toneladas de cocaína al año, a la vez que satisfacía su inclinación por los caballos y los relojes Rolex.⁷¹

En ese momento, las FARC le prestaron poca atención al oro de Yapacana, aunque la minería ilegal se había estado dando allí desde la década de 1980.⁷² Según Acosta, la guerrilla solo comenzó a extorsionar a los mineros como una estrategia de ingresos alrededor de 2010.⁷³

Cuando las FARC llegaron a un acuerdo de paz en 2016, Jhon 40 y Miguel Díaz Sanmartín, alias “Julián Chollo”, estuvieron entre los primeros guerrilleros que se negaron a entregarse. Por el contrario, conformaron el Frente Acacio Medina de las ex-FARC, compuesto por exintegrantes del Frente 16, en la zona fronteriza entre el departamento colombiano de Guainía y el estado venezolano de Amazonas.⁷⁴

Julián Chollo, descrito como un “lobo solitario” que se unió a las FARC a la edad de 20 años, ahora controla la región de Yapacana, donde les cobra impuestos a los empleados de las operaciones mineras ilegales.⁷⁵

A la zona de Yapacana han llegado decenas de miles de mineros en búsqueda de oro. Allí hay alrededor de 25.000 personas cada día, aunque no todos son mineros. Algunos trabajan en los campamentos como cocineros, conductores y vendedores, según dice Acosta.⁷⁶

Las tarifas de Chollo son precisas: cinco gramos de oro por cada retroexcavadora en operación, tres gramos por tener un negocio, un gramo por cada barco que trae mineros y suministros, y así sucesivamente.⁷⁷

“Eso es mucho oro recolectado cada 15 días”, apunta Acosta. Además, las minas y máquinas más grandes, “las que extraen más oro”, le pertenecen a la guerrilla, agrega.⁷⁸

Un líder de la comunidad indígena de la región, que pidió hablar de forma anónima por temor a represalias, coincide con la afirmación de que las ex-FARC tienen el control total de Yapacana.⁷⁹ Los ancianos han hecho tratos con los guerrilleros, quienes les han dado motores, herramientas agrícolas y otros artículos a cambio del control de sus territorios, afirma el líder comunitario.⁸⁰

Para algunos indígenas, Chollo es como “un Robin Hood”, cuenta el líder indígena. “Si alguien quiere comprar una plancha, él se la da. Y de esta manera la comunidad ha sido comprada”, dice.⁸¹

Las comunidades también se enfrentan a una violencia amenazante.

“Invaden nuestros espacios amenazándonos”, dice otro líder indígena que también pidió el anonimato.⁸² “Somos sumisos ante ellos, y ellos son los que gobiernan, los que establecen las leyes”.

Líneas de suministro minero gravadas por el ELN

El río Orinoco y sus afluentes sirven como vías de paso hacia Yapacana. A unos 75 kilómetros río arriba en el Orinoco, se encuentra San Fernando de Atabapo, ciudad fronteriza venezolana donde el oro es la moneda principal. La comida y el alcohol se compran con “rayas”, pequeñas cantidades de oro que valen alrededor de US\$3.⁸³ El oro también se intercambia por artículos más grandes, como electrodomésticos.⁸⁴

La ciudad fluvial de Inírida, a unos 25 kilómetros al oeste de San Fernando de Atabapo, en el departamento de Guaviare, Colombia, sirve como centro de transporte.

Desde allí, grandes balsas comienzan un viaje de dos días hacia Yapacana, llevando maquinaria, combustible y otros suministros. Transportar 20 toneladas cuesta alrededor de US\$1.000, dice Acosta.⁸⁵

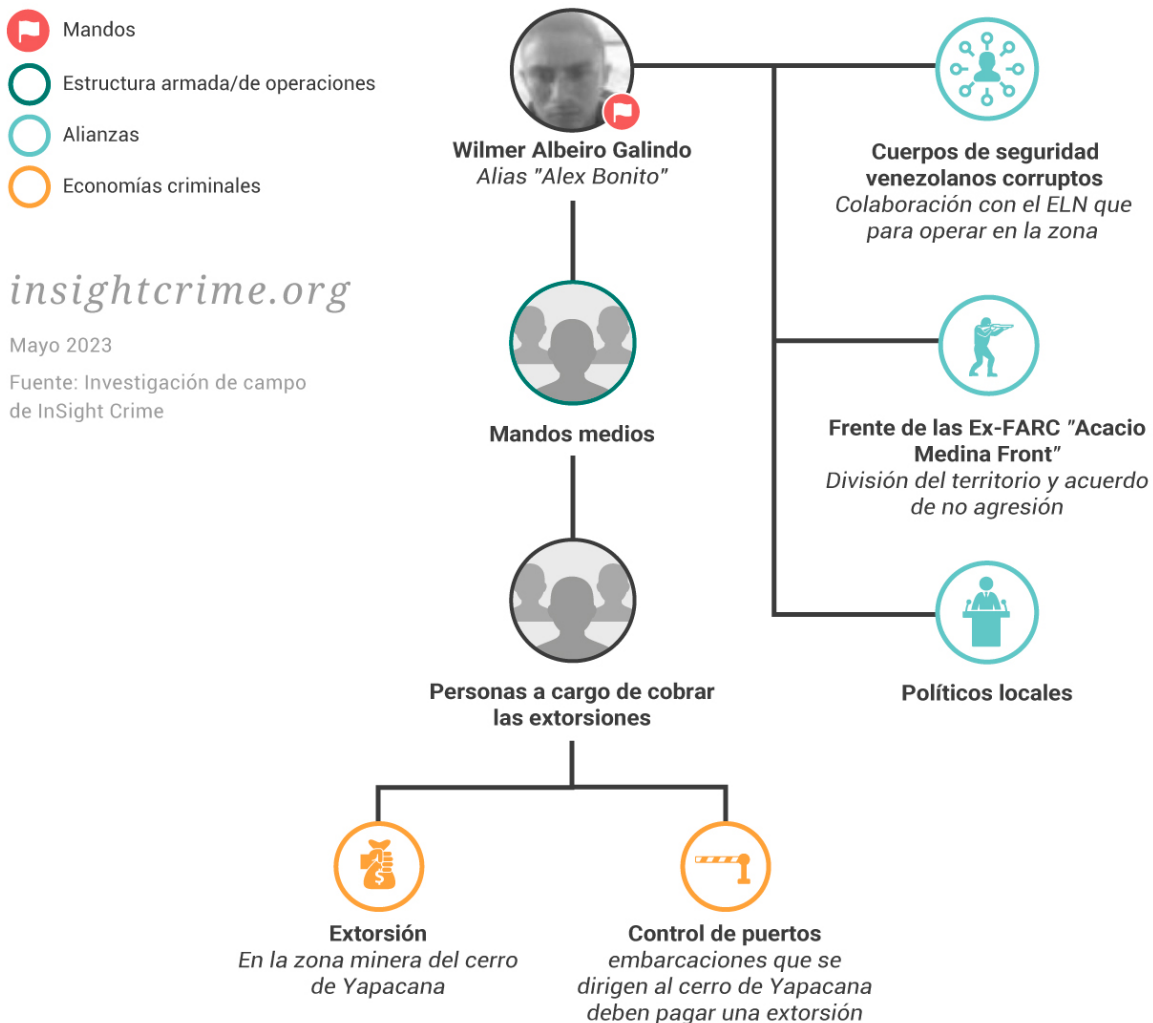
Las unidades de la guerrilla colombiana del ELN cobran por el paso de los barcos. Existen más de 50 puntos de control de este tipo, según un miembro de la comunidad indígena.⁸⁶

Más hacia el sur, desde el estado venezolano de Apure hacia Amazonas, los combatientes del ELN han librado una campaña a lo largo del río Orinoco. La desmovilización de las FARC en 2017, mediante un acuerdo histórico con el gobierno de Colombia en 2016, despejó el camino para que el Frente Daniel Pérez del ELN se trasladara a la región.⁸⁷

Wilmer Albeiro Galindo, alias “Alex Bonito”, dirige la unidad guerrillera, que llevó a cabo una ola de asesinatos cuando llegó en 2020. Inicialmente, hubo enfrentamientos entre miembros del ELN y las ex-FARC, pero ambos grupos han logrado delinear el espacio y mantienen una alianza incómoda.⁸⁸

“Coexisten, comparten, coordinan sus actividades, no sé cómo lo hacen”, dice un funcionario de una organización comunitaria indígena que pidió hablar de forma anónima por razones de seguridad.⁸⁹ “El ELN es más visible en la frontera. Están a lo largo del río Inírida, donde extorsionan y realizan minería ilegal. Las FARC hacen lo mismo, pero en Cerro Yapacana”.

Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN



LA FIEBRE DEL ORO ILEGAL ATRAE A GRUPOS CRIMINALES A LA RESERVA YANOMAMI DE BRASIL

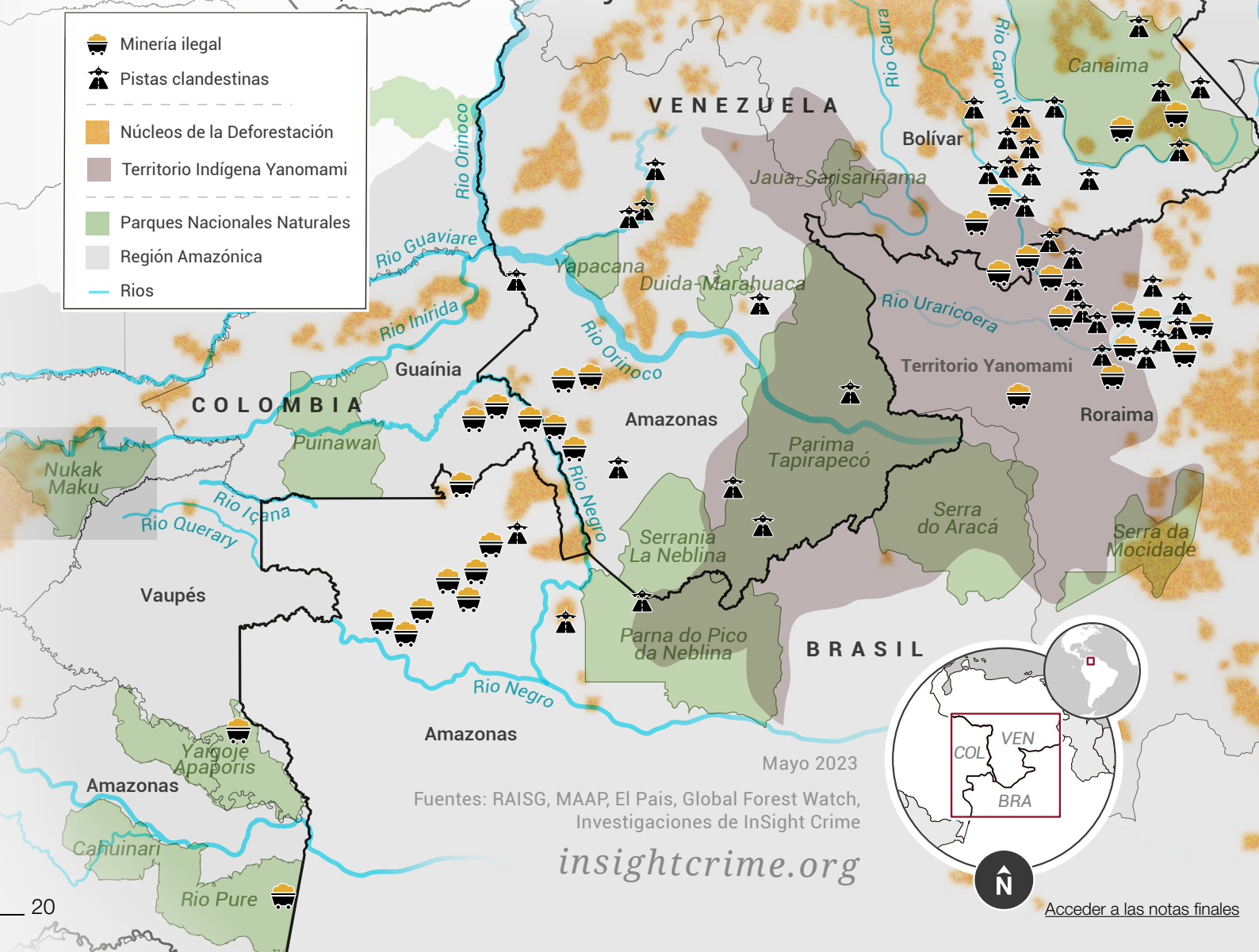
El 2 de octubre de 2022, el propietario de una carpa comercial en el río Uraricoera de Brasil recibió un mensaje de WhatsApp de un hombre que se identificó como miembro de los “lobos”, una banda armada de buscadores de oro ilegales.⁹⁰ Una vez leyó el mensaje, advirtió de un inminente ataque a un grupo de indígenas Yanomami reunidos allí.⁹¹

Antes de que los yanomamis pudieran huir, hombres armados llegaron en dos botes y abrieron fuego. Un joven Yanomami de 15 años recibió un disparo en la cara.⁹² Según se

puede ver en algunas fotos, una bala le dio en la mejilla izquierda y salió por la parte posterior de su cuello. Milagrosamente, el muchacho sobrevivió.⁹³

Un hombre Yanomami de 46 años, llamado Cleomar, no tuvo tanta suerte: murió cuando le dispararon en la frente y el pecho mientras se arrojaba al río tratando de escapar, como se lee en una carta enviada a las autoridades brasileñas por la Asociación Hutukara Yanomami (Hutukara Associação Yanomami), que representa al pueblo Yanomami en Brasil.⁹⁴

Minería ilegal y deforestación en la frontera entre Brasil, Venezuela y Colombia



“Lo que sucedió demuestra que la situación de inseguridad en el río Uraricoera, debido a la libre circulación de los mineros ilegales, no ha cesado y requiere una intervención urgente”, escribe el líder Yanomami Dário Kopenawa en una carta firmada el 4 de octubre de 2022.⁹⁵

Unos 20.000 buscadores ilegales han entrado en la reserva Yanomami, talando árboles y arrasando los lechos de los ríos.⁹⁶ De un tamaño mayor que el de Portugal, la reserva se extiende a lo largo de más de 105.000 km² en la frontera entre Brasil y Venezuela, lo que la convierte en el territorio indígena más grande del mundo.⁹⁷

El río Uraricoera, que atraviesa la zona norte de la reserva, es usado como autopista por las operaciones mineras criminales. Allí, diversas embarcaciones, desde botes de madera hasta grandes dragas que atraviesan la vía fluvial, transportan un flujo constante de mineros, suministros, equipos, alimentos, alcohol y combustible.⁹⁸

Los hombres armados que patrullan el Uraricoera en lanchas rápidas representan una de las pruebas más visibles de la propagación del crimen organizado en la minería ilegal de oro.⁹⁹ Las bandas les cobran impuestos a los mineros y a otras personas a lo largo del río, incluidos barqueros y comerciantes. El tráfico de drogas y los burdeles les aportan ganancias adicionales a las bandas.¹⁰⁰

Algunos de esos hombres armados hacen parte de las operaciones mineras. Otros presuntamente son integrantes de la pandilla criminal más grande y poderosa de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), que parece estar asumiendo un papel más importante en la minería ilegal en la reserva yanomami.¹⁰¹

También hay autoridades corruptas involucradas. Los miembros de una unidad élite de inteligencia regional han sido implicados en el abastecimiento de armas y acusados de tener vínculos con un hombre apodado “Soldado”, quien es descrito en una investigación policial como un jefe de “seguridad minera” en el Uraricoera.¹⁰²

Miembros del ejército que operan en Roraima, uno de los estados en los que se asienta la reserva Yanomami, han sido acusados de filtrar información sobre operaciones contra la minería ilegal y de recibir sobornos a cambio de hacerse los de la vista gorda frente al movimiento de drogas y oro, según el cubrimiento de los medios brasileños sobre los informes de inteligencia de la agencia gubernamental de asuntos indígenas (Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Funai).¹⁰³

Kopenawa, el líder Yanomami, dice en su carta que “hay temores constantes sobre la cantidad de mineros fuertemente armados que suben y bajan” por el río.¹⁰⁴

Mineros ilegales arrasan la selva

Las incursiones de mineros ilegales, conocidos en Brasil como *garimpeiros*, comenzaron en la década de 1980. Una década más tarde, en medio de presiones internacionales, el gobierno brasileño acabó con la mayor parte de la minería ilegal en la región.¹⁰⁵ La historia se repitió y la minería ilegal reinició en la reserva Yanomami durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, quien prometió desarrollar económicamente el Amazonas y aprovechar sus riquezas minerales.¹⁰⁶

Según un informe de la Asociación Hutukara Yanomami y la organización de la sociedad civil Instituto Socioambiental (ISA), un grupo de defensa de los derechos ambientales e indígenas, la deforestación en la reserva se duplicó, pasando de unas 1.200 hectáreas en 2018 a 3.300 (equivalentes a unas 2.400 canchas de fútbol) a finales de 2021, todo ello relacionado con la minería.¹⁰⁷ Más de la mitad de la minería de oro en la reserva se lleva a cabo alrededor del río Uraricoera.

La zona de la reserva que ha sufrido la peor deforestación durante los últimos dos años es Waikás, ubicada en el Uraricoera, al norte de Roraima. En 2020 y 2021, casi 2.600 hectáreas de bosque fueron destruidas allí por mineros que recorren el río sin ningún tipo de trabas.¹⁰⁸

Las operaciones mineras también han comenzado en la región de Auaris, al noroeste de la reserva, en límites con Venezuela. Según el informe de la Asociación Hutukara Yanomami y el Instituto Socioambiental, allí se han observado dos sitios mineros mediante imágenes satelitales: uno se encuentra en el lado brasileño de la frontera, y el otro en el lado venezolano. Ambos sitios son pequeños, pero parecen estar creciendo.¹⁰⁹

Los buscadores de oro ilegales también han invadido otros ríos. La minería cerca del río Parima se intensificó durante la pandemia de COVID-19, y se desbrozaron más de 100 hectáreas de bosque. Las tierras deforestadas alrededor de Xitei, en la cabecera del Parima, pasaron de 11 hectáreas en 2020 a 136 en 2021, el mayor aumento de cualquier región rastreada por el informe.¹¹⁰

El río Mucujái, que fluye hacia el este a través de la reserva hasta el municipio de Mucujái en Roraima, y sus bosques circundantes, han sido arrasados por operaciones mineras ilegales. En Homoxi, una región en la cabecera del Mucujái, una cadena de grandes pozos mineros aparece como un pequeño pueblo tallado en la vegetación, como se aprecia en una foto aérea.¹¹¹ En marzo de 2022, un pozo se tragó un puesto médico que prestaba servicios a la comunidad Yanomami.¹¹²

Un video tomado por mineros, que circuló en medios de comunicación locales en abril de 2021, los muestra alardeando de haber alterado el curso del Mucujái.¹¹³ Uno de los mineros filma el río sofocado por el limo, mientras dice: “miren cómo lo dejamos”. Luego se mueve y muestra una bomba y grandes mangueras. “Ahora estamos trabajando en el lecho del río”, dice.¹¹⁴

Este tipo de minería ilegal destruye la selva tropical: los árboles son cortados para cavar hoyos; allí se disparan fuertes chorros de agua para aflojar la tierra; las bombas de gasolina aspiran el lodo, que luego se lava sobre una gran esclusa. El sedimento extraído se mezcla con mercurio líquido, que se adhiere al oro. Usando unas sartenes pandas, los mineros calientan la amalgama resultante para formar pepitas.¹¹⁵

Este proceso envenena el bosque. Los árboles absorben el vapor de mercurio,¹¹⁶ y el proceso deja unas piscinas tóxicas, turbias y contaminadas con mercurio, que se filtran en las aguas subterráneas y en los ríos.¹¹⁷

El uso de mercurio amenaza a los Yanomami, que viven en grandes viviendas comunales circulares en las que habitan hasta 400 personas.¹¹⁸ Al igual que en las comunidades indígenas expuestas a este elemento en Colombia, se encontraron altas concentraciones de mercurio en las muestras de cabello de comunidades Yanomami cercanas a los sitios mineros.¹¹⁹ Un análisis del agua en la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, en el extremo occidental del parque nacional Yapacana, también halló altos niveles de mercurio.¹²⁰

El pescado, una parte importante de la dieta de los Yanomami, también está contaminado. Según un estudio de 2022, más de la mitad de los peces extraídos de los ríos Mucujái y Uraricoera tienen niveles de mercurio considerados insalubres para el consumo.¹²¹ La exposición prolongada al mercurio causa fatiga y deteriora el sistema inmunológico y los órganos vitales.¹²²

Júnior Kekurari, un líder Yanomami que dirige el consejo local de salud indígena ha descrito la actividad de los mineros que trabajan a una distancia de entre 50 y 200 metros de las comunidades Yanomami.¹²³

“Desde 2018, la tierra Yanomami ha sufrido mucho [...]. Los ríos están destruidos, solo hay barro, contaminado con mercurio, olor a gasolina [...]. Los niños juegan en el río y toman agua. La comunidad consume agua sucia”, explica Kekurari en una entrevista con el podcast Ao Ponto, del diario O Globo.¹²⁴

Garimpeiros y criminales encuentran una oportunidad dorada

Estrictamente hablando, el término *garimpeiro* se refiere a los mineros artesanales a pequeña escala, pero esta definición ya es obsoleta. La mayoría de las operaciones de *garimpo* ya no son artesanales, dado que utilizan maquinaria pesada, como balsas, dragas, tractores y excavadoras. Hoy en día, el término se usa más para referirse a los mineros ilegales en la Amazonía.¹²⁵

De las 174 toneladas de oro comercializadas entre 2019 y 2020, se estima que los *garimpeiros* son responsables de 49 toneladas, equivalentes al 28% de la producción de oro de Brasil.¹²⁶

La ley brasileña les permite operar legalmente, incluso en ciertas zonas de la Amazonía. Según la ordenanza DNPM 155, promulgada en 2016, cada *garimpeiro* puede extraer hasta 50 hectáreas en áreas designadas para ello, mientras que a las cooperativas mineras se les puede otorgar hasta 10.000 hectáreas.¹²⁷ La ley brasileña restringe el *garimpo* en tierras indígenas y en áreas ambientales protegidas.¹²⁸

Sin embargo, la ley brasileña no impone restricciones a las técnicas o equipos, a diferencia de los países vecinos, Colombia y Perú.¹²⁹ La ley colombiana exige el registro estricto de maquinaria a través del Ministerio de Transporte; por su parte, Perú, entre otras medidas, ha prohibido el uso de maquinaria pesada en la minería a pequeña escala.¹³⁰

Los mineros se han expandido rápidamente fuera de las áreas permitidas y han invadido regiones protegidas; para obtener oro, usan todo tipo de equipos, desde picos y motosierras hasta maquinaria pesada, como las retroexcavadoras. Las operaciones mineras ilegales en tierras indígenas aumentaron casi un 500 por ciento entre 2010 y 2020, según un estudio de MapBiomas, entidad que rastrea la transformación en el uso de la tierra en Brasil.¹³¹ En las áreas de conservación, el aumento fue de poco más del 300 por ciento.

La mayoría de los mineros provienen de comunidades rurales con sistemas educativos deficientes y pocas oportunidades de trabajo bien remunerado.¹³² Los mineros particulares suelen ser cooptados por entidades criminales que les suministran maquinaria a cambio de la mayor parte de su producto.

Los mineros se mueven entre los tres países de esta región fronteriza. Por ejemplo, los *garimpeiros* brasileños se han aventurado en la zona de los Yanomami ubicada en el lado venezolano, con el fin de establecer minas.¹³³ Según una investigación realizada por el medio de comunicación UOL, en la que se utilizaron videos, fotos, documentos y entrevistas con líderes indígenas, el número de mineros que cruzan la frontera oscila entre 500 y 5.000.¹³⁴

Los *garimpeiros* y otros tipos de trabajadores, provenientes de otras regiones de Brasil, son atraídos al territorio Yanomami por anuncios en las redes sociales que ofrecen diversos trabajos, como operadores de máquinas, conductores, pilotos y cocineros.¹³⁵

Al igual que en Yapacana, en Venezuela, la moneda en la reserva Yanomami es el oro. Los barqueros que transportan a los mineros por tramos largos y de difícil navegación en el Uraricoera ganan 10 gramos por pasajero.¹³⁶ A lo largo del río han surgido bares, burdeles y cantinas, así como en los alrededores de los sitios mineros.

En Brasil, los “propietarios” de las minas controlan todas las estructuras comerciales, logísticas y de campamento en el río Uraricoera.¹³⁷ Un ejemplo de supuesto propietario de una mina es Dona Iris, quien fue arrestada en junio de 2022 acusada de negocios con armas ilegales. En una declaración de arresto juramentada, reportada por O Globo, se dice que la mujer de 55 años utilizó propiedades en Alto Alegre, un municipio en el noreste de Roraima, para transportar suministros y personas a sitios de minería ilegal, donde empleaba a una escolta armada.¹³⁸ Según el informe de la Asociación Hutukara Yanomami e ISA, Dona Iris ordenó ataques contra aldeas Yanomami ribereñas en represalia por haber bloqueado las operaciones mineras.¹³⁹

Los propietarios de las minas cobran por el acceso a puertos improvisados, extorsionan a los mineros y gravan la venta de alcohol y otros productos. La prostitución y la venta de drogas también están bajo su control.¹⁴⁰ Las mujeres venezolanas que viajan a través de la frontera han sido atraídas a sitios mineros y explotadas sexualmente.¹⁴¹ Una mujer que habló con el medio de noticias brasileño *Folha de São Paulo* dijo que fue traficada por una señora que la convenció de ir a un sitio minero, donde fue violada.¹⁴²

El auge del comercio ilegal ha atraído a la región a actores criminales más peligrosos y les ha abierto el camino para ingresar al comercio ilegal de oro. Un video grabado en 2021 muestra a una banda armada que se mueve a toda velocidad en una lancha por el río Uraricoera.¹⁴³ En este video, los hombres, algunos de ellos encapuchados, cargan pistolas y escopetas. La cámara enfoca a un hombre con una camiseta roja y una gorra de béisbol, que lleva en su cuello una cadena de oro gruesa y un dije en forma de corona.

“Mírenos, mírenos, mírenos. Estos malditos indios creen que son los que mandan, pero nosotros somos los que mandamos. Somos el maldito jefe. Hoy vamos a ver cómo es que es esta mierda. Miren, miren, miren. Nosotros somos la guerra”.¹⁴⁴

Luego se descubrió que uno de los hombres que iba en la lancha, y que fue arrestado más tarde, era un fugitivo vinculado a la pandilla PCC.¹⁴⁵ Acusado de narcotráfico en 2013, Janderson Edmilson Cavalcante Alves había escapado de una prisión de Roraima y había huido hacia Venezuela, donde, en 2019, fue vinculado al robo de 100 rifles de un cuartel del ejército.¹⁴⁶

Para escapar de las autoridades en Venezuela, el hombre de 30 años se escondió en la región fronteriza de Brasil, donde traficaba drogas y servía como sicario de las operaciones mineras. El arresto de Cavalcante Alves, quien dijo a las autoridades que era miembro del PCC,¹⁴⁷ permite identificar la presencia de la banda criminal en la minería ilegal en territorio Yanomami.¹⁴⁸

Roney Cruz, jefe de una división de inteligencia del sistema penitenciario de Roraima (*Divisão de Inteligência e Captura do Sistema Prisional de Roraima*), dijo a los medios locales que los miembros de la pandilla PCC están activos en las minas. En una investigación del medio de noticias brasileño UOL, Cruz dijo que la pandilla incluso tenía un barco atracado en el Uraricoera, al que llamaban funeraria, pues era usado en misiones de muerte.¹⁴⁹

Tiene sentido que de alguna manera el PCC haya puesto su pie en las minas, dada la gran cantidad de actividad criminal que se presenta allí y el creciente poder del grupo en Roraima y en toda la región amazónica de Brasil.

La investigación de UOL va más allá, y sostiene que el líder de la pandilla, Endson da Silva Oliveira, alias “Bebezão”, y su hermano, Emerson, estructuraron las actividades del PCC a lo largo del Uraricoera. Los hermanos, que fueron asesinados en dos tiroteos distintos, tenían un cómplice que fue encontrado con equipos mineros en su casa.¹⁵⁰

Sin embargo, no está claro si el PCC solo tiene unos pocos miembros que han encontrado la oportunidad de actuar como operadores en las anárquicas minas, o si los miembros de la pandilla también se han infiltrado en los rangos más altos de las operaciones mineras.

Lo que está claro es que los criminales han actuado con impunidad en territorio Yanomami durante años y en ausencia de las autoridades. A pesar de ser el territorio indígena con el mayor número de operaciones de la policía federal, estas han sido ineficaces.¹⁵¹ La policía asegura que muchos operativos no se han llevado a cabo debido a la falta de apoyo logístico del ejército y otras instituciones federales.¹⁵² Otro puesto de seguridad del gobierno, conocido como Base de Protección Etnoambiental (Bape), que controlaba el acceso al río Uraricoera, ha estado inactivo durante varios años.¹⁵³

Algunos Yanomamis han intentado protegerse de la invasión de los mineros ilegales.¹⁵⁴

En 2021, los Yanomamis de Palimiú levantaron una barricada en el Uraricoera y detuvieron una lancha llena de mineros. Los jóvenes Yanomamis se llevaron unos mil litros de combustible, después de lo cual volcaron el bote. Sus acciones se dieron como represalia por el ahogamiento de un niño atropellado por la estela de un barco minero, según el informe de la Asociación Hutukara Yanomami e ISA.¹⁵⁵

Durante varios meses después, hombres armados pasaron en lanchas por las aldeas ribereñas de Palimiú, disparando con armas automáticas. Las amenazas violentas contra ellos continúan.¹⁵⁶

En su carta de octubre de 2022 a las autoridades, Kopenawa, el líder Yanomami, dijo que un minero conocido como “Brabo” le había advertido recientemente a la comunidad de Palimiú que “no se opusiera a la minería ilegal instalada en la región, si no querían que se repitieran los ataques de 2021”.¹⁵⁷

Brasil ataca la minería ilegal de oro en tierras Yanomami

La impunidad de la que han gozado los mineros ilegales y las redes criminales en el territorio Yanomami puede estar terminando. El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó al poder con la intención de revertir las acciones destructivas del medio ambiente de su predecesor, Jair Bolsonaro.

Durante su primer mes en el cargo, Lula visitó el estado de Roraima y el territorio Yanomami.

“Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno impermeable al sufrimiento del pueblo brasileño”, tuiteó Lula.¹⁵⁸

En enero de 2023, el ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino, anunció su intención de abrir una investigación, junto con la policía federal, sobre los crímenes que han sufrido los Yanomami, incluido el genocidio.¹⁵⁹

Al mismo tiempo, Lula dio un duro golpe a la minería ilegal en tierra Yanomami.¹⁶⁰ En febrero de 2023, agentes armados del Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) y de la Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) lanzaron una operación en la reserva Yanomami para expulsar a miles de mineros de oro ilegales.¹⁶¹ En esta operación han sido destruidos helicópteros, pistas de aterrizaje ilegales, maquinaria pesada, combustible y armas.¹⁶²

La fuerza aérea controlará el espacio aéreo que hasta hace poco no estaba patrullado.¹⁶³ Un sistema de radar móvil permitirá interceptar vuelos en el área, y la marina patrullará los ríos.¹⁶⁴

Para evadir las operaciones de seguridad, los garimpeiros están cruzando las fronteras hacia Venezuela y Guyana.¹⁶⁵ Y si bien esta es una pequeña victoria en la defensa del territorio Yanomami, también está generando un efecto colateral al desplazar a los mineros ilegales a otras regiones mineras en la cuenca amazónica.

Avionetas y pistas clandestinas usadas para la minería ilegal en la Amazonía brasileña

Es fácil detectar las avionetas y los helicópteros utilizados en las operaciones de minería ilegal: todos los asientos, excepto el del piloto, son extraídos de las aeronaves y remplazados por estanterías de metal y madera donde se ubican contenedores de gasolina.¹⁶⁶ Este combustible es llevado a pozos abiertos para activar motores, motosierras y maquinaria de excavación.

Las aeronaves aterrizan en diversas pistas de aterrizaje cerca de sitios mineros en toda la Amazonía brasileña.¹⁶⁷ La mayoría son poco más que caminos labrados en la selva. Algunas son pistas de tierra que ya existían y que fueron construidas para llevar medicamentos y trabajadores de la salud a las comunidades indígenas.¹⁶⁸

Una investigación del New York Times que examinó miles de imágenes satelitales que datan de 2016 halló 1.269 pistas de aterrizaje no registradas en la Amazonía brasileña. De estas, había 61 en tierras Yanomami.¹⁶⁹

Estas pistas de aterrizaje han sido otra puerta de entrada a la reserva Yanomami.¹⁷⁰ La mayoría de los vuelos despegan de Boa Vista, la capital de Roraima, más al este de la frontera entre Brasil y Venezuela.¹⁷¹

El negocio del oro ilegal en Boa Vista, Brasil

Cerca de Boa Vista, se encuentra el aeropuerto de Barra do Vento, un centro de transporte primario para los vuelos que entran y salen de la reserva Yanomami.¹⁷²

Los pilotos llegan allí en busca de un trabajo arriesgado que puede producir grandes ganancias en oro, según el medio de noticias de investigación Repórter Brasil.¹⁷³ Pilotean viejas avionetas de hélice que vuelan a baja altura sobre las copas de los árboles, navegando por el laberinto de pistas de aterrizaje de tierra. Algunos han aterrizado en la selva, para nunca más volver a ser vistos.¹⁷⁴

Los propietarios de las empresas de transporte aéreo se encuentran entre los principales actores presuntamente involucrados en la minería ilegal y el lavado de oro.

Dos figuras se destacan como ejemplos de este nexo ilícito: Valdir José do Nascimento, conocido como “Japão”, es presuntamente propietario de una flota de aviones utilizados para transportar alimentos, combustible e instrumentos a los sitios mineros, y para sacar oro de allí, según el Ministerio Público Federal de Brasil (Ministério Público Federal, MPF).¹⁷⁵ En una sola semana, los aviones de Do Nascimento realizaron unos 20 vuelos a las minas, según informó Repórter Brasil. Cada vuelo costó en promedio de 10 a 12 gramos de oro, afirman los fiscales.

Do Nascimento es el propietario registrado de siete Cessnas monomotor de la década de 1970, así como de un avión bimotor de nueve asientos. Los fiscales lo consideran el “mayor promotor de la actividad minera ilícita en la tierra indígena Yanomami”, como se lee en Repórter Brasil.¹⁷⁶

El piloto y empresario de aviación Rodrigo Martins de Mello también ha sido investigado por su participación en la minería ilegal.¹⁷⁷ En diciembre de 2022 fue acusado de extraer minerales sin autorización y de conformar una organización criminal, así como de otros delitos, según una denuncia presentada en un tribunal federal.¹⁷⁸

Durante una redada en 2021, a Martins de Mello, quien se postuló para el Congreso bajo el Partido Liberal (PL), el partido de Bolsonaro, en las elecciones de octubre de 2022, y que es partidario de los intereses mineros, se le incautaron varios helicópteros de su compañía de taxis aéreos y de su empresa de perforaciones ubicada cerca de Boa Vista.¹⁷⁹ Ambos negocios son objeto de una investigación policial sobre una red de minería ilegal que, según los fiscales, movió más de 200 millones de reales (unos US\$37,5 millones) en dos años.¹⁸⁰

Martins de Mello ha negado las acusaciones de participación en minería ilegal, afirmando que “hay mucha información fantasmiosa”.¹⁸¹

A pesar de que en los mítines de campaña se envolvió en la bandera, Martins de Mello, quien también es conocido localmente como “Rodrigo Cataratas”, perdió su candidatura al Congreso. Incluso después de su derrota, que fue un alivio para los activistas de derechos indígenas que temían que su elección le otorgara inmunidad judicial, Martins de Mello continuó manifestándose por los intereses de la minería de oro.¹⁸²

En una entrevista con Folha de São Paulo, Martins de Mello prometió “llevar el mensaje de la necesidad de resolver este conflicto entre los mineros de oro y las agencias federales”, y consideró a los mineros como “víctimas de abuso de autoridad por parte de agencias federales”.¹⁸³

Aproximadamente un mes después de las elecciones de octubre, un tribunal federal ordenó el arresto del hijo de Martins de Mello, Celso Rodrigo de Mello. La orden señalaba que Celso Rodrigo había participado en transacciones sospechosas y en un accidente de helicóptero en el que murieron dos personas.¹⁸⁴

Los nexos de las redes de lavado de oro

En el centro de Boa Vista se encuentra la “Rua do Ouro”, o “Calle del Oro”, donde docenas de pequeñas joyerías y distribuidoras de valores, o DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), compran abiertamente oro ilegal extraído en tierras Yanomami y otras zonas de la Amazonía.¹⁸⁵ Las puertas están teñidas y hay hombres que vigilan las entradas. La mayoría de las tiendas carecen de vitrinas. Según los reporteros de Amazonia Real que visitaron Rua do Ouro y hablaron con un orfebre allí, el oro se vende como sedimento o pepitas para ser luego ser refinado.¹⁸⁶

Buscadores de oro, conductores, cocineros y cualquier otra persona que tenga oro para vender hace uso de las tiendas. Los pilotos entregan allí grandes cantidades de oro a instancias de los operadores de minas ilegales.¹⁸⁷

Las tiendas sirven como el primer eslabón en la cadena de lavado de oro. Sin embargo, el mineral debe ser trasladado a otra parte del país para su exportación. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, el organismo responsable de otorgar y monitorear las licencias para los mineros, en Roraima no hay operaciones mineras legales.¹⁸⁸

La mezcla de oro legal e ilegal para la exportación suele ser realizada por redes afiliadas a operadores designados y a las DTVM, que son las entidades autorizadas por el Banco Central para comprar y vender oro en Brasil.¹⁸⁹

Según un estudio del Instituto Escolhas, que ha investigado a las empresas involucradas en el lavado de oro ilegal en Brasil, las cuatro DTVM más grandes de Brasil comercializaron unas 90 toneladas de oro, aproximadamente una quinta parte de la producción del país, entre 2015 y 2020. En su mayor parte, unas 79 toneladas (con un valor aproximado de US\$3.8 mil millones en ese momento), eran de origen sospechoso.¹⁹⁰

Algunas de las DTVM más grandes controlan toda la cadena de oro, comenzando con los títulos y permisos de minería. Dentro de las empresas asociadas a las DTVM se encuentran las que están involucradas en estudios geológicos, extracción y refinación, así como compra de oro en varios estados.¹⁹¹

Hasta ahora, las DTVM han podido evadir fácilmente la responsabilidad en la compra de oro. La Ley 12.844, promulgada en 2013, que regula la compra, venta y transporte de oro, requiere que los vendedores, no los compradores, demuestren que el oro es de origen legal.¹⁹² Los vendedores autodeclaran las fuentes de su oro, proporcionando copias de los números de permisos de minería, según cuenta Larissa Rodrigues del Instituto Escolhas de Brasil, que ha investigado a las empresas involucradas en el lavado de oro ilegal en Brasil.¹⁹³

La realidad es que cualquiera puede decir: “el oro vino de esta área, con el permiso minero X, y nadie lo comprobará”, afirma Rodrigues. “Las DTVM o las tiendas conservan estos formularios, y todo se considera que se hace de buena fe”.

Sin embargo, en abril de 2023, el Tribunal Supremo de Brasil impugnó tal “buena fe”, otorgando una orden judicial para suspender dicha práctica y ordenando el establecimiento de una nueva política regulatoria. Esta decisión apoya los esfuerzos del gobierno actual para actuar en contra de la minería ilegal de oro en tierras indígenas y en otras áreas protegidas.

Se ha acusado a los directores de las DTVM, a sus familiares y socios, de estar involucrados en la minería ilegal.

La Fiscalía Federal de Brasil ha intentado ir tras las DTVM. En agosto de 2021, los fiscales presentaron una demanda civil contra FD'Gold, Carol DTVM y OM DTVM, tres de las empresas más grandes de este tipo, acusándolas de introducir 4,3 toneladas de oro ilegal en los mercados nacionales e internacionales durante dos años.¹⁹⁴ La demanda pide que se suspendan sus operaciones y que las empresas sean multadas con 10.600 millones de reales (unos US\$2.000 millones) por daños sociales y ambientales.

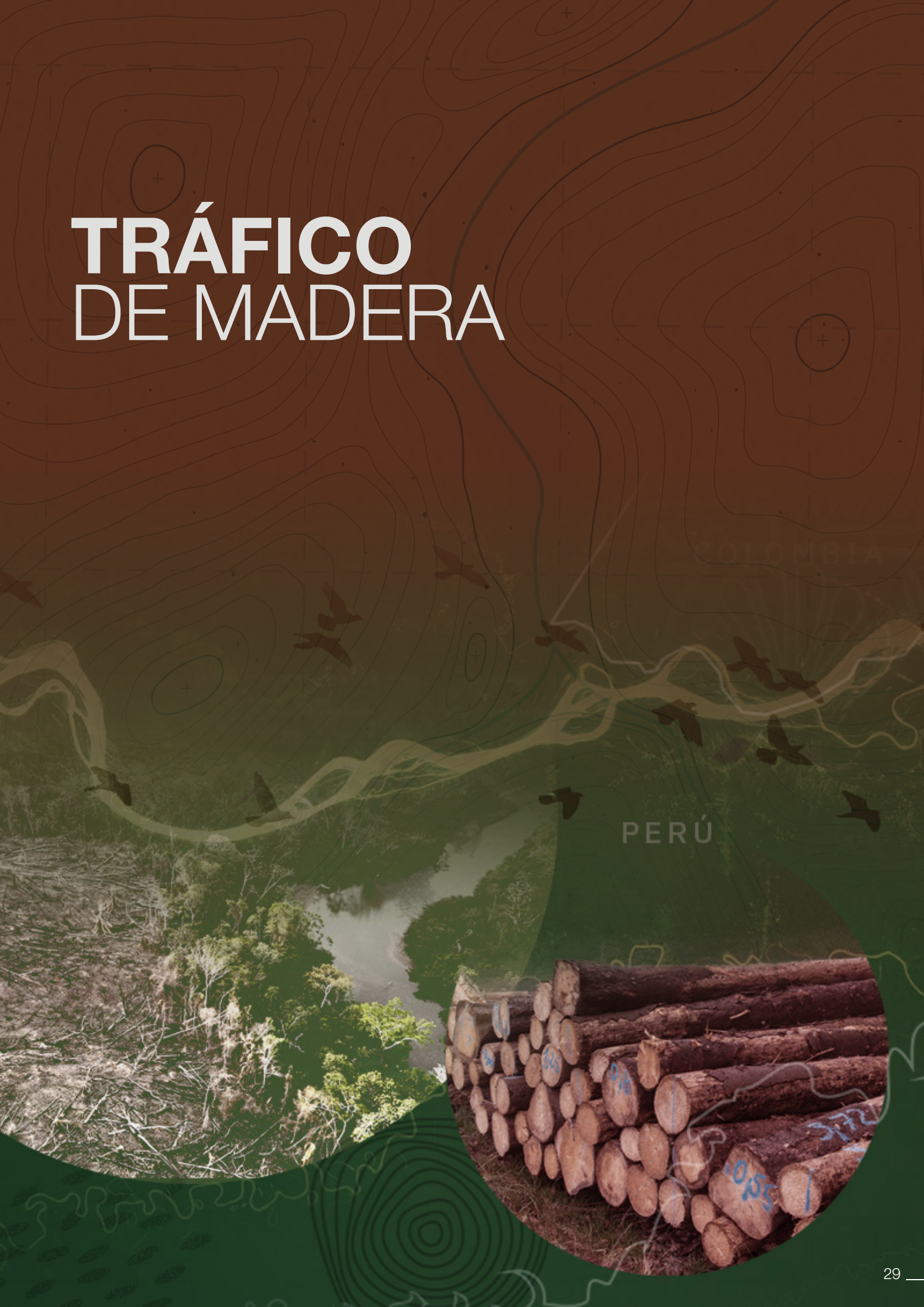
Una DTVM ha sido acusada de orquestar una vasta red que lavaba oro del territorio Yanomami.¹⁹⁵ La red se conoció después de una redada policial en 2015, en la que se desmanteló una mina de unos 600 buscadores de oro que operaban al norte de la reserva.¹⁹⁶

Según la policía y los fiscales, más de dos docenas de tiendas que compraban oro en Boa Vista recibieron el mineral producido ilegalmente, que luego fue refinado y enviado a 30 empresas mineras legítimas pertenecientes a DTVM en las ciudades de Manaus, en Amazonas; Itaituba y Santarém, en Pará; y Porto Velho, en Rondônia.¹⁹⁷ Se falsificaron documentos con el fin de indicar que el oro provenía de minas legales en tres estados. Las compañías mineras también fundieron el oro en barras de 250 gramos que luego se enviaron a la DTVM.¹⁹⁸

A través de esta red, la DTVM recibió alrededor de dos toneladas de oro por año, según el jefe de una unidad regional contra el crimen organizado que habló con Amazonia Real. Sin embargo, la DTVM acusada nunca fue identificada públicamente.¹⁹⁹

Desde que Lula asumió el cargo, ha lanzado una cruzada para fortalecer la laxa legislación que ha facilitado el lavado de oro en Brasil. Uno de los primeros pasos ha sido la introducción de la Resolución N.º 129 de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, la agencia responsable de inspeccionar los sitios mineros.²⁰⁰ Con la implementación de esta resolución, los compradores de oro ahora deben contar con sistemas establecidos para demostrar que el oro que compran no es de origen ilegal.²⁰¹

TRÁFICO DE MADERA



COLOMBIA

PERÚ

TRÁFICO DE MADERA

La que fuera una selva virgen ahora siente las manos depredadoras de los traficantes de madera en las dos regiones de triple frontera de la Amazonía.

Los taladores ilegales han comenzado a emigrar hacia el norte de la Amazonía brasileña. Según un estudio de 2019 sobre la tala ilegal en el Parque Nacional Anauá, taladores y aserradores se están mudando de los estados brasileños de Mato Grosso, Pará y Rondônia hacia Roraima, en la frontera con Venezuela y Guyana. Ha llegado a considerarse la región como un “nuevo bosque dorado”, gracias a las grandes extensiones de bosque, el bajo costo de la tierra y los escasos controles sobre la tala y la deforestación, según anotaron los autores del estudio.²⁰²

El aprovechamiento ilegal de madera en las regiones de triple frontera es más prevalente en las selvas amazónicas de Perú, donde una operación multinacional con muchos tentáculos busca especies de madera dura, como sangretoro (*Virola calophylla*), achapo (*Cedrelinga catenaeformis*) y cedro (*Cedrela odorata*). Los árboles se derriban, se transforman en tablones y terminan exportándose. El proceso incluye la legitimización de la madera mediante licencias de tala y transporte, aserradores e intermediarios antes de su envío a capitales regionales, como Bogotá, Colombia, y Lima, o a mercados internacionales, como China.²⁰³

Un poblamiento en la triple frontera construido sobre madera

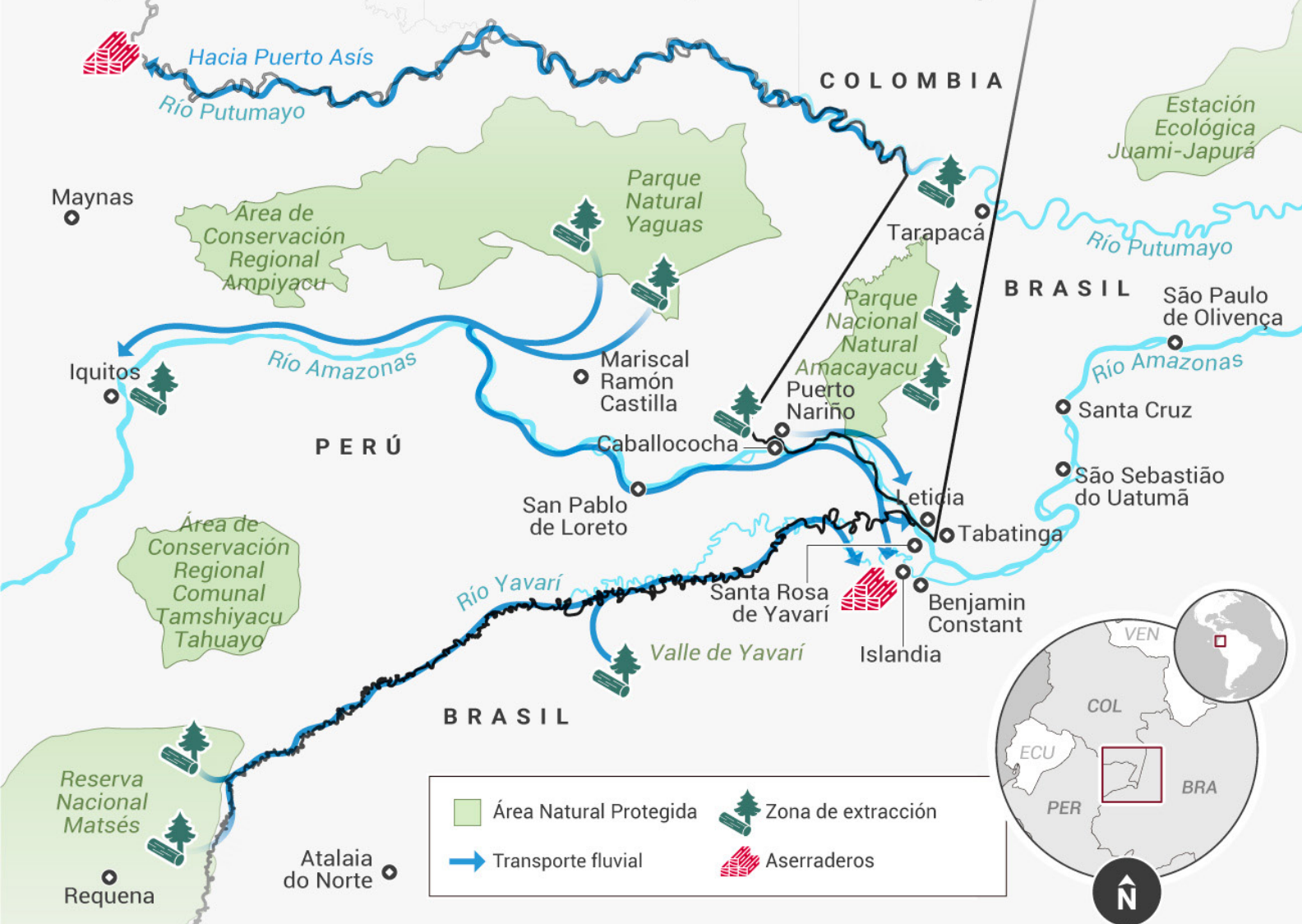
Enclavada en una curva del río Yavarí cerca de las fronteras de Colombia y Brasil, la ciudad peruana de Islandia se ubica en una posición ideal para recibir cargas de madera.

“En Islandia, hay aserraderos gigantes”, dijo un miembro de la comunidad indígena de Fray Pedro de Perú. “Los taladores de la zona llevan mucha madera a Islandia para procesarla allí”.²⁰⁴

No es fácil establecer el origen de esta madera recién procesada.²⁰⁵ Los aserraderos usan múltiples mecanismos para camuflar sus actividades ilegales, incluyendo la falsificación de los registros de la madera que entra y sale de las instalaciones.²⁰⁶

Parte de la madera procesada en Islandia se lleva a Leticia, en Colombia, a solo 45 minutos río arriba en barco. Los cargamentos son pequeños, evaluados en menos de US\$1.000 por pieza, para evitar impuestos o aranceles de importación. Según un informe de 2019, de la Agencia Ambiental de Investigaciones británica (Environmental Investigation Agency, EIA), dedicada al estudio de los delitos ambientales, unas 250 familias en la población vecina de Puerto Nariño, en Colombia, compran madera de los aserraderos de Islandia.²⁰⁷

La cadena de extracción de madera en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil



1. Valiosas especies de madera son taladas.



2. La madera se transporta por vía fluvial, usando permisos de transporte, hacia los aserraderos de la zona, la mayoría de ellos ubicados en la localidad peruana de Islandia.



3. En los aserraderos la madera se corta en tablas, vigas y tablones, un proceso conocido como transformación primaria. También puede tener lugar un procesamiento secundario, donde se construye en puertas, mesas y pisos.



4. La madera procesada termina en ciudades como Bogotá, Colombia o Lima, Perú. También se vende en los mercados internacionales de Estados Unidos y China.



insightcrime.org

Mayo 2023

Fuentes: Trabajo de campo de InSight Crime y Agencia de Investigación Ambiental (EIA)

Las importaciones de madera deben ser autorizadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para garantizar el manejo legal de la madera. Pero la investigación de la EIA halló que la ANLA no autorizó ninguna importación de madera a Leticia entre 2015 y 2019, a pesar de que en dicho periodo llegaron casi 10.000 metros cúbicos (m3) de tablonos de madera a la ciudad. Ante esto, se ve la posibilidad de que los pequeños cargamentos de madera no solo evadan los impuestos, sino también los controles de la ANLA. Gran parte de la madera importada a Colombia no declara absolutamente nada, según el informe de la EIA.²⁰⁸

En 2012, un informe del Banco Mundial reveló que cerca del 80% de la madera peruana se extraía de manera ilegal,²⁰⁹ y Rolando Navarro, exdirector del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), entidad encargada de vigilar y controlar el uso la vida silvestre y los recursos forestales en Perú, confirmó que las cosas no han cambiado.

‘Patrones’ madereros explotan a las comunidades indígenas

Los patrones de la madera buscan a las comunidades indígenas de Perú por su capacidad para tramitar licencias y concesiones para extraer madera en sus territorios.²¹⁰ Los patrones prometen empleos y ganancias a las comunidades, pero con frecuencia solo responden con explotación.

En Perú, la madera aprovechada está bajo la protección de las autoridades ambientales mediante concesiones forestales y licencias de tala.²¹¹ Se supone que los Planes Operativos Anuales (POA) sirven como controles, pero terminan usados como fachada para el aprovechamiento ilegal de la madera, pues la información de esos planes puede falsificarse y muchas veces no se verifica.²¹²

Un experto forestal peruano, que habló de manera confidencial por razones de seguridad, declaró que las comunidades indígenas Matsés en Loreto terminaron por lamentar los acuerdos de negocios con el presunto patrón maderero, Teodulfo Palomino Ludeña.

En 2013, Palomino se acercó a la comunidad indígena Matsés de Fray Pedro, que se encuentra cerca de la frontera con Brasil, y se presentó como alguien en el negocio de la madera que ofrecía empleo y ayuda económica, incluyendo ayuda para que los jóvenes tuvieran acceso a la educación superior, como relató un miembro de la comunidad de Fray Pedro, quien habló en condición de anonimato por temor a las represalias.²¹³

La comunidad de Fray Pedro acordó hacer negocios con Palomino.²¹⁴ En noviembre de 2013, la comunidad firmó “un contrato exclusivo de suministro y comercialización” con él y su empresa Lanc Forest SAC, que le permitía la tala activa en el territorio de la comunidad, según documentos de la fiscalía de Loreto.²¹⁵

En 2019, recayeron sospechas sobre Palomino cuando varios agentes de Osinfor vinieron a inspeccionar los planes de manejo y Palomino se mostró nervioso. “No entendíamos por qué se ponía tenso si se suponía que estaba haciendo todo correcto”, comentó el integrante de la comunidad de Fray Pedro. “Y nos pidió que no dejáramos que Osinfor entrara a inspeccionar”.²¹⁶

A Palomino le preocupaban los árboles en pie que deberían haber sido talados, señaló otro miembro de la comunidad de Fray Pedro. Los árboles aparecían como beneficiados en el plan de manejo forestal, lo que indicaba que los árboles debían haberse extraído en otro lugar, prosiguió el miembro de la comunidad. Al ver los árboles aún en pie, los inspectores del Osinfor sospecharían que había inconsistencias en la información presentada en el plan de manejo.

Poco después, los líderes de la comunidad se enteraron de una larga lista de irregularidades, que incluían el presunto aprovechamiento de volúmenes excesivos de madera, y el uso del plan de manejo de la comunidad para legalizar madera extraída ilegalmente.²¹⁷

Palomino también alteró presuntamente los registros de la comunidad, falsificando las firmas de los líderes en las actas.

“Palomino quería quitarnos más de 80.000 hectáreas de tierra y dijo que supuestamente le íbamos a donar el territorio a él”, agregó el miembro de la comunidad.

La comunidad denunció que el libro de actas se había perdido.

Palomino, a quien no pudimos contactar para que comentara al respecto, dejó de extraer madera del territorio de Fray Pedro, pero la comunidad sigue padeciendo las consecuencias de sus acciones. Las autoridades forestales los multaron con casi 200.000 soles (unos US\$50.000) por violaciones y se suspendió la licencia de tala de la comunidad y la aprobación de otros planes de manejo en el territorio.²¹⁸

Lavado de madera ilegal en la capital del Amazonas peruano

Los principales clientes de los aserraderos de Islandia están en Iquitos, la capital del extenso departamento de Loreto, en la Amazonía peruana. Iquitos es un importante centro de tránsito y procesamiento de madera, y los intermediarios madereros son reconocidos por lavar madera ilegal.²¹⁹

Por ejemplo, los fiscales peruanos acusaron a Elizabeth Lazares de La Cruz, gerente de una empresa maderera registrada en Iquitos, de hacer parte de una colosal red de tráfico conocida como “Los Duros del Amazonas”.²²⁰

Según los expedientes judiciales revisados por el medio de comunicación Ojo Público, Lazares de La Cruz está sindicada de haber usado la empresa para blanquear madera extraída ilegalmente de la Amazonía peruana, incluido el departamento fronterizo de Loreto.²²¹

Navarro, exdirector del Osinfor, señaló a Lazares de ser intermediaria de la red y dijo que tenía contactos en el gobierno regional de Loreto y los aserraderos locales. Lazares también tenía documentos requeridos para hacer ver legal la madera ilegal, y luego vender la madera lavada a contactos en Lima y en el exterior.²²²

“Ella inspecciona el producto en el campo y se asegura de responder a los pedidos de las empresas”, comentó Navarro. “Ella hace el trabajo sucio; es la persona que se ensucia los zapatos”.²²³

COCA Y NARCOTRÁFICO

PERU



COCA Y NARCOTRÁFICO

La selva compartida por Perú, Colombia y Brasil es una fachada ideal para el cultivo y procesamiento de coca. Como resultado de ello, se ha desarrollado una cadena de tráfico de cocaína allí —que se inicia con la coca sembrada en Perú. La infraestructura criminal creada para alimentar esa industria también protege y promueve los delitos ambientales, como la deforestación ilegal, el tráfico de madera y la minería ilegal de oro. Las zonas remotas tienen poca presencia estatal y el denso dosel arbóreo vuelven casi invisibles las actividades ilícitas y los grupos armados.

La triple frontera, donde se unen Colombia, Brasil y Perú, mantiene su posición histórica

como corredor de tránsito de cocaína.²²⁴ Aunque no tiene fama de ser centro de producción de narcóticos, es posible que en la parte venezolana haya nuevos cultivos de coca.

Un piloto en Puerto Ayacucho, ciudad del estado de Amazonas, en Venezuela, afirmó haber visto sembrados de coca al noroeste, en los municipios de Autana y Maroa.²²⁵

Aunque el piloto no pudo ofrecer más detalles sobre los sembrados de coca en esa región, una investigación de InSight Crime halló en 2022 que los cultivos de coca están extendiéndose en la frontera de Venezuela con Colombia.²²⁶

Narcotráfico en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil



Una explosión de plantas de coca en el Amazonas peruano

Hasta hace pocos años, la región de la triple frontera en Perú estaba relativamente libre de coca. Pero ahora, la delincuencia derriba extensiones de frondosa selva tropical a lo largo del río Amazonas para abrir paso al cultivo ilícito.

La siembra de coca en la Amazonía peruana se consolidó inicialmente al sur de la triple frontera, en el valle del Alto Huallaga, que se extiende por 322 kilómetros a lo largo del río Huallaga en el centro de Perú.²²⁷ A comienzos de la década de 2010, los cultivos masivos de la industria de la cocaína se desplazaron al sur, al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una región selvática montañosa un poco más extensa que Puerto Rico, conocida por su acrónimo en español, VRAEM.²²⁸

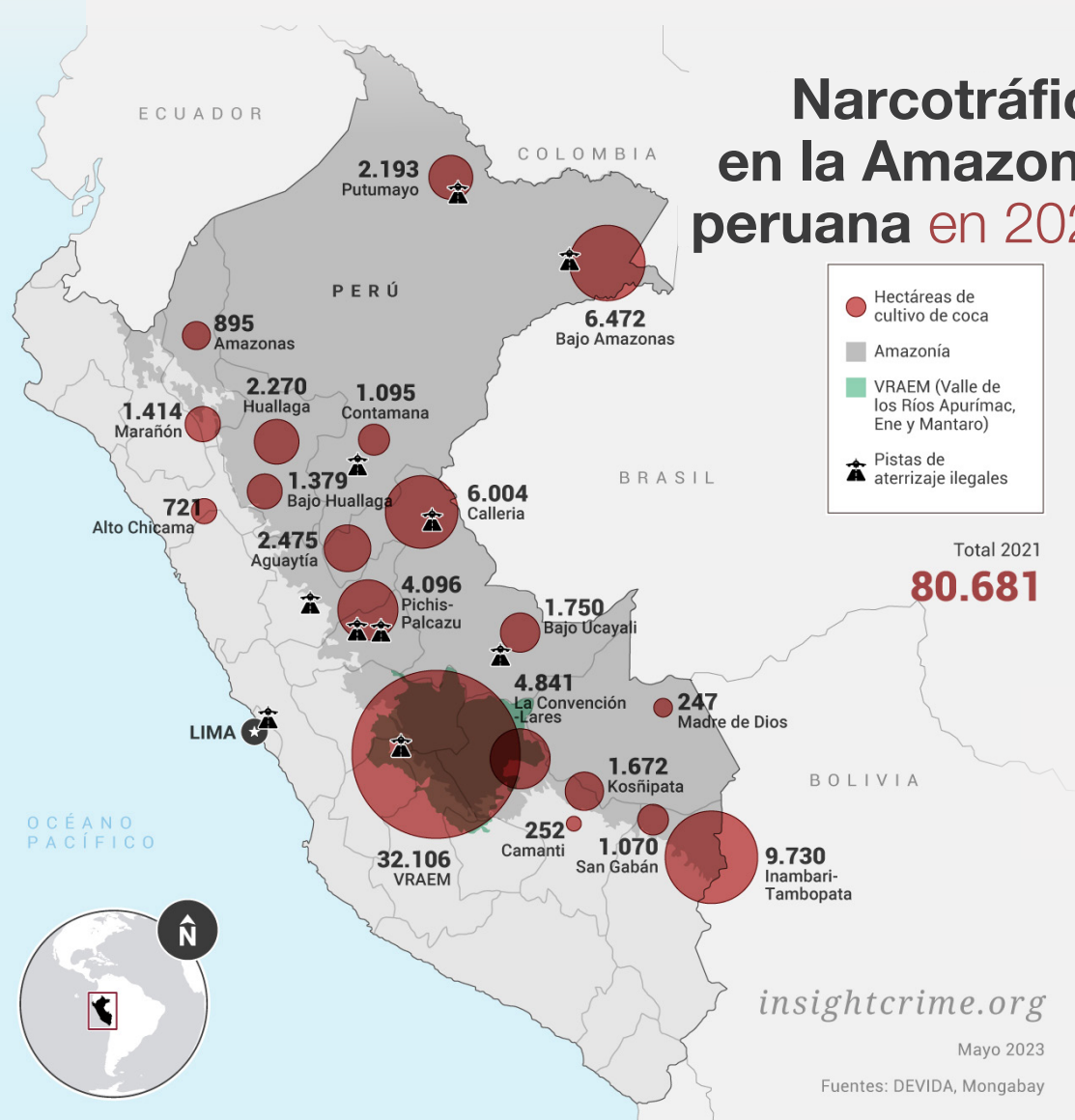
Durante una década, una facción de la guerrilla Sendero Luminoso²²⁹ se ha refugiado en el VRAEM, vigilando cultivos de coca y trasegando cocaína para diferentes clanes.²³⁰ En ocasiones, el gobierno ha intentado erradicar coca en el VRAEM con pocos resultados, pero la presencia del ejército parece haber desplazado el cultivo de coca a otras zonas del país —entre las que se destaca la región selvática del Amazonas a lo largo de la triple frontera de Perú con Colombia y Brasil. Anteriormente, los sembrados de coca habían sido mínimos allí.

Loreto, el extenso departamento al noreste de Perú, que abarca más de la mitad de la Amazonía del país, registró solo el 12% de la coca cultivada en Perú en 2004.²³¹ La provincia de Mariscal Ramón Castilla, en ese departamento, cuyo extremo este limita con Colombia y Brasil, solo registraba 440 hectáreas de coca. En 2012.²³² Para 2020, la zona ocupada por los arbustos de coca en la región de Bajo Amazonas, en Loreto —en la que se encuentran Mariscal Ramón Castilla y las provincias vecinas de Maynas y Requena— se expandió a 4.247 hectáreas, según un informe de 2021 del Observatorio Peruano de Drogas.²³³ El número aumentó más de 50% a 6.472 hectáreas en 2021, según el informe de 2022 del observatorio.²³⁴

Agentes de seguridad tanto en Colombia como en Perú coincidieron en que se está aumentando el cultivo de coca en la región fronteriza de Perú.²³⁵ Juan Mojica y Santos Mojica, líderes de la comunidad indígena colombiana de Nazareth, casi a una hora subiendo por el río Amazonas desde Leticia, señalaron que los cultivos que se están haciendo en el lado peruano del río se han vuelto un problema para su comunidad.²³⁶

Grupos de gente, entre los que se cuentan adolescentes en edad escolar, cruzan el río para trabajar como raspachines, o jornaleros para cosechar y procesar las hojas de coca, dijeron.²³⁷

Narcotráfico en la Amazonía peruana en 2021



insightcrime.org

Mayo 2023

Fuentes: DEVIDA, Mongabay

Comunidades pobres indígenas y rurales en la provincia peruana de Mariscal Ramón Castilla reciben dinero para sembrar coca, según una investigación del diario peruano La República.²³⁸

Los traficantes también pagan a las comunidades por sacos con hojas de coca, conocidos como arrobos.²³⁹ En algunos casos, negocian con líderes comunitarios para acordar pagos mensuales por acceso a sus territorios.²⁴⁰ Los libros de contabilidad que mantienen las juntas comunales contienen incluso rubros para alquiler de tierras a traficantes y proyectos financiados por ellos, según el reportaje de La República.²⁴¹

Pistoleros asociados a traficantes también han invadido tierras de las comunidades para instalar cultivos de coca.²⁴²

Un funcionario de la alcaldía de Mariscal Ramón Castilla, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por motivos de seguridad, comentaba que temía que la provincia amazónica se convirtiera en otro VRAEM para

los traficantes.²⁴³ Los cultivos de coca se han duplicado allí en los últimos cuatro años y sus 6.362 hectáreas de coca representaban casi el total de los cultivos ilícitos en el Bajo Amazonas en 2021, según el informe más reciente sobre la droga. El Bajo Amazonas fue la tercera área más cultivada en el país.²⁴⁴

“Nos encontramos en una zona que no es prioridad para el Estado”, reconoció. “Esa es una de las razones detrás del incremento de los cultivos de coca. Aquí estamos por nuestra cuenta”.

Durante años, las autoridades peruanas han dirigido sus campañas antinarcóticas hacia el VRAEM. Por otro lado, las autoridades han ignorado la triple frontera mientras que las redes criminales aprovechan la infraestructura natural del área. Sus numerosas arterias fluviales y la densa selva conectan a Colombia y Perú, los principales centros productores de la droga y uno de los puntos de salida internacional de la cocaína, por Brasil.

Los operativos a rudimentarios laboratorios en la selva, en las provincias peruanas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, revelan que allí no solo siembra coca, sino que también se procesa.

Las autoridades han anunciado decomisos de tambores de gasolina, cemento y cal, todos insumos para la producción de la pasta base de cocaína.²⁴⁵

Por ejemplo, un operativo en marzo de 2020 terminó en la destrucción de dos laboratorios cerca del río Orosa, a medio camino desde Leticia por el río Amazonas.²⁴⁶ El campamento tenía media docena de tanques de 2.000 litros, que se usan para mezclar las hojas de coca con solventes.²⁴⁷ En febrero de 2021, se descubrieron 600 kilos de cocaína procesada en un campamento en el río Atucari, a lo largo de la frontera entre Colombia y Perú.²⁴⁸

Los delitos ambientales y de narcotráfico también parecen ir de la mano. Por ejemplo, un operativo realizado en 2019 en Mariscal Ramón Castillo llevó a dismantelar construcciones de madera en las que se almacenaban hojas de coca, cocaína y madera ilegal.²⁴⁹

No se sabe con certeza quién controla el cultivo y procesamiento en los laboratorios de coca de la región de la Amazonía, al noreste de Perú.

Agentes de seguridad colombianos mencionaron un grupo conocido como Clan Chuquizuta. Las comunidades indígenas y rurales de Mariscal Ramón Castilla describieron a los traficantes que les pagan en términos generales como “narcobenefactores”.

Lo más plausible es que los traficantes peruanos que operan en esta región sean actores independientes que proveen a grupos brasileños y colombianos.



A lo largo de las riberas del río Amazonas en Perú se está sembrando coca. Santa Rosa de Yavarí, Perú, agosto de 2022. Fotografía de Seth Robbins

Santa Rosa es una isleta en el Amazonas, en territorio peruano, que está adyacente a Leticia, en Colombia, y a la ciudad fronteriza brasileña de Tabatinga. Grandes lanchas a motor con cubiertas plásticas llevan a los habitantes hacia y desde el puerto de la isla, que no es más que un muelle en madera.

Un soldado que presta guardia en el puerto declaró que los traficantes en su mayoría evitan la isla. En lugar de eso, pasan de noche, usando vías fluviales más pequeñas para evadir los controles, dijo.²⁵⁰

Al norte de la isla en un tramo amplio del río están las comunidades de Gamboa y Chinería. Un alto oficial del ejército peruano, que solicitó se mantuviera su anonimato por no tener autorización para hablar, dijo que había oído hablar de cultivos de coca en ese lugar.²⁵¹

Grupos armados, rutas de drogas y delitos ambientales

El río Amazonas y su vasta red de afluentes y quebradas ofrecen rutas desde Perú hacia Colombia y Brasil. La desmovilización de las FARC después de 2016 acabó con la hegemonía del grupo colombiano en la región, y allanó el camino para un caleidoscopio en evolución de grupos armados que entraron en competencia por el territorio y por nodos en la cadena de narcotráfico.

Los nombres de los grupos cambian en este panorama criminal proteico. Las lealtades por país o ideología política son en gran medida irrelevantes. Alianzas y enemigos se hacen y deshacen con facilidad. Adentrándose cada vez más en este rincón de la Amazonía para controlar los corredores de drogas, estos grupos armados se han diversificado hacia los delitos ambientales, en especial la minería ilegal de oro.

Durante la pandemia de la COVID-19, el gobierno colombiano redujo a la mitad sus operativos de seguridad, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).²⁵² Con la ausencia progresiva de las autoridades estatales, el departamento colombiano de Amazonas comenzó a llenarse de grupos armados, en particular en los alrededores de la zona del río Putumayo, según Jhon Fredy Valencia, secretario de agricultura y medio ambiente del departamento.²⁵³





Hombres armados encerraron a pueblos enteros, confinando a la población en sus casas, como relató una lideresa indígena, cuya declaración se supeditó al anonimato por temor a las represalias. En la noche, podían oírse barcos de todos los tamaños, seguramente cargados de droga, a lo largo de las vías fluviales de Tarapacá.

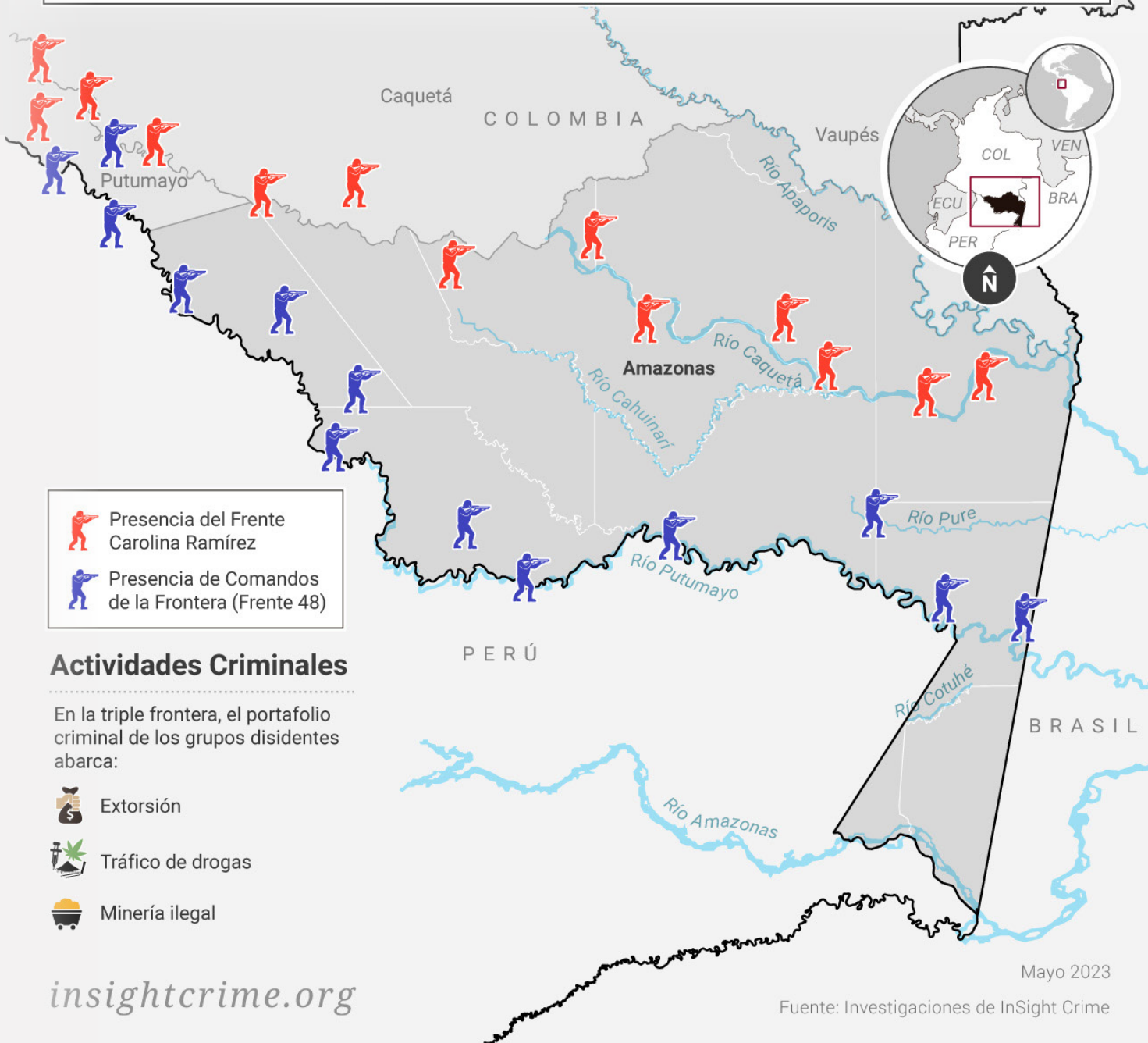
“Hay drogas, hay coca”, sentenció la lideresa. “Están en nuestro territorio, derribando la selva. Está la invasión de nuestros ríos para la minería”.


La lideresa declaró que los hombres armados que amenazaron a su comunidad se llamaban los Sinaloa.²⁵⁴ Funcionarios de derechos humanos y el delegado de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, relataron que también habían recibido declaraciones de personas que habían recibido amenazas de representantes del llamado grupo Sinaloa.²⁵⁵


El nombre Sinaloa no parece tener conexión con el reconocido cartel mexicano. Más bien, en ocasiones han usado el nombre los Comandos de la Frontera, una confluencia de células de las antiguas FARC con remanentes de la organización narcotraficante colombiana La Constru.²⁵⁶ Los Comandos de la Frontera surgieron en 2017 tras la disolución del Bloque Sur de las FARC. Los miembros se han descrito como contrarios a las injusticias cometidas por los comandantes de las FARC, como no compartir la riqueza con los soldados rasos.

Presencia de Ex-FARC Mafia en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil

<p> Frente Carolina Ramírez</p> <p>Afiliado a la facción disidente de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco"</p> <hr/> <p>Cabecilla</p> <p> Yeison Alexis Ojeda Gilon, alias "Danilo Alvizú"</p>	<p> Comandos de la Frontera (Frente 48)</p> <p>Afiliado a la facción disidente de la Segunda Marquetalia, liderada por Luciano Marín, alias "Iván Márquez"</p> <hr/> <p>Cabecilla</p> <p> Giovanni Andrés Rojas, alias "Araña"</p>
--	--



 Presencia del Frente Carolina Ramírez

 Presencia de Comandos de la Frontera (Frente 48)

Actividades Criminales

En la triple frontera, el portafolio criminal de los grupos disidentes abarca:

-  Extorsión
-  Tráfico de drogas
-  Minería ilegal

Según un reporte del centro de pensamiento A la Orilla del Río, que estudia la región de la Amazonía colombiana, los Comandos de Frontera aceptan “todo tipo de combatientes, sin importar su origen o su historia armada”. Sus soldados rasos reciben una paga mensual de 2 millones de pesos (alrededor de US\$450), casi el doble del salario mínimo en Colombia.²⁵⁷

“Nadie sabía lo que hacían con todo ese dinero”, dijo el integrante de la comunidad a los investigadores de InSight Crime. “Aquí decidimos que esos recursos se destinaran a quienes están combatiendo”.

Los Comandos de la Frontera, a los que el Ejército colombiano llamó “estructura residual 48”, controlan gran parte del corredor que va a lo largo del río Putumayo. La influencia del grupo se extiende al departamento de Nariño, oeste de Colombia, centro clave de producción y tráfico de cocaína, pasando por Putumayo.²⁵⁸

Con una fuerza de cerca de 300 hombres, no se conoce el alcance de los Comandos de la Frontera en los profundos recovecos del departamento de Amazonas en Colombia.²⁵⁹

En entrevista con InSight Crime, el funcionario de derechos humanos que trabaja con comunidades en Amazonas, declaró que el grupo opera más como un clan narco paramilitar, que extiende su alcance para reclutar a grupos de menor tamaño y hace alianzas con grupos brasileños. El control social y el reclutamiento de jóvenes hacen parte de su modus operandi.²⁶⁰

“Ellos toman todas las decisiones sobre estas comunidades”, señaló el funcionario de derechos humanos.

Las pandillas brasileñas y su incursión en la selva amazónica

La precaria cooperación transnacional en las fronteras y la falta de controles aduaneros y migratorios en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil han hecho de esta un imán para las pandillas narco de Brasil, que alimentan el mayor mercado local de narcóticos de Latinoamérica, así como el canal de la cocaína hacia Europa.

En Tabatinga, Brasil, el grafiti ofrece una idea de cuáles son las pandillas dominantes. En la pared de un edificio en el puerto ribereño de la ciudad se ve garabateado “Os Crias” y “Voz Da Morte”. Los Crias parecen ser una nueva pandilla de la que poco se sabe, pero hace mucho ruido. Un reportaje publicado en julio de 2020 por A Crítica, medio informativo centrado en el estado brasileño de Amazonas, afirma que el grupo es una facción de la Familia del Norte (Familia do Norte o FDN),²⁶¹ y que se alió con la poderosa banda brasileña del PCC.²⁶²



Grafiti de “Os Crias” o “los Crias”, en el puerto ribereño de Tabatinga. Tabatinga, Brasil, agosto de 2022. Fotografía de Seth Robbins

Varios representantes del Estado en Colombia confirmaron que los Crias son una disidencia de la FDN, pero no mencionaron la conexión de la banda con el PCC.²⁶³

Los Crias parecen haber desplazado a la FDN en Tabatinga en los últimos tres años. Se cree que el grupo controla la venta de drogas en la calle en la triple frontera. También se dice que son responsables de un asalto armado al único banco de la isla de Santa Rosa, en Perú, y de una ola de asesinatos en Brasil y Colombia.²⁶⁴

No se sabe con certeza si el grupo participa de manera más amplia en el tráfico de estupefacientes. El reportaje de A Crítica afirma que los Crias hicieron alianzas con grupos colombianos y peruanos para controlar el tráfico en la región y para dejar de lado al Comando Rojo, el mayor rival del PCC. Renato

Sérgio Lima, director de la organización no gubernamental Foro Brasileño sobre Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), declaró en un trino el 6 de junio de 2022 que los Crias buscan controlar el valle de Yavarí en Brasil, una gran extensión de selva tropical a lo largo de la frontera con Perú.²⁶⁵

Aunque el grupo advenedizo solo podría llegar a controlar ese importante corredor de drogas forjando alianzas con traficantes poderosos y grupos criminales más grandes, debe ser motivo de alarma una posible extensión al valle de Yavarí.

La pesca furtiva, el trasiego de drogas, así como la tala, la minería y la ganadería ilegales han proliferado en el valle de Yavarí, la segunda reserva natural más grande de Brasil y hogar de varios grupos indígenas que viven aislados

del mundo exterior. El incremento de los ataques piratas a los barcos que trasiegan narcóticos en la región les ha sumado una peligrosa dimensión transnacional a estos delitos ambientales.²⁶⁶

Por ejemplo, fue en el valle de Yavará donde fueron asesinados el periodista británico Dom Phillips y el abogado indígena Bruno Araújo Pereira en junio de 2022, cuando trabajaban en un reportaje.²⁶⁷ Por ello fueron detenidos y acusados del crimen tres pescadores, incluido uno que confesó y guió a la policía hasta sus cuerpos.

Las autoridades también investigan a un cuarto hombre, Rubens Villar Coelho, que admitió tener una relación comercial con los pescadores. Conocido con el alias de “Colômbia”, a pesar de contar con nacionalidad peruana, Coelho es sospechoso de dirigir una operación de pesca ilegal, dicen los fiscales.

El jefe de la policía federal por el estado brasileño de Amazonas, Alexandre Fontes, comentó en una conferencia de prensa en la capital Manaus que los investigadores habían concluido que fue Colômbia el determinante de los asesinatos.²⁶⁸

“No me cabe duda de que Colômbia fue el autor intelectual”, dijo Fontes.²⁶⁹

Antes de las muertes, Pereira estaba investigando la pesca ilegal y fue visto tomando fotografías de la pesca furtiva de pirarucu, un enorme pez de agua dulce, y de tracajá, tortuga de río cuya carne y huevos son buscados como alimento. Ambas son especies protegidas en la reserva del valle de Yavará.

Según un cómplice de Pereira, que supo de su investigación, uno de los pescadores imputado por las muertes, Amarildo da Costa Oliveira, le suministraba regularmente a Coelho pescado y tortuga cazados ilegalmente, y este los enviaba a las pescaderías al otro lado de la frontera, en Leticia. Los medios de noticias han informado que residentes e investigadores sospechan que Coelho participaba también en narcotráfico.

RESILIENCIA ESTATAL



RESILIENCIA ESTATAL

Las disueltas leyes domésticas y los conflictos de interés confluyen en las regiones de triple frontera en la Amazonía. Los compromisos de protección de la vida silvestre de la región cambian con cada nueva administración política.

El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, redujo los esfuerzos por combatir la pesca, la tala, la ganadería y la minería ilegales como parte de una agresiva campaña por abrir la Amazonía a un desarrollo más comercial. El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, más conocido como “Lula”, ha prometido revertir esto por completo.

El expresidente colombiano, Iván Duque (2018-2022), declaró los delitos ambientales como el principal objetivo de su política de seguridad, pero no hizo muchos esfuerzos cuando la deforestación se disparó. El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado la protección del Amazonas como uno de los pilares de su agenda.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, vaciló entre declarar la necesidad de acciones prontas para controlar la deforestación y promover el desarrollo económico de la región. Su destitución y arresto tras un intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 ha agudizado el caos político en el país, y empujado las preocupaciones ambientales mucho más abajo en la lista de prioridades del gobierno.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anuló toda protección para la región amazónica del país y se beneficia de su saqueo.²⁷⁰

Marco legislativo y voluntad política por país

Brasil

Varios factores importantes que dan forma al marco legislativo en Brasil son su federalismo y el rol desproporcionado del poder ejecutivo, a nivel estatal y nacional. El gobierno de Bolsonaro buscó agresivamente desmontar las protecciones sobre los territorios indígenas y las reservas naturales de la región para hacer posible el desarrollo económico y la minería. Estos invariablemente han llevado vías y otra infraestructura, lo que por lo general es la puerta de entrada para delitos ambientales a gran escala en la Amazonía, incluido el despeje ilegal masivo de selva para la ganadería y la agricultura. El sucesor de Bolsonaro, Lula, quien ocupó la presidencia entre 2003 y 2010, se comprometió durante su campaña a combatir la pérdida forestal. Pero sin reformas de fondo que blinden las protecciones, un nuevo presidente podría simplemente revertir los esfuerzos de Lula.

La Amazonía que corresponde a Brasil, el área designada por ley como selva amazónica, comprende cerca de 500 millones de hectáreas y representa casi el 60% de la región selvática de la Amazonía suramericana. Casi una tercera parte de las selvas de Brasil están demarcadas como territorios indígenas. Tras el final de la dictadura militar en 1985, una nueva constitución reconoció los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, lo que previó que los intereses de estas comunidades estén por encima de los intereses del gobierno.²⁷¹

Las reservas de Alto Río Negro y Yanomami — que juntas suman 18 millones de hectáreas— constituyen la mayor parte de la tierra en la frontera de Brasil con Venezuela y Colombia. La reserva del Alto Río Negro, que alberga 23 tribus, fue declarada territorio indígena en 1998,²⁷² mientras que la reserva Yanomami

fue declarada como tal en 1992.²⁷³ La masiva invasión de buscadores de oro ha creado una tragedia ambiental y humanitaria en la reserva Yanomami en Brasil y en el parque Nacional Yapacana, de Venezuela.

En territorio Yanomami, es necesario restablecer las tres bases de protección etnoambiental cerradas por el gobierno. Un juez federal brasileño ordenó al gobierno que reabriera las bases hace más de cuatro años, pero esto no se ha cumplido. La Asociación Hutukara Yanomami y la ISA han demandado la creación de al menos tres nuevas bases para vigilar los ríos. También deben cerrarse las empresas de transporte aéreo que facilitan la minería ilegal y judicializarse a sus dueños.

La constitución del país ordena que toda exploración en busca de recursos minerales o hídricos, así como su explotación, por parte del gobierno en tierras indígenas solo puede hacerse después de una consulta previa con los grupos que habitan los territorios.²⁷⁴ Bolsonaro y los legisladores aliados suyos, sin embargo, trataron de cambiar los límites geográficos o el estatus legal de las tierras protegidas para abrirlas a la minería, la agricultura y proyectos de infraestructura por parte de intereses particulares.

En febrero de 2020, Bolsonaro presentó ante el Congreso el proyecto de ley PL 191/2020, que permitía la regulación de la minería y otros proyectos en Territorios Indígenas.²⁷⁵ Dos años después, se puso en espera el proyecto de ley,²⁷⁶ luego de multitudinarias protestas.²⁷⁷ En marzo de 2023, el gobierno de Lula solicitó al Congreso que archivara el proyecto de ley.

Los legisladores locales también intentaron suavizar las regulaciones mineras. En Roraima, los diputados aprobaron un proyecto de ley que hacía más laxas las regulaciones sobre el uso de mercurio en la minería a pequeña escala,²⁷⁸ y otra que prohibía la destrucción de equipos de minería confiscados.²⁷⁹

Los detractores dicen que la retórica de Bolsonaro y su negativa a enfrentar con contundencia la tala, la minería y la ganadería ilegales incitaron la deforestación.²⁸⁰ Durante el mandato de Bolsonaro, el organismo ambiental de Brasil, el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), encargado de la inspección ambiental con facultades de sanción administrativa, sufrió recortes enormes en su presupuesto anual y su personal.²⁸¹

Durante el primer año de Bolsonaro en la presidencia, la deforestación llegó a 9.178 kilómetros cuadrados, duplicando casi la deforestación de 2018. Durante los dos años siguientes, la pérdida de selva se mantuvo por encima de los 8.000 kilómetros cuadrados. Y 2022 fue el peor de su administración, con 9.227 kilómetros cuadrados talados entre enero y octubre, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (Instituto de Pesquisas Espaciais, Inpe).²⁸² Varias partes de Amazonía brasileña han pasado de ser sumideros a emisores de carbono.²⁸³

“No hay seguridad climática para el mundo sin protección para el Amazonas”, declaró Lula en una alocución en la cumbre climática COP27 organizada por las Naciones Unidas (ONU) en Egipto en noviembre de 2022.²⁸⁴ “Haremos lo que sea preciso para tener en cero la deforestación y la degradación de nuestros biomas”.

Lula ya ha tenido éxitos en la reducción de la deforestación, y gran parte de la comunidad internacional respaldará sus esfuerzos.²⁸⁵ A dos meses de su posesión, el nuevo presidente lanzó su campaña para combatir los delitos ambientales. Se desplegó una fuerza de tarea integrada por la policía, el ejército y los organismos ambientales para expulsar a los mineros ilegales de las tierras de los Yanomami.²⁸⁶ La expulsión de los mineros ilegales del territorio Yanomami puede aliviar la presión a la que se ha visto sometida esta comunidad indígena durante años a manos de los garimpeiros. Pero los mineros ilegales están desplazándose hacia la frontera con

Venezuela, y pronto seguramente llegarán a otros rincones de la cuenca del Amazonas para seguir su saqueo ilegal. Por esta razón, es esencial crear programas de desarrollo alternativos en las fronteras y reforzar la cooperación multilateral para evitar que se presenten crisis similares en otros territorios.

“Es de extrema importancia no solo clausurar una actividad perjudicial como la minería ilegal de oro o la tala ilegal, sino ofrecer oportunidades económicas sólidas como alternativas a dicha actividad”, declaró Daniel Nepstad, presidente y director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Earth Innovation, en una entrevista reciente con InSight Crime²⁸⁷

Por ejemplo, Brasil debe reforzar programas como el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, FNDF), dirigido por el Servicio Forestal Brasileño (Serviço Florestal Brasileiro, SFB); propender por el fomento de actividades forestales sostenibles en Brasil, y promover la innovación tecnológica en el sector forestal.²⁸⁸

Pero también es muy probable que Lula se tope con la resistencia de quienes consideran la Amazonía su patio trasero. Durante la segunda vuelta por la presidencia en 2022 entre Lula y Bolsonaro, este último ganó en ocho de los diez municipios donde se presentó la deforestación más alta en el año anterior, según un informe del Observatorio del Clima (Observatório do Clima), una red de organizaciones de la sociedad civil brasileña.²⁸⁹

Venezuela

Desesperados por recuperar las rentas perdidas por las sanciones a las exportaciones de hidrocarburos, el gobierno de Nicolás Maduro, corto de dinero, ha pasado del petróleo al oro con la consiguiente falta de voluntad política frente a la protección ambiental.

En un inicio, Maduro quiso controlar la minería mediante el desarrollo del Arco Minero del Orinoco (AMO), una región en forma de medialuna que se extiende por tres estados en un área del tamaño de la isla de Cuba.²⁹⁰

Creada bajo un nuevo marco para la minería en 2016,²⁹¹ esta región rica en oro fue la piedra angular del plan de Maduro para generar nuevos ingresos en medio de una crisis económica cada vez más aguda. Después de su creación, el presidente afirmó que se habían cerrado contratos mineros por miles de millones de dólares con empresas extranjeras.²⁹²

Pero la corrupción, el control criminal de las zonas mineras y la amenaza de sanciones sobre el oro terminaron por diluir el nascente interés de las firmas internacionales, dejando como resultado de ningún proyecto formal.

Además los mineros ilegales llegaron por centenares al arco minero y más allá.²⁹³ Para vigilar la fiebre de oro ilegal, el gobierno recurrió a una masa de personas interpuestas, entre ellos representantes del gobierno local, grupos armados colombianos y el ejército de Venezuela.²⁹⁴ El régimen de Maduro y sus aliados absorben gran parte de las ganancias de la minería ilegal de oro, según el Departamento del Tesoro estadounidense.²⁹⁵

Cristina Vollmer Burelli, fundadora de SOS Orinoco, una organización dedicada a la investigación ambiental en Venezuela, explicó esta dinámica de manera muy resumida en *Americas Quarterly*, publicación dedicada a Latinoamérica.²⁹⁶ “Las autoridades civiles y militares que responden a Maduro y su camarilla controlan el acceso al combustible, el mercurio, las bombas eléctricas y las zonas mineras, y se lucran a manos llenas de dicho control”, escribió Burelli.

En 2019, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Minerven, firma minera del Estado de Venezuela, señalándola de participar en operaciones de extracción ilegal de oro.²⁹⁷ Minerven funde oro y es muy consciente de su origen ilegal, según un político de la oposición en el estado de Bolívar, quien habló con InSight Crime en 2020 bajo la condición de que se mantuviera su anonimato por razones de seguridad.²⁹⁸

El oro fundido en los hornos de Minerven termina transportándose a las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas, desde donde puede venderse al exterior.²⁹⁹ Se dice que el oro venezolano ha sido comprado por el gobierno de Turquía,³⁰⁰ y entidades de Uganda³⁰¹ y los Emiratos Árabes Unidos.³⁰²

Manuel Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ha descrito en repetidas ocasiones el sistema como “una empresa criminal” en la que Maduro, su familia y otros cómplices usan el banco central para sacar oro del país, según declaraciones a varios medios.³⁰³

Paradójicamente, Venezuela había emprendido uno de los primeros intentos por proteger sus selvas amazónicas de la tala y la minería, con la creación de parques y una “vigorosa política conservacionista” en el estado de Amazonas en 1978.³⁰⁴ Ese año, se prohibió toda la tala comercial en el Amazonas venezolano. En 1989, también se prohibió la actividad minera.³⁰⁵

Como lo señalamos en nuestro informe anterior, “La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países”.³⁰⁶ Venezuela tiene un marco legislativo diseñado para proteger la Amazonía. La “Ley Orgánica Ambiental” de 2006 ofrece una guía para el manejo de los recursos naturales y dispone los derechos constitucionales para un medio ambiente seguro y en equilibrio ecológico.³⁰⁷ El país también tiene la “Ley Penal del Ambiente” de 2012, un derrotero para el tratamiento de los delitos ambientales en el país.³⁰⁸

Esas protecciones, sin embargo, fueron debilitadas o totalmente desmontadas por los gobiernos de Chávez y Maduro.³⁰⁹

Desde 2011, Venezuela se ha negado a publicar cifras sobre deforestación; las reúne, pero impide que lleguen a la opinión pública, según un funcionario del gobierno que habló con el servicio de noticias ambientales Mongabay. Aun así, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, organización no gubernamental, calcula que entre 2016 y 2020 desaparecieron más de una cuarta parte de las zonas de selva del país.³¹⁰

Según Global Forest Watch, que supervisa los bosques mediante datos satelitales, Venezuela tuvo uno de sus mayores picos de deforestación en 2021. Se perdieron unas 54.000 hectáreas, más del doble del bosque primario perdido en 2020.³¹¹

Hasta hace poco, Venezuela se había aislado de las plataformas multilaterales que promueven la cooperación en la Amazonía. También estaban rotas las relaciones diplomáticas con los países vecinos. Pero el reciente acercamiento entre Maduro y los nuevos presidentes de Brasil y Colombia, puede abrir una nueva era en las relaciones y la cooperación entre Venezuela y ambas naciones.³¹² En la cumbre climática COP27 en Egipto, Maduro también pidió renovar los esfuerzos por la cooperación multilateral para la protección de la Amazonía.³¹³

En enero de 2023, el ejército de Venezuela adelantó seis operativos para destruir equipos de minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, en la frontera con Colombia.³¹⁴ Pero con esos esfuerzos, y el anuncio de Maduro de que protegería la Amazonía en medio de los grupos armados y los elementos corruptos del Estado que se benefician de la minería ilegal –contando al mismo Maduro–, persisten las dudas acerca de su real compromiso.³¹⁵

Colombia

En los años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el gobierno colombiano ha perdido una oportunidad de oro de llevar las instituciones de gobierno y orden público a las zonas en las que imperó la guerrilla, con lo que prolongó la falta de control crónica sobre extensas áreas de selva tropical sumida en la anarquía.³¹⁶

En 2017, la deforestación alcanzó un techo anual de unas 220.000 hectáreas.³¹⁷

Nunca ha parecido más cuesta arriba combatir la deforestación. El expresidente Iván Duque prometió cortar ese número a la mitad al término de su cuarto año de gobierno en agosto de 2022.³¹⁸ Pero la pérdida de bosques pasó de unas 159.000³¹⁹ hectáreas en 2019 a 174.000³²⁰ hectáreas en 2021, y 2022 no prometía mejora. Entre enero y marzo, la pérdida forestal aumentó un 10% en relación con 2021,³²¹ y según los expertos, la tendencia es muy probable que se haya mantenido la tendencia ascendente.³²²

Colombia tiene varias nuevas leyes en los libros para combatir los delitos ambientales, pero es demasiado pronto para evaluar su efectividad.

En 2021, Colombia penalizó la deforestación y la financiación de la invasión de territorios de importancia ecológica.³²³ Las nuevas leyes refuerzan el marco legal colombiano, especificando que quienes financien empresas que incurran en delitos ambientales enfrentarán duras sanciones.³²⁴ Pero las fuerzas de orden público y los fiscales han fracasado históricamente en su tarea de desentrañar las

redes que están detrás de la deforestación ilegal.³²⁵ En los últimos años, campañas e intervenciones militares —como la Operación Artemisa, que intentó erradicar los delitos ambientales en Colombia entre 2019 y 2022— han tenido poco impacto en la reducción de la deforestación a la par que han perseguido de manera desproporcionada a los pequeños agricultores y taladores, los eslabones más débiles de la cadena criminal.³²⁶

La directora de un grupo sin ánimo de lucro que trabaja en comunidades rurales pobres declaró a Mongabay que teme que los campesinos colombianos sean objeto de mayor judicialización con la nueva legislación.³²⁷

Tal como Lula en Brasil, el presidente colombiano Petro se ha pronunciado abiertamente a favor de combatir la deforestación y proteger la Amazonía.³²⁸ Durante su campaña, se comprometió a frenar la migración a la Amazonía y a combatir actividades ilegales que fomentan la deforestación, como el despeje de árboles y la compra irregular de tierras para cría de ganado, un mecanismo usado para lavar dinero del narcotráfico.³²⁹

Petro planteó los delitos ambientales como prioridad de su política de seguridad, en un intento por distanciarse de la “guerra antinarcóticos” y acercarse a la protección del medio ambiente. Sus esfuerzos por proteger la Amazonía, sin embargo, enfrentan los problemas de la escasez de presupuesto y el avance de la agroindustria. Por largo tiempo, las organizaciones criminales han corrompido a políticos y funcionarios locales para proteger sus intereses.³³⁰

El mandatario ha buscado dar un nuevo aliento a la cooperación regional y en repetidas oportunidades ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional para una estrategia que se aparte de la de sus predecesores. En la 77 Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2022, Petro declaró que las iniciativas para eliminar la coca han

llevado la violencia a las selvas tropicales de Colombia, mientras que se sigue protegiendo los combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático.³³¹

“¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”, interpeló a la audiencia.

Petro quiere implementar un programa en el que se pague entre US\$400 y US\$600 mensuales a los campesinos que sustituyan los cultivos de coca a cambio de preservar los bosques,³³² una iniciativa similar a la del Programa Familias Guardabosques implementada a comienzos de la década del 2000, en el que se pedía a familias campesinas que se comprometieran a sustituir cultivos ilícitos para recibir beneficios de programas de desarrollo.³³³

En la cumbre climática COP27, Petro declaró que su país tiene la intención de destinar US\$200 millones anuales durante las próximas dos décadas para proteger la Amazonía.³³⁴

Al convocar a otros a colaborar, defendió la “apertura de un fondo” sostenido por las donaciones de empresas y gobiernos extranjeros.³³⁵

Perú

Perú tiene un amplio marco legal que protege su Amazonía. Aunque existen diferentes provisiones e instrumentos que regulan las actividades de minería, tala y manejo de vida silvestre, la ley que cubre el mandato ambiental en Perú es la Ley General del Ambiente, sancionada en 2005.³³⁶

Esa ley busca regular la protección y conservación del medio ambiente, los recursos naturales y los daños ambientales, entre otros.³³⁷ De igual forma, el país ha creado varios instrumentos que amplían las facultades del Ministerio del Ambiente, el máximo órgano regulador en estos temas a nivel nacional.³³⁸

Las iniciativas de Perú están cargadas de buenas intenciones, pero no son efectivas. A finales de 2021, el gobierno de Perú creó la Reserva Yavari Tapiche, un área protegida de 1,1 millones de hectáreas cerca de la frontera entre Perú y Brasil.³³⁹ Aunque la creación de la reserva fue un gran paso después de casi veinte años en gestación, los entes gubernamentales aún no anulan y retiran 47 concesiones forestales otorgadas ilegalmente en la zona por el gobierno del departamento de Loreto, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).³⁴⁰

Esta inoperancia caracteriza muchos de los intentos de Perú por proteger su Amazonía de la deforestación ilegal. En 2015, Perú ratificó la Ley Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, un estatuto general que regula el aprovechamiento de madera.³⁴¹ Un año antes, el gobierno se comprometió a certificar que la madera comprada y vendida en el país procediera de fuentes legales. El gobierno también se comprometió en su Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (ENLTI 2021-2025) a crear un sistema de vigilancia forestal y un laboratorio forense para identificar madera, y a coordinar mejor los entes de gobierno encargados de hacer seguimiento al transporte de madera.³⁴²

A pesar de todo esto, la Amazonía peruana presentó en 2020 la peor tasa de deforestación de las dos últimas décadas, con la destrucción de más de 203.000 hectáreas, gran parte por cuenta de la tala ilegal.³⁴³ también la comisión agraria del Congreso de Perú pretende modificar la ley forestal para permitir a la población cultivar y criar ganado en sus tierras sin antes consultar al Ministerio del Ambiente, lo que facilitará la destrucción de bosques potencialmente sensibles.³⁴⁴ La inestabilidad política crónica en el país significa que es improbable que la situación mejore en el corto plazo.

En Perú, un nuevo proyecto de ley despierta preocupación sobre los defensores del medio ambiente y las organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa legislativa pretende enmendar la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI).³⁴⁵

La propuesta dejaría en manos de los gobiernos regionales la decisión sobre la creación de reservas en sus territorios, una capacidad que actualmente está reservada al gobierno nacional.³⁴⁶ Según un delegado de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), esto pondría en riesgo la subsistencia en esos territorios de las comunidades indígenas aisladas, pues podrían quedar a merced de las actividades forestales y agrícolas en sus territorios, movidas por administraciones regionales y agronegocios. Y todas las reservas indígenas reconocidas hasta ahora serían evaluadas automáticamente para determinar su continuidad, su revocación o su extinción.³⁴⁷

Acuerdos conjuntos

Existen acuerdos entre los países de la triple frontera, así como tratados internacionales, pero se pasa por encima de ellos. La ausencia estatal en las regiones implica que la disuasión es poca o nula para quienes infringen la ley. El asunto se hace más complejo dado que en los diferentes países las fuerzas militares desplegadas cerca de las áreas de frontera tienen distintos mandatos legales o, por el contrario, competencias y facultades delimitadas claramente, para actuar sobre la criminalidad transnacional, y aun menos sobre los delitos ambientales.³⁴⁸

Otras barreras para una cooperación multilateral efectiva es el desbalance de los compromisos de las diferentes naciones con la protección del medio ambiente, la falta de canales de comunicación permanente y los retos geográficos de la región. Finalmente, las necesidades de financiamiento económico

y de la fuerza pública asociadas con la protección efectiva del medio ambiente superan cualquier presupuesto nacional y requieren la ayuda internacional.

Venezuela, Colombia, Brasil y Perú se encuentran entre los ocho países que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que busca llevar desarrollo sostenible a la región amazónica.³⁴⁹ Aunque sus países miembros se encuentran actualmente redactando una nueva Agenda de Cooperación Estratégica para el periodo 2021-2030,³⁵⁰ varios factores pueden limitar la capacidad de la organización para cumplir sus metas. Proyectos anteriores han buscado consolidar los esfuerzos institucionales y civiles en torno al manejo, la manipulación y el monitoreo de los recursos hídricos y forestales, así como especies de flora y fauna.³⁵¹ Sin embargo, el éxito de estos proyectos quedó limitado gracias a una falta de recursos financieros y la lentitud en la toma de decisiones en la OTCA. Hasta ahora, la lucha contra los delitos ambientales no se ha incluido entre las prioridades de la organización. Además, los países participantes han tenido que sopesar el potencial desarrollo económico contra las protecciones del medio ambiente, lo que ha impedido esfuerzos de colaboración que causen impacto para combatir los delitos ambientales.³⁵²

Venezuela, Brasil, Colombia y Perú firmaron todos la Convención Minamata, que busca frenar la contaminación asociada por mercurio asociada a la minería, aunque Venezuela aún no la ha ratificado. Hasta ahora el tratado ha tenido poco efecto.³⁵³

En los primeros 100 días del presidente colombiano Petro en el gobierno, los legisladores ratificaron el Acuerdo Escazú de 2018,³⁵⁴ un tratado regional diseñado para proteger a los defensores del medio ambiente y requiere que los estados miembros den acceso público a la información relacionada con temas ambientales.³⁵⁵ Petro firmó el acuerdo antes de la COP 27, en cumplimiento

de una de sus promesas de campaña³⁵⁶. El Congreso colombiano llevaba más de tres años sin ser capaz de ratificar el acuerdo, al que el país se adhirió en 2018.³⁵⁷

Sin embargo, Perú y Brasil³⁵⁸ se han negado hasta ahora a ratificar el mismo acuerdo, mientras que Venezuela ni siquiera lo ha firmado.³⁵⁹

Los cuatro países han firmado y ratificado la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres en Peligro de Extinción (CITES). El tratado protege las especies de flora y fauna en peligro de extinción del tráfico internacional legal o ilegal.³⁶⁰ Sin embargo, el conocimiento de las autoridades sobre cómo aplicar este instrumento aún necesita mejorarse en las zonas de triple frontera, lo cual limita su efectividad.

Presidentes y diplomáticos de todos estos países se han reunido año tras año en Leticia para redactar acuerdos para la protección de la Amazonía. Uno de ellos incluso lleva el nombre de la ciudad. El Pacto de Leticia de 2019, cuyos siete firmantes incluyen a Brasil, Colombia y Perú, se propuso aplicar la cooperación regional para combatir la deforestación.³⁶¹ Pero en 2021, expertos declararon a Reuters que el pacto fracasó en gran parte por la escasa financiación, los conflictos de interés y la incapacidad para realizar acciones en el campo.³⁶² Venezuela no fue invitado a la cumbre.

En un giro en la política exterior, el presidente colombiano Petro y el mandatario venezolano Maduro restablecieron la relación entre ambos países, lo que llevó a la reapertura de las fronteras, al restablecimiento de lazos diplomáticos y a la celebración de diálogos.³⁶³ En la asamblea COP27 en noviembre de 2022, ambos presidentes se mantuvieron unidos y se comprometieron a combatir el cambio climático y proteger la Amazonía —un cambio importante para Maduro, quien no había mostrado anteriormente ninguna voluntad para adherirse a esos esfuerzos, aunque bien puede ser solo de dientes para afuera.³⁶⁴

Lula también ha trabajado para restablecer las relaciones bilaterales con Venezuela. “Vamos a restablecer la relación civilizada entre dos Estados autónomos, libres e independientes”, declaró Lula en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tras su victoria electoral.³⁶⁵

Tanto Petro como Lula propusieron crear una cumbre sin precedentes de la Amazonía en Brasil, en el mes de agosto de 2023.³⁶⁶ Este evento estaría organizado por la ACTO, lo cual le dará peso institucional para emprender acciones en la Amazonía.³⁶⁷

Grupos de la sociedad civil y comunidades indígenas

Tanto la sociedad civil como las comunidades indígenas tienen roles vitales en la documentación de la deforestación y los delitos ambientales.

El monitoreo de la Amazonía es una tarea gigantesca. Pero organizaciones no gubernamentales, agencias de noticias y universidades se han unido para hacer seguimiento a la deforestación de las operaciones de minería ilegal. Esto se logra muchas veces mediante datos satelitales, tecnología de mapeo y algoritmos para rastrear la pérdida de selva. Ejemplos de proyectos así incluyen, MapBiomass,³⁶⁸ el Observatorio de Minería del Amazonas del Centro Pulitzer,³⁶⁹ y el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP),³⁷⁰ RAISG,³⁷¹ y muchos más.

Una mejor detección y formación de imágenes de la minería ilegal han llamado la atención sobre la devastación que está ocurriendo en la Amazonía, incluidas sus regiones de triple frontera. El monitoreo también deja ver claramente dónde falta presencia de fuerza pública.

Organismos de noticias dedicados a realizar investigaciones sobre la Amazonía, como InfoAmazonia,³⁷² Repórter Brasil,³⁷³ y más recientemente Sumaúma,³⁷⁴ han revelado la sofisticación de la minería ilegal en la Reserva Yanomami, y cómo se blanquea el oro extraído de allí. El organismo colombiano de parques nacionales naturales, en alianza con diferentes organizaciones crearon el programa “Parques Cómo Vamos”.³⁷⁵ Este proyecto hace parte del Sistema de Parques Naturales (SPNN) y busca producir información detallada sobre las amenazas ambientales, la condición de conservación y la gobernanza en los parques nacionales.³⁷⁶

En Venezuela, el grupo de vigilancia SOS Orinoco denunció la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía de ese país. Con la conformación de un consorcio de expertos que trabajan de forma anónima, el grupo ha documentado la presencia de organizaciones criminales en operaciones mineras en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas.³⁷⁷ En Perú, las investigaciones y las denuncias regulares sobre delitos ambientales en la región de la Amazonía vienen de agencias de noticias como Ojo Público³⁷⁸ y organizaciones como Proética,³⁷⁹ el capítulo peruano de Transparencia Internacional, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),³⁸⁰ y la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency, EIA).³⁸¹ Representantes de ORPIO, que reúne a más de 500 comunidades aborígenes, han levantado la voz contra la modificación de la Ley PIACI, que podría promover los delitos ambientales.³⁸²

Los efectos devastadores de la minería ilegal en el pueblo Yanomami también han sido bien documentados por grupos de la sociedad civil, académicos y los mismos Yanomami.³⁸³ Las denuncias han destacado problemas médicos, como exposición al mercurio y brotes de malaria; abuso de mujeres, como violación; adicción al alcohol y los estupefacientes, y ataques contra los Yanomami, quienes han resultado muertos en enfrentamientos con mineros ilegales y otros actores criminales.³⁸⁴

El problema es que las comunidades indígenas y los activistas ambientales muchas veces se quedan solos en la defensa de la Amazonía en las regiones de triple frontera. Los peligros de enfrentar a los mineros ilegales y a otros actores criminales los hacen vulnerables a amenazas, ataques y asesinatos selectivos.

Seguridad y justicia penal

La presencia de las autoridades es dispersa y poco homogénea en los países que hacen parte de las regiones de triple frontera de la Amazonía.

Las regiones fronterizas de Brasil son patrulladas por una mezcla de unidades militares, el 7.º Comando Aéreo Regional de la fuerza aérea; una base naval perteneciente al 6.º distrito naval;³⁸⁵ y el comando militar de la Amazonía, conformado por tres brigadas de infantería en la jungla.³⁸⁶

Brasil tiene también tres cuerpos de policía. La Policía Federal es la encargada de salvaguardar las leyes federales y vigilar aeropuertos y fronteras.³⁸⁷ La Policía Militar depende de los gobiernos estatales y es responsable de patrullar y responder a llamadas de emergencia. Están subordinados a los gobernadores de cada estado.³⁸⁸ Cuando son convocados por el Gobierno Federal, los miembros de las fuerzas de policía estatal pueden actuar como parte de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (Força Nacional de Segurança Pública). Finalmente, la Policía Civil es un cuerpo de policía estatal. Realizan trabajo como detectives, forenses e investigación criminal, y actúan como una oficina de investigación para su estado.³⁸⁹

Sin embargo, entre 2015 y 2016 se cerraron tres puestos de seguridad del gobierno en territorio Yanomami por falta de presupuestos, entre ellos el Korekorema BAPE, que, como se mencionó anteriormente, controlaba el acceso al río Uraricoera.³⁹⁰

Las comunidades indígenas han optado por oponerse al avance de la minería ilegal en sus tierras, muchas veces mediante la quema de barcas y la destrucción de equipos. Sin embargo, como se discutió antes en este informe, los mineros han disparado a los Yanomami como retaliación cuando estos han tratado de bloquearles el paso durante sus desplazamientos.³⁹¹ Después de que varios hombres armados en una lancha rápida dispararan contra los Yanomami en mayo de 2021, el gobierno autorizó el empleo de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública para proteger la reserva solo por 90 días, aunque los mineros ilegales mantienen presencia permanente en el lugar.³⁹² Este episodio pone de relieve los desafíos geográficos de las zonas de triple frontera, donde las operaciones de la policía enfrentan obstáculos de tipo físico y presupuestal para operar a largo plazo. Esto se traduce en problemas para coordinar acciones conjuntas entre los países.

Fiscales y otras autoridades han realizado operativos contra la minería ilegal en la reserva Yanomami, con allanamientos a empresas y confiscación de oro, aviones y equipos. Pero enfrentan obstáculos que pueden hacer morir las investigaciones. Según el *New York Times*, un juzgado brasileño rechazó múltiples solicitudes de la policía federal para que ordenaran la captura de Martins de Mello, empresario de transporte aéreo, cuyas naves fueron confiscadas por su presunto uso en operaciones de minería ilegal.³⁹³

En respuesta a múltiples ataques contra los Yanomami por parte de los garimpeiros, en febrero de 2023 el nuevo gobierno brasileño desplegó una fuerza de tarea para proteger las comunidades Yanomami y expulsar a los mineros ilegales.³⁹⁴

Las fuerzas de seguridad de Venezuela han participado activamente en operaciones de minería ilegal. Según SOS Orinoco, parte del oro extraído de la reserva Yapacana se entrega a los jefes del ejército en Puerto Ayacucho.³⁹⁵ Las acciones militares contra las operaciones de minería ilegal son pocas y solo para

aparentar. El ejército venezolano mantiene una base en la reserva con capacidad para albergar 1.500 soldados encargados de combatir la minería ilegal. Pero en la actualidad solo hay un pequeño grupo de soldados estacionados allí, lo que revela la inoperancia del ejército —y posiblemente su complicidad— en las actividades ilegales.³⁹⁶

En Colombia, tres batallones del ejército se encuentran desplegados en las regiones fronterizas de Venezuela y Brasil.³⁹⁷ La Armada también tiene un batallón.³⁹⁸ Las fuerzas armadas han emprendido campañas contra la minería ilegal en la región de la triple frontera, como la operación Anostomus en 2015.³⁹⁹ Los críticos han señalado que la estrategia del ejército de efectuar operativos masivos para combatir los delitos ambientales tiende a producir la captura de actores de bajo nivel, como los mismos mineros.⁴⁰⁰

Perú depende de su policía nacional para tomar la iniciativa con apoyo del ejército.⁴⁰¹ La marina y la fuerza aérea también participan de las operaciones como fuerzas de apoyo. Más específicamente, las responsabilidades de vigilancia fronteriza en la triple frontera le competen a la 5.ª división del ejército.⁴⁰² Las fuerzas de seguridad peruanas han jugado un rol activo en la lucha contra los delitos ambientales en especial la minería ilegal de oro. Pero estas iniciativas se han dirigido lejos de la triple frontera, en el departamento de Madre de Dios. Este departamento se encuentra en la frontera de Perú con Brasil, uno de los principales focos de minería ilegal de oro en Perú.⁴⁰³

La mayoría de las operaciones que se realizan en las regiones de triple frontera tienen como objetivo impedir la minería ilegal, en parte porque ese es el delito más prevalente en ambas regiones. También, porque en las regiones de triple frontera, ejército y policía han sido incapaces de mantener la presencia sostenida en lugares remotos que se necesita para combatir los delitos ambientales.

Un funcionario de la alcaldía de Santa Rosa, población isleña de Perú en la triple frontera, declaró que los fiscales, autoridades mineras, forestales y de protección ambiental están ubicados lejos de la zona.⁴⁰⁴

Las autoridades colombianas y peruanas, por ejemplo, se han unido para trazar estrategias contra el tráfico de madera en la frontera⁴⁰⁵, pero operativos a mayor escala —como la Operación Amazonas que dio como resultado el mayor decomiso de madera extraída ilegalmente de la historia de Perú— aún no se materializan en la zona de la triple frontera.⁴⁰⁶

Los guardaparques de Colombia han sido desplazados de sus bases de trabajo en el Amazonas por amenazas de grupos armados. Los guardaparques también deben navegar vías fluviales complicadas. Para llegar a las áreas protegidas del río Puré, cerca de la frontera con Brasil, las patrullas deben atravesar 600 kilómetros, una travesía que por lo general se lleva cuatro días.⁴⁰⁷

El organismo de protección del medio ambiente en Brasil no ha tenido oficina en Tabatinga desde 2018⁴⁰⁸. Hugo Loss, director de la División Técnica Ambiental del Ibama entre 2018 y 2019, dijo que esa base es crítica en la triple frontera por la complejidad de los delitos que allí se producen.⁴⁰⁹

CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN

Una seguidilla de actores y dinámicas criminales convergen en estas regiones de triple frontera, creando una serie única de desafíos para la lucha contra los delitos ambientales.

En primer lugar, las regiones son un nexo para las crecientes cantidades de producción y tráfico de cocaína que exacerbarán los delitos ambientales existentes. Con la salida de las FARC, han emergido grupos criminales, viejos y nuevos, que pretenden tomar control de las rutas de drogas de la Amazonía. Donde las FARC habían negociado con las comunidades indígenas y locales, estos nuevos grupos se han mostrado dispuestos a lucrarse de toda actividad ilícita sin consideración alguna hacia las comunidades locales. La prevalencia de los grupos y su poder en aumento seguramente catalizarán más delitos ambientales.

Segundo, los delitos cometidos en la región no están restringidos por las fronteras nacionales, y de hecho se ven favorecidos por los vacíos de fuerza pública nacional. Balsas operadas por mineros ilegales se desplazan por las vías fluviales compartidas, en especial las que atraviesan Brasil, Colombia y Perú, lo que hace de la ciudad peruana de Iquitos un centro clave en la Amazonía para las economías ilícitas. Los aserraderos en Islandia, Perú, procesan madera ilegal que se vende en Leticia, Colombia, y en Tabatinga, Brasil. Grupos armados colombianos han migrado al Parque Nacional Yacapana de Venezuela y sus áreas circundantes para controlar la minería ilegal de oro. El oro extraído allí se secuestra y se lleva a Brasil para blanquearlo. El tráfico de vida silvestre también es transnacional.

Tercero, la deforestación en las regiones de triple frontera es menor que la observada en otros lugares de la Amazonía, pero está agravándose. La dificultad del transporte, en especial por la falta de vías, sin duda ha impedido que imperen los tipos de delitos ambientales más devastadores, como el despeje de tierras para cría de ganado. Pero las condiciones están dispuestas para este y otros delitos ambientales prevalentes. La tala ilegal, por ejemplo, parece ir en aumento alrededor de las regiones de Yavarí, en Perú, y Tarapacá, en Colombia. En el estado brasileño de Roraima, donde se asienta parte de la Reserva Yanomami, se han vinculado los incendios forestales a entramados de tráfico de tierras.⁴¹⁰

Con todo, hay medidas que pueden tomarse desde ya para detener el avance de los delitos ambientales en este territorio sensible, aprovechando un momento político positivo único que vive la región.

Escuchar y dar prioridad a las comunidades indígenas

Quando la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y grupos conservacionistas se centran en la protección de la selva húmeda tropical, suele olvidarse a las comunidades indígenas de la Amazonía o vérselas únicamente como víctimas. Pero ellas son la primera línea de defensa contra la deforestación.

Una declaración de varios líderes indígenas colombianos en una asamblea celebrada en julio de 2022 en Leticia destacó la importancia de su rol como autoridades ambientales en sus territorios. Los líderes

pidieron a las autoridades respeto por sus territorios dentro de un estado plurinacional con políticas interculturales, y su inclusión en planes de manejo ambiental y uso de la tierra, así como nuevas acciones para enfrentar la minería ilegal.⁴¹¹ En el nuevo gobierno, los grupos indígenas brasileños se han anotado importantes victorias. Un nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas está dirigido por una lideresa indígena, Sonia Guajajara, y otra lideresa indígena, Joenia Wapichana (primera mujer indígena elegida para el Congreso de Brasil) fue designada para presidir el organismo de asuntos indígenas, Funai.

Los gobiernos deben priorizar la provisión de servicios básicos para estas comunidades. En especial, las escuelas en muchas zonas indígenas necesitan tanto financiamiento como maestros. Las debilidades en la educación pueden acarrear una falta de oportunidades que pone a niños y adolescentes en posición vulnerable frente al reclutamiento por parte de grupos criminales. La seguridad debe reforzarse y los pueblos indígenas deben poder confiar que serán protegidos si se dirigen a soldados o policías.

A nivel nacional, la promoción de un Estado incluyente e intercultural es esencial para proteger los derechos indígenas y su designación de tierras, dos figuras que sirven como bastiones contra la deforestación a gran escala en la Amazonía. Por ejemplo, los índices de vegetación nativa perdida entre 2005 y 2012 fueron 17 veces menores en territorios indígenas que en zonas no protegidas de la Amazonía brasileña, según un estudio publicado en marzo de 2022 por la revista *Biological Conservation*.⁴¹² Y de acuerdo con una encuesta de MapBiomas, menos del 1% de la deforestación ocurrió en tierras indígenas entre 1985 y 2020.⁴¹³

Reforzar la presencia estatal en todas sus instancias

Las regiones de triple frontera tienen un problema histórico de debilidad institucional, exacerbada por la pandemia de COVID-19. Es hora de que el Estado haga retroceder a los grupos armados que se han constituido en autoridades de facto. Se necesita tanto una presencia constante de fuerzas de seguridad como un mayor rol del Estado en general.

Los gobiernos nacionales, las autoridades judiciales y las comunidades indígenas deben unirse para crear un sistema de gobernanza formal e incluyente en estas regiones. La mayor presencia estatal debe cimentarse en el avance de temas legales de base, como la titulación de tierras, formas de gobernanza coherentes e inclusión legal que llegue a los niveles locales más alejados. En Colombia, por ejemplo, a falta de un gobierno local, enormes extensiones de zonas no municipalizadas de la región son tierra de nadie en el aspecto político.⁴¹⁴ En el Amazonas de Colombia, la Corte Constitucional creó en 1991 zonas no municipalizadas como designación intermediaria de tierras hasta que pudieran convertirse en municipios o anexarse a los existentes, como Leticia y Puerto Nariño. Esto no ha ocurrido.⁴¹⁵

Los derechos sobre la tierra, la titulación y la administración son también claves en las dinámicas de los delitos ambientales en Brasil. Grandes áreas de la Amazonía brasileña son tierras selváticas públicas sin destinación específica (Florestas Públicas Não-Destinadas). Estas zonas presentan una vulnerabilidad extrema al acaparamiento de tierras y la deforestación. Pero por su condición carente de destinación, no cuentan con protección en su mayoría, y las autoridades estatales no les prestan atención suficiente.⁴¹⁶

Llenar los vacíos legales

Cada una de las naciones citadas deben garantizar que su legislación interna sea lo más sólida posible para regular las acciones que lleven a la deforestación, el uso ilegal de mercurio para la minería de oro y el tráfico de madera y vida silvestre. Algunas áreas de interés posibles incluyen el fortalecimiento de las regulaciones sobre las armas de fuego para usar los cargos por armas para impedir la actividad criminal y de pandillas, como se citó antes en el caso del operador de la mina brasileña Dona Iris. Otra táctica sería centrarse en los proveedores de servicios de transporte aéreo a los mineros de oro mediante empresas sin licencia. Una mejor regulación sobre la importación de mercurio mediante la cooperación con el sector privado es esencial para la protección del medio ambiente y la salud de los habitantes de la región. De igual manera, endurecer las regulaciones y controles sobre las importaciones y exportaciones de madera es crítico para impedir la venta de madera ilegal en las regiones de la triple frontera.

Atención a las necesidades económicas

El Estado debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, a pesar de las dificultades logísticas inherentes al precario desarrollo de la zona, para evitar que los grupos armados llenen ese vacío. Por ejemplo, en una localidad, las comidas escolares y el combustible no llegaban siempre a las comunidades, y hombres armados que controlan se han ganado el favor de las comunidades mediante la venta de productos agrícolas, gasolina y arroz. La erradicación de las plantas de coca no brindará una solución; deben desarrollarse como alternativas opciones adecuadas, como sustitución de cultivos o ecoturismo.⁴¹⁷ La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito apoyó muchos esquemas de desarrollo alternativos en los últimos veinticinco años, tales como apoyo para acceder a mercados para productos lícitos y cultivo de árboles frutales, y su investigación indica que el desarrollo alternativo debe darse dentro de un Estado holístico y el apoyo internacional.⁴¹⁸ El nuevo impulso de la bioeconomía en la región ofrece

muchas oportunidades para la Amazonía, pero la nueva economía forestal debe ser incluyente y responder a las necesidades de las poblaciones locales.

Aportar enfoque y recursos a los tratados multilaterales

Los tratados multilaterales no son la panacea, pero pueden ayudar a sortear los cambios electorales haciendo su incumplimiento más visible en el ámbito internacional y más costoso en el ámbito político. Como se ha demostrado de manera muy palpable más recientemente en Brasil y Colombia, los cambios en los regímenes políticos y las prioridades presidenciales someten muchas políticas claves a los avances y retrocesos en el calendario político. La inestabilidad crónica en Perú también ha afectado su capacidad de implementación de políticas y operativos, y el régimen de Venezuela ha ignorado la mayoría de sus obligaciones políticas.

Los muchos acuerdos regionales que ya existen necesitan ratificación, financiamiento e implementación integrales. En lo que respecta a la OTCA, los países miembros deben unirse para ayudar a lograr sus objetivos, en especial la provisión o destinación, mediante recursos multilaterales y bancos de desarrollo, de recursos financieros suficientes para estimular la cooperación internacional y reducir la impunidad que cobija a los grupos criminales que operan en las regiones fronterizas.

Para mejorar la efectividad del Acuerdo de Escazú y proteger a los líderes ambientales que están siendo asesinados en medio de la impunidad, Brasil y Perú deben seguir los pasos dados por Colombia, que ratificó el acuerdo en 2022.⁴¹⁹ Las declaraciones del mandatario venezolano Maduro en la COP 27 para proteger la Amazonía también deben ser más que falsas promesas. Un primer paso para Venezuela sería adherirse al Acuerdo de Escazú e implementarlo, lo que aportaría transparencia a la información ambiental y obligaría al país a responder preguntas difíciles sobre la deforestación que ocurre en su Amazonía.⁴²⁰

Mejorar la cooperación operativa entre las autoridades judiciales

Impedir las actividades ilegales demanda iniciativas de vigilancia conjunta e interdicción por parte de las fuerzas del ejército y la policía en todos los países de triple frontera, comenzando por la instalación de puntos de control de aduanas y migración a lo largo de las fronteras en las que actualmente no hay ninguno.

Aunque se da una atención considerable a las iniciativas militares, debe prestarse mayor atención a la cooperación policial y judicial y a las sanciones no solo a quienes sean sorprendidos traficando, sino también a quienes se beneficien financieramente de esas actividades. Son esenciales las investigaciones coordinadas, los juicios penales y los acuerdos de extradición. La puesta en común de inteligencia y las investigaciones a los delitos financieros revisten especial importancia con respecto a la minería de oro. Es difícil pero no imposible establecer un nexo entre los verdaderos beneficiarios de la industria más allá de la región amazónica.

Cada tipo de delitos ambientales requiere una combinación distinta de acciones legales. En lo que atañe a la minería, deben emprenderse acciones coordinadas para impedir que las dragas usen las fronteras internacionales para esconderse, por ejemplo, mediante la creación de patrullas constantes o puestos militares permanentes a lo largo de los principales ríos usados por las balsas de dragado ilegales. El uso de drones, una alternativa más barata en comparación con las patrullas permanentes, permitiría acciones específicas contra objetivos identificados de tráfico de madera y de flora y fauna silvestres, y la tecnología satelital puede superar la carencia de la capacidad de los gobiernos regionales de monitorear zonas remotas con vegetación muy densa. Se requiere mejorar la inspección de los aserraderos de Islandia, en Perú, para impedir el procesamiento y blanqueo de la madera extraída ilegalmente de Perú y de países vecinos. Además, deben implementarse sistemas de seguimiento para demostrar que la madera procesada se benefició de fuentes legales.

Finalmente, las autoridades nacionales deben hacer esfuerzos extra en el ámbito legal y buscar financiamiento internacional para proteger y conservar parques y reservas nacionales y expulsar a los delincuentes que allí se encuentren.

Notas finales

- 1 Todas las personas que se mencionan en este informe han aceptado hablar públicamente con InSight Crime. Debido a asuntos de seguridad, otras fuentes decidieron hablar con InSight Crime de manera anónima.
- 2 Folha de S. Paulo, "[Invasão em terra indígena chega a 20 mil garimpeiros, diz líder ianomâmi](#)", 16 de mayo de 2019.
- 3 SOS Orinoco, "[La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional](#)", enero de 2019.
- 4 *Ibíd.*
- 5 Entrevista de InSight Crime con experto en minería de Venezuela, San Fernando de Atabapo, Inírida, Guainía, Colombia, 7 de marzo de 2022.
- 6 Sistema de Información de Lucha contra las Drogas, "[Reporte N. 07 - Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca monitoreada en 2021](#)", septiembre de 2022.
- 7 InSight Crime, "[El itinerario de la cocaína hacia Europa](#)", 9 de febrero de 2021.
- 8 Fórum Brasileiro de Segurança Pública, "[Cartografias das violências Na Região Amazônica](#)", 1 de noviembre de 2021.
- 9 Entrevista de InSight Crime con funcionario de derechos humanos, Leticia, Colombia, 9 de agosto de 2022.
- 10 Entrevistas de InSight Crime con funcionario de derechos humanos e indígenas, Leticia, Colombia, 9 al 13 de agosto de 2022.
- 11 Tom Phillips, "[Revealed: Brazil goldminers carve illegal 'Road to Chaos' out of Amazon reserve](#)", The Guardian, 12 de diciembre de 2022.
- 12 InSight Crime, "[Perfil de las ex-FARC Mafia](#)", 20 de octubre de 2022.
- 13 InSight Crime, "[Perfil del ELN](#)", 19 de octubre de 2022.
- 14 InSight Crime, "[Perfil del PCC](#)", 9 de marzo de 2020.
- 15 Reuters, "[U.S. Treasury eyes Brazil drug gang ties to illegal Amazon gold mines](#)", 17 de agosto de 2022; Clara Britto, "PCC approaches miners to launder money", Repórter Brasil, 7 de julio de 2021.
- 16 Ministério Público Federal (MPF), comunicado de prensa, "[MPF pede suspensão de instituições financeiras que compraram ouro ilegal no Pará](#)", 30 de agosto de 2021; Robert Muggah, "[Brazil's illegal gold rush is fueling corruption, violent crime and deforestation](#)", Mongabay, 14 de enero de 2022; André Schröder, "[Yanomami crisis sparks action against illegal gold in the Amazon](#)", Mongabay, 28 de febrero de 2023.
- 17 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), "[Minería - Impactos sociales en la Amazonia](#)", abril de 2019.
- 18 Fiscalía General de Colombia, "[Freno a la minería ilegal en el corazón de la Amazonía](#)", comunicado de prensa, 20 de agosto de 2022.
- 19 Entrevista de InSight Crime con funcionario militar, Leticia, Amazonas, 9 de agosto de 2022.
- 20 *Ibíd.*
- 21 Parques Nacionales Naturales de Colombia, "[Contenido de mercurio en comunidades étnicas de la subregión planicie en la Amazonia Colombiana](#)", 2018.
- 22 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), "[Minería - Impactos sociales en la Amazonia](#)", abril de 2019.
- 23 Entrevistas de InSight Crime con funcionario militar, Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022, y con funcionario de derechos humanos, 9 de agosto de 2022.
- 24 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), "[Colombia - Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2021](#)", junio de 2022.
- 25 *Ibíd.*
- 26 Entrevista de InSight Crime con Jhon Fredy Valencia, Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad del Departamento de Amazonas, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2022.
- 27 Entrevistas de InSight Crime con funcionario militar, Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022; con Jhon Fredy Valencia, Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad del Departamento de Amazonas, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2022.
- 28 Entrevista de InSight Crime con Jhon Fredy Valencia, Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad del Departamento de Amazonas, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2022.
- 29 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI), "[Minería Impactos sociales en la Amazonia](#)", abril de 2019.
- 30 *Ibíd.*
- 31 Entrevista de InSight Crime con, José Reinaldo Mucca, Director de Indígena Asuntos de la Gobernación de la Amazonía, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2021.
- 32 Semana, "[Los dragones del oro](#)", 6 de marzo de 2009.
- 33 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), "[Minería - Impactos sociales en la Amazonia](#)", abril de 2019.
- 34 Entrevistas de InSight Crime con funcionarios de la policía, Leticia, Colombia, 9 de agosto 2022; con funcionario militar, Leticia, 10 de agosto

de 2022.

- 35 Entrevista de InSight Crime con Antonio Torres, cónsul de Brasil en Leticia, Leticia, Colombia, 10 de agosto de 2022.
- 36 El Nuevo Siglo, "[Seis brasileños detenidos por minería ilegal en Amazonía](#)", 13 de septiembre de 2022.
- 37 El Tiempo, "[Incautan 10 dragas con la que hacían minería ilegal en la Amazonia](#)", 20 de agosto de 2020.
- 38 Diego Gonzaga, "[This is what illegal mining in the Amazon looks like](#)", Greenpeace, 30 de noviembre de 2021.
- 39 Entrevista de InSight Crime con funcionario militar, Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022; Tom Phillips, "[Revealed: Brazil goldminers carve illegal 'Road to Chaos' out of Amazon reserve](#)", The Guardian, 12 de diciembre de 2022.
- 40 Gobierno de Brasil, "[Ibama e Funai iniciam retomada do território Yanomami](#)", 8 de febrero de 2023.
- 41 Entrevista de InSight Crime con José Reinaldo Mucca, director de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amazonas, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2021.
- 42 Entrevista de InSight Crime con funcionario militar, Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022.
- 43 Entrevistas de InSight Crime con funcionario militar, Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022; con Jhon Fredy Valencia, Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad del Departamento de Amazonas, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2022.
- 44 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), "[Minería - Impactos sociales en la Amazonia](#)", abril de 2019.
- 45 Entrevista de InSight Crime con funcionario militar, Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022.
- 46 InSight Crime, "[La minería ilegal en la Amazonía colombiana](#)", 8 de septiembre de 2021.
- 47 InSight Crime, "[Comandos de la Frontera](#)", 11 de junio de 2022.
- 48 Entrevista de InSight Crime con funcionario de derechos humanos, 9 de agosto de 2022.
- 49 Entrevista de InSight Crime con José Reinaldo Mucca, director de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amazonas, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2021.
- 50 Entrevista de InSight Crime con delegado de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022.
- 51 Entrevista de InSight Crime con funcionario de derechos humanos, Leticia, Colombia, 9 de agosto de 2022.
- 52 Ibid.
- 53 InSight Crime, "[La minería ilegal en la Amazonía colombiana](#)", 8 de septiembre de 2021.
- 54 Entrevista de InSight Crime con delegado de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022.
- 55 Parques Nacionales Naturales de Colombia, "[Contenido de mercurio en comunidades étnicas de la subregión planicie en la Amazonia Colombiana](#)", 2018.
- 56 World Health Organization (WHO), "[Exposure to Mercury: A Major Health Concern](#)", 2021.
- 57 SOS Orinoco, "[Mina Maraya Cerro Yapacana](#)", Video en Facebook, publicado el 6 de marzo de 2018.
- 58 Gobierno de Venezuela, comunicado de prensa, "[12 Aniversario del Parque Nacional Cerro Yapacana](#)", 12 de diciembre de 2021.
- 59 SOS Orinoco, "[La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional](#)", enero de 2019.
- 60 SOS Orinoco, "[La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana, Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional - Actualización al 2020](#)", 30 de abril de 2020.
- 61 Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), "[Economías ilegales - Minería Ilegal](#)".
- 62 Ibid.
- 63 SOS Orinoco, "[La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional](#)", enero de 2019.
- 64 Entrevista de InSight Crime con Luis Alejandro Acosta, periodista, Inírida, Guainía, 6 de marzo de 2022.
- 65 InSight Crime, "[El Dorado de Maduro: Bandas, guerrillas y el oro de Venezuela](#)", 17 de noviembre de 2021.
- 66 Entrevistas de InSight Crime en Inírida, Guainía, 6 al 11 de marzo de 2022.
- 67 Entrevista de InSight Crime con Luis Alejandro Acosta, periodista, Inírida, Guainía, 6 de marzo de 2022.
- 68 InSight Crime, "[La invitación a la guerra en Venezuela](#)", 13 de octubre de 2021.
- 69 InSight Crime, "[Las guerrillas colombo-venezolanas: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela](#)", 3 de octubre de 2022.
- 70 InSight Crime, "[Actividades criminales de las FARC y las ganancias de la guerrilla](#)", 21 de mayo de 2013.
- 71 Ibid.
- 72 Rodolfo Castillo y Viviana Salas, "[Estado de Conservación del Parque Nacional Yapacana](#)", Informe Especial para BioParques, septiembre de 2007.

- 73 Entrevista de InSight Crime con Luis Alejandro Acosta, periodista, Inírida, Guainía, 6 de marzo de 2022.
- 74 InSight Crime, “[Las ex-FARC mafia, Venezuela y el actual clima internacional](#)”, 11 de noviembre de 2019.
- 75 InSight Crime, “[Cómo Venezuela se convirtió en un cementerio de la cúpula de las ex-FARC Mafia](#)”, 3 de octubre de 2022.
- 76 Entrevista de InSight Crime con Luis Alejandro Acosta, periodista, Inírida, Guainía, 6 de marzo de 2022.
- 77 Ibíd.
- 78 Ibíd.
- 79 Entrevista de InSight Crime con dirigentes de comunidad indígena, Inírida, Guainía, 9 de marzo de 2022.
- 80 Ibíd.
- 81 Ibíd.
- 82 Ibíd.
- 83 Ibíd.
- 84 SOS Orinoco, “[La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yacapana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional](#)”, enero de 2019.
- 85 Entrevista de InSight Crime con Luis Alejandro Acosta, periodista, Inírida, Guainía, Colombia, 6 de marzo de 2022.
- 86 Entrevista de InSight Crime con dirigentes de comunidad indígena, Inírida, Guainía, 9 de marzo de 2022.
- 87 Defensoría del Pueblo de Colombia, “[Alerta Temprana 056-19](#)”, 30 de diciembre de 2019.
- 88 Entrevista de InSight Crime con funcionario público en Vichada, Puerto Carreño, Colombia, 1 de marzo de 2022.
- 89 Entrevista de InSight Crime con funcionario de la agencia de derechos indígenas, Inírida, Guainía, 7 de marzo de 2022.
- 90 Asociación Hutukara Yanomami (Hutukara Associação Yanomami), “[Um Yanomami é morto e outro ferido após ataque armado em Napolepi, no rio Uraricoera](#)”, carta, 4 de octubre de 2022.
- 91 Ibíd.
- 92 Samantha Rufino, “[Líder indígena morre e adolescente fica ferido após ataque a tiros de garimpeiros na TI Yanomami](#)”, O Globo, 5 de octubre de 2022.
- 93 Ibíd.
- 94 Asociación Hutukara Yanomami (Hutukara Associação Yanomami), “[Um Yanomami é morto e outro ferido após ataque armado em Napolepi, no rio Uraricoera](#)”, carta, 4 de octubre de 2022.
- 95 Ibíd.
- 96 Manuela Andreoni, Blacki Migliozi, Pablo Robles y Denise Lu, “[The Illegal Airstrips Bringing Toxic Mining to Brazil’s Indigenous Land](#)”, The New York Times, 2 de agosto de 2022.
- 97 Asociación Hutukara Yanomami e Instituto Social-Ambiental (Hutukara Associação Yanomami e Instituto Socioambiental, ISA), “[Yanomami Under Attack: Illegal Mining on Yanomami Indigenous Lands and Proposals to Combat it](#)”, abril de 2022; Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, “[Onchocerciasis: The Last Challenge](#)”, junio de 2018.
- 98 Ibíd.
- 99 Ibíd.
- 100 Ibíd.
- 101 Ibíd.
- 102 Fábio Bispo, “[Polícia investiga atuação da milícia no fornecimento de armas para garimpo na Terra Yanomami](#)”, InfoAmazonia, 18 de febrero de 2022.
- 103 João Gabriel, “[Relatório aponta militares comprados pelo garimpo na TI Yanomami no início da gestão Bolsonaro](#)”, Folha de S. Paulo, 26 de enero de 2023.
- 104 Asociación Hutukara Yanomami (Hutukara Associação Yanomami), “[Um Yanomami é morto e outro ferido após ataque armado em Napolepi, no rio Uraricoera](#)”, carta, 4 de octubre de 2022.
- 105 Manuela Andreoni, Blacki Migliozi, Pablo Robles y Denise Lu, “[The Illegal Airstrips Bringing Toxic Mining to Brazil’s Indigenous Land](#)”, The New York Times, 2 de agosto de 2022; Tom Phillips, “[Brazil launches operation to drive illegal miners from Yanomami lands](#)”, The Guardian, 8 de febrero de 2023.
- 106 Murilo Pajolla, “[Bolsonaro estimulou avanço de garimpeiros sobre os Yanomami; relembre casos e declarações](#)”, Brasil de Fato, 6 de mayo de 2022.
- 107 Asociación Hutukara Yanomami e Instituto Social-Ambiental (Hutukara Associação Yanomami e Instituto Socioambiental, ISA), “[Yanomami Under Attack: Illegal Mining on Yanomami Indigenous Lands and Proposals to Combat it](#)”, abril de 2022.
- 108 Ibíd.
- 109 Ibíd.

- 110 Ibid. .
- 111 Bruno Kelly, "[Aerial Photo](#)", Amazonia Real, 4 de julio de 2021.
- 112 Dário Kopenawa, "[Na região do Homoxi os garimpeiros ilegais derrubando posto de Saúde Yanomami...](#)", Tweet, 22 de marzo de 2022.
- 113 Martha Raquel, "[Vídeo: garimpeiros mudam trajeto do Rio Mucajaí \(RR\) e comemoram](#)", Brasil de Fato, 2 de abril de 2021.
- 114 Ibid.
- 115 Philippe Dozolme, "[Mercury Usage in Gold Mining and Why It Is a Problem](#)", ThoughtCo, 22 de julio de 2019.
- 116 Jacqueline Gerson, Natalie Szponar, Angelica Almeyda Zambrano, et al., "[Amazon forests capture high levels of atmospheric mercury pollution from artisanal gold mining](#)", Nature Communications, Vol. 13, 28 de enero de 2022.
- 117 Olaf Malm, "[Gold Mining as a Source of Mercury Exposure in the Brazilian Amazon](#)", Environmental Research, Vol. 77, 1998.
- 118 Survival International, "[The Yanomami](#)", 2022.
- 119 Claudia M. Vega, Jesem D. Y. Orellana, Marcos W. Oliveira, Sandra S. Hacon, Paulo C. Basta, "[Human Mercury Exposure in Yanomami Indigenous Villages from the Brazilian Amazon](#)", International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 15, 2018.
- 120 Fernando Trujillo, Carlos A. Lasso, María Claudia Diazgranados, Oriana Farina, Luis E. Pérez, Aniello Barbarino, y Magdalena González, "[Evaluación de la contaminación por mercurio en peces de interés comercial y de la concentración de organoclorados y organofosforados en el agua y sedimentos de la Orinoquia](#)", Fundación Omacha, junio de 2019.
- 121 Ana Claudia Santiago de Vasconcellos, Sylvio Romério Briglia Ferreira, Ciro Campos de Sousa, Marcos Wesley de Oliveira, "[Health Risk Assessment Attributed to Consumption of Fish Contaminated with Mercury in the Rio Branco Basin, Roraima, Amazon, Brazil](#)", Toxics, Vol. 10, agosto de 2022.
- 122 Environmental Protection Agency (EPA), "[Información básica sobre el mercurio](#)".
- 123 Ao Ponto, "[The Yanomami drama: 'Even I ask the prospector for help'](#)", O Globo, 25 de noviembre de 2021.
- 124 Ibid.
- 125 Laura Trajber Waisbich, Carolina Andrade y Lycia Brasil, "[Guidance Note on Combating Environmental Crime](#)", Instituto Igarapé e Interpol, 2021.
- 126 Bruno Mazolli, Raoni Rajão, et.al, "[Legalidade da Produção de Ouro No Brasil](#)", Ministério Público Federal, Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais (UFMG), Center for Remote Sensing (UFMG), 2021.
- 127 Melina Risso, Julia Sekula, Lycia Brasil, Peter Schmidt y Maria Eduarda Pessoa de Assis, "[Illegal gold that undermines forests and lives in the Amazon: An overview of irregular mining and its impacts on Indigenous populations](#)", Instituto Igarapé, abril de 2021.
- 128 Ana Carolina Bragança, "[Manual de Atuação Mineração Ilegal](#)", Ministério Público Federal, 2020.
- 129 Ana Carolina Bragança, "[Manual de Atuação Mineração Ilegal](#)", Ministério Público Federal, 2020; Laura Trajber Waisbich, Carolina Andrade y Lycia Brasil, "[Guidance note on combating environmental crime. Lessons from fighting illegal gold mining in the Amazon Basin](#)", Instituto Igarapé, diciembre de 2021.
- 130 Laura Trajber Waisbich, Carolina Andrade y Lycia Brasil, "[Guidance note on combating environmental crime. Lessons from fighting illegal gold mining in the Amazon Basin](#)", Instituto Igarapé, diciembre de 2021.
- 131 MapBiomas, "[Area occupied by mining in Brazil grows more than 6 times between 1985 and 2020](#)", Agosto de 2021.
- 132 Sally K. Springer, Bernhard G. Peregovich y Mario Schmidt, "[Capability of social life cycle assessment for analyzing the artisanal small-scale gold mining sector—case study in the Amazonian rainforest in Brazil](#)", The International Journal of Life Cycle Assessment, 2020.
- 133 Jimmy Carillo, "[Conoce a los 'Garimpeiros', Minereros informales sin fronteras](#)", Las Rutas del Oro, 23 de marzo de 2015.
- 134 Eduardo Militao, "[Garimpeiros ilegais do Brasil invadem área ianomâmi na Amazônia venezuelana](#)", UOL, 19 de junio de 2022.
- 135 Asociación Hutukara Yanomami e Instituto Social-Ambiental (Hutukara Associação Yanomami e Instituto Socioambiental, ISA), "[Yanomami Under Attack: Illegal Mining on Yanomami Indigenous Lands and Proposals to Combat it](#)", abril de 2022; Piero Locatelli y Guilherme Henrique, "[R\\$ 200 mil por semana: quanto fatura um piloto de aeronaves no garimpo](#)", Ouro Do Sangue Yanomami, 24 de junio de 2021.
- 136 Ibid.
- 137 Ibid.
- 138 O Globo and Rede Amazônica, "[Mulher dona de garimpo é citada em relatório sobre ataque a tiros contra comunidade na Terra Yanomami](#)", 26 de junio de 2022.
- 139 Asociación Hutukara Yanomami e Instituto Social-Ambiental (Hutukara Associação Yanomami e Instituto Socioambiental, ISA), "[Yanomami Under Attack: Illegal Mining on Yanomami Indigenous Lands and Proposals to Combat it](#)", abril de 2022.
- 140 Ibid.
- 141 Ibid.
- 142 Patrícia Campos Mello y Mathilde Missionero, "[Traficantes de pessoas mudam tática e atraem mulheres para dívidas impagáveis](#)", Folha de

S. Paulo, 18 de octubre de 2021.

- 143 Juliana Dama y Valéria Oliveira, "[Vídeo mostra garimpeiros armados e prontos para 'fazer guerra' antes de ataque em comunidade na Terra Yanomami](#)", O Globo, 10 de agosto de 2021.
- 144 *Ibid.*
- 145 Emily Costa, "[PCC amplia atuação na Terra Indígena Yanomami](#)", Amazonia Real, 17 de agosto de 2021.
- 146 O Globo, "[Foragido suspeito de participar de ataques em comunidade na Terra Yanomami é preso em Boa Vista](#)", 10 de agosto de 2021.
- 147 Emily Costa, "[PCC amplia atuação na Terra Indígena Yanomami](#)", Amazonia Real, 17 de agosto de 2021.
- 148 Amazônia Real, "[Como o PCC se infiltrou nos garimpos em Roraima](#)", 11 de mayo de 2021.
- 149 Felipe Pereira, "[PCC atua em área de garimpo em Roraima](#)", UOL, 1 de febrero de 2022.
- 150 *Ibid.*
- 151 Laura Trajber Waisbich, Terine Husek y Vinicius Santos, "[Territórios e caminhos do crime ambiental na Amazônia brasileira: da floresta às demais cidades do país](#)", Instituto Igarapé, julio de 2022.
- 152 Isabela Camargo y Andréia Sadi, "[PF tem quase 70 inquéritos para investigar garimpo ilegal em Terra Yanomami](#)", G1 Globo, 31 de enero de 2023.
- 153 Agência Brasil, "[Justiça pede que Funai reabra postos de vigilância em terra Yanomami](#)", 24 de noviembre de 2018.
- 154 Hutukara Asociación Yanomami e Instituto Social-Ambiental (Hutukara Associação Yanomami e Instituto Socioambiental - ISA), "[Yanomami bajo ataque: Minería ilegal en Yanomami Tierras Indígenas y Propuestas para combatirlo](#)", abril de 2022.
- 155 *Ibid.*
- 156 *Ibid.*
- 157 Asociación Hutukara Yanomami (Hutukara Associação Yanomami), "[Um Yanomami é morto e outro ferido após ataque armado em Napolepi, no rio Uraricoera](#)", carta, 4 de octubre de 2022.
- 158 Lula, "[Mais que uma crise humanitária, o que vi em Roraima foi um genocídio. Um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro](#)", Twitter, 22 de enero de 2023.
- 159 Flávio Dino, "[Em relação aos sofrimentos criminosos impostos aos Yanomamis, há fortes indícios de crime de genocídio e outros crimes, que serão apurados pela Polícia Federal, conforme ofício que enviarei na segunda-feira](#)", Twitter, 21 de enero de 2023.
- 160 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), "[Ibama e Funai iniciam retomada do território Yanomami](#)", 8 de febrero de 2023.
- 161 *Ibid.*
- 162 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), "[Ibama e Funai iniciam retomada do território Yanomami](#)", 8 de febrero de 2023; Amanda Perobelli, "[Brazil agencies launch raid against illegal gold miners in Yanomami lands](#)", Reuters, 8 de febrero de 2023.
- 163 Naiara Galarraga Gortázar, "[Brazil launches large-scale operation against the latest gold rush on Indigenous land](#)", El País, 13 de febrero de 2023.
- 164 Vinicius Sassine, "[Garimpo na terra Yanomami vive inflação no preço de voo clandestino e busca de fuga a país vizinho](#)", Folha de S. Paulo, 5 de febrero de 2023; Anthony Boadle, "[Brazil readies task force to expel miners from Yanomami lands, officials say](#)", Reuters, 1 de febrero de 2023.
- 165 Vinicius Sassine, "[Garimpo na terra Yanomami vive inflação no preço de voo clandestino e busca de fuga a país vizinho](#)", Folha de S. Paulo, 5 de febrero de 2023.
- 166 Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), comunicado de prensa, "[Operação Yanomami: 66 aeronaves foram impedidas de voar](#)", 20 de septiembre de 2021.
- 167 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), "[Ibama embarga 59 pistas de pouso clandestinas que atendiam garimpo na Terra Indígena Yanomami](#)", 9 de septiembre de 2021.
- 168 Hyury Potter, "[As Pistas Da Destruição](#)", The Intecept Brasil, 2 de agosto de 2022.
- 169 Manuela Andreoni, Blacki Migliozi, Pablo Robles y Denise Lu, "[The Illegal Airstrips Bringing Toxic Mining to Brazil's Indigenous Land](#)", The New York Times, 2 de agosto de 2022.
- 170 Naiara Galarraga Gortázar, "[Brazil launches large-scale operation against the latest gold rush on Indigenous land](#)", El País, 13 de febrero de 2023.
- 171 Manuela Andreoni, Blacki Migliozi, Pablo Robles y Denise Lu, "[The Illegal Airstrips Bringing Toxic Mining to Brazil's Indigenous Land](#)", The New York Times, 2 de agosto de 2022.
- 172 Scott Mistler-Ferguson, "[Aviones ligeros realizan operaciones de minería ilegal en Amazonía brasileña](#)", InSight Crime, 6 de octubre de 2021; Piero Locatelli y Guilherme Henrique, "[R\\$ 200 mil por semana: como funciona o mercado de aeronaves que apoia o garimpo ilegal na TI Yanomami](#)", Repórter Brasil, 24 de junio de 2021.

- 173 *Ibid.*
- 174 Jonathan Watts, “[‘We have the worst record in the world’: the deadly business of Brazil’s bush pilots](#)”, *The Guardian*, 4 de abril de 2017.
- 175 Piero Locatelli y Guilherme Henrique, “[R\\$ 200 mil por semana: como funciona o mercado de aeronaves que apoia o garimpo ilegal na TI Yanomami](#)”, *Repórter Brasil*, 24 de junio de 2021.
- 176 *Ibid.*
- 177 Rede Amazônica, “[Empresário defensor de garimpo é investigado pela Polícia Federal por exploração na Terra Yanomami](#)”, 20 de mayo de 2022.
- 178 Vinicius Sassine, “[Empresário bolsonarista é denunciado sob suspeita de chefiar garimpo em área Yanomami](#)”, *Folha de S. Paulo*, 2 de diciembre de 2022.
- 179 Sam Cowie y David Biller, “[Tarnished Gold: Aircraft, Fuel, Key to Illegal Mining](#)”, *Associated Press*, 11 de enero de 2022.
- 180 Fabio Serapião y Vinicius Sassine, “[Grupo suspeito de garimpo ilegal em terra Yanomami movimentou mais de R\\$ 200 milhões, diz PF](#)”, *Folha de S. Paulo*, 19 de mayo de 2022.
- 181 Rede Amazônica, “[Empresário defensor de garimpo é investigado pela Polícia Federal por exploração na Terra Yanomami](#)”, 20 de mayo de 2022.
- 182 João Gabriel, “[Congresso terá ao menos oito empresários ou articuladores do garimpo e da mineração](#)”, *Folha de S. Paulo*, 13 de octubre de 2022.
- 183 *Ibid.*
- 184 Fabio Serapião, “[Filho de garimpeiro que movimentou R\\$ 200 mi é preso após queda de helicóptero](#)”, *Folha de S. Paulo*, 8 de noviembre de 2022.
- 185 Maria Fernanda Ribeiro y Clara Britto, “[‘Compro tudo’: ouro Yanomami é vendido livremente na rua do Ouro, em Boa Vista](#)”, *Repórter Brasil*, 24 de junio de 2021.
- 186 *Ibid.*
- 187 *Ibid.*
- 188 João Fellet, “[Roraima exporta 194 kg de ouro à Índia sem ter nenhuma mina operando legalmente](#)”, *BBC News Brasil*, 12 de junio de 2019.
- 189 Banco Central de Brasil, “[Das lavras ao mercado: conheça o caminho do ouro e o papel do BC nesse segmento](#)”, 23 de febrero de 2017; Zachary Skidmore, “[Illegal gold in the Brazilian Amazon](#)”, *Mining Technology*, 10 de marzo de 2022.
- 190 Instituto Escolhas, “[Gold Under the Microscope: More than 200 tons of Brazilian Gold Are Potentially Illegal](#)”, febrero de 2022.
- 191 *Ibid.*
- 192 Ley de Brasil N.º 12.844, art. 14.
- 193 Entrevista telefónica de InSight Crime, Larissa Rodrigues, gerente de cartera, Instituto Escolhas, 23 de junio de 2022
- 194 Ministério Público Federal (MPF), comunicado de prensa, “[MPF pede suspensão de instituições financeiras que compraram ouro ilegal no Pará](#)”, 30 de agosto de 2021.
- 195 Kátia Brasil, “[Ouro da terra Yanomami era vendido em empresa da Avenida Paulista](#)”, *Amazonia Real*, 18 de mayo de 2015.
- 196 Inaê Brandão, “[Extração ilegal em garimpo de RR movimentou quase R\\$ 1 bi, diz PF](#)”, *O Globo*, 7 de mayo de 2015.
- 197 Kátia Brasil, “[PF desarticula organização criminosa de extração de ouro na reserva Yanomami](#)”, *Amazonia Real*, 7 de mayo de 2015.
- 198 Kátia Brasil, “[Ouro da terra Yanomami era vendido em empresa da Avenida Paulista](#)”, *Amazonia Real*, 18 de mayo de 2015.
- 199 *Ibid.*
- 200 Ministério de Minas e Energía e Agência Nacional de Mineração, “[Resolução ANM N.º 129, de 23 de fevereiro de 2023](#)”, 27 de febrero de 2023.
- 201 Ministério de Minas e Energía e Agência Nacional de Mineração, “[Resolução ANM N.º 129, de 23 de fevereiro de 2023](#)”, 27 de febrero de 2023; Sean Doherty, “[Brasil enfrenta minería ilegal de oro por vías de fuerza y legislativas](#)”, *InSight Crime*, 7 de marzo de 2023; Anthony Boadle y Lisandra Paraguassu, “[Exclusive: Brazil plans legislation to crack down on laundering of illegal gold](#)”, *Reuters*, 16 de febrero de 2023.
- 202 Tiago M. Conde, Niro Higuchi, Adriano J. N. Lima, “[Illegal Selective Logging and Forest Fires in the Northern Brazilian Amazon](#)”, *Forests*, enero de 2019.
- 203 Environmental Investigation Agency (EIA), “[Condenando el bosque](#)”, 2019.
- 204 Entrevista telefónica de InSight Crime con miembro de la comunidad nativa de Fray Pedro, grupo étnico Matsés, 30 de agosto de 2022.
- 205 InSight Crime e Instituto Igarapé, “[Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía colombiana](#)”, 1 de septiembre de 2021.
- 206 InSight Crime e Instituto Igarapé, “[Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía colombiana](#)”, 2 de junio de 2022; James Bargent, “[Los Patrones y sus patrones en Ucayali, Perú](#)”, *InSight Crime*, 18 de septiembre de 2020.
- 207 Environmental Investigation Agency (EIA), “[Condenando el bosque](#)”, 2019.

- 208 Ibid.
- 209 Marilyne Pereira et al., "[Justice for Forests Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging](#)", Banco Mundial, 2012.
- 210 Entrevistas telefónicas de InSight Crime con Rolando Navarro, 9 de junio, 2022; Líderes indígenas de Loreto, 8 de agosto de 2022; 15 de agosto de 2022; 30 de agosto de 2022.
- 211 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), "[Flows, Supply, Demand and Characteristics of the Timber Supply Chain](#)", marzo de 2021; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, "[Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos](#)", Greenpeace, "[Imaginary Trees, Real Destruction](#)", marzo de 2018.
- 212 Los 'patrones' de la selva amazónica colombiana, "[Islandia una frontera abierta para la madera ilegal](#)", 360 grados, 2019.
- 213 Entrevistas telefónicas de InSight Crime con experto forestal peruano, 10 de junio, 2022; miembro de la comunidad indígena Matsés de Fray Pedro, 30 de agosto de 2022.
- 214 Entrevistas telefónicas de InSight Crime con Líderes indígenas de Loreto, 8 de agosto de 2022; 15 de agosto de 2022; 30 de agosto de 2022.
- 215 Distrito Fiscal de Loreto, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, "Carpeta fiscal No 25015200-02-2021".
- 216 Entrevistas telefónicas de InSight Crime con miembro de la comunidad indígena Matsés de Fray Pedro, 30 de agosto de 2022; líderes indígenas de Loreto, 8 de agosto de 2022; 15 de agosto de 2022; 30 de agosto de 2022.
- 217 Entrevistas telefónicas de InSight Crime con líderes indígenas de Loreto, 8 de agosto de 2022; 15 de agosto de 2022; 30 de agosto de 2022; miembro de la comunidad indígena Matsés de Fray Pedro, 30 de agosto de 2022.
- 218 Distrito Fiscal de Loreto, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, "Carpeta fiscal No 25015200-02-2021"; Entrevistas telefónicas de InSight Crime con miembro de la comunidad indígena Matsés de Fray Pedro, 30 de agosto de 2022; líderes indígenas de Loreto, 8 de agosto de 2022; 15 de agosto de 2022; 30 de agosto de 2022.
- 219 Nelly Luna Amancio, "[Operación Amazonas: la historia del mayor decomiso de madera de origen ilegal](#)", Ojo Público, 3 de diciembre de 2015.
- 220 Geraldine Santos, "[Los Duros del Amazonas: empresarios y funcionarios investigados por red de tráfico de madera](#)", Ojo Público, 5 de marzo de 2022.
- 221 Geraldine Santos, "[Los Duros del Amazonas: empresarios y funcionarios investigados por red de tráfico de madera.](#)", Ojo Público, 5 de marzo de 2022; Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), "[Así operaba en Loreto organización dedicada al tráfico ilegal de madera](#)", Actualidad Ambiental, 14 de marzo de 2022.
- 222 Entrevista telefónica de InSight Crime con Rolando Navarro, exdirector de Osinfor, 10 de junio de 2022.
- 223 Ibid.
- 224 Ibid.
- 225 Entrevista de InSight Crime con piloto en Amazonas y Bolívar, Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela, 2 de marzo de 2022.
- 226 Unidad de Investigación de Venezuela, "[La transición de Venezuela hacia la producción de cocaína: cultivos, químicos y evolución criminal](#)", InSight Crime, 2 de mayo de 2022.
- 227 Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), "[Perú. Monitoreo de Cultivos de Coca 2004](#)", junio de 2005.
- 228 Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) y Carlos Resa Nestares, "[Cultivos de coca y desarrollo humano](#)", febrero de 2014.
- 229 InSight Crime, "[Sendero Luminoso](#)", 23 de mayo de 2021.
- 230 Hannah Stone, "[Estados Unidos acusa a guerrilleros de Sendero Luminoso](#)", InSight Crime, 23 de julio de 2014.
- 231 Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), "[Perú. Monitoreo de Cultivos de Coca 2004](#)", junio de 2005.
- 232 Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) y Carlos Resa Nestares, "[Cultivos de coca y desarrollo humano](#)", febrero de 2014.
- 233 Sistema de Información de Lucha contra las Drogas (SISCOD), "[Reporte N. 03 – Octubre 2021. Producción estimada de hoja de coca en el Perú, 2020](#)", octubre de 2021.
- 234 Sistema de Información de Lucha contra las Drogas (SISCOD), "[Reporte N. 07 - Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca monitoreada en 2021](#)", septiembre de 2022.
- 235 Entrevistas de InSight Crime con militares, Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022; 8 de agosto de 2022.
- 236 Entrevista de InSight Crime con Juan Mojica y Santos Mojica, delegados de la comunidad indígena de Nazareth, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2022.
- 237 Entrevista de InSight Crime con Juan Mojica y Santos Mojica, delegados de la comunidad indígena de Nazareth, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2022; Entrevista de InSight Crime con Leticia, Amazonas, 8 de agosto de 2022.
- 238 Pamela Huerta Bustamante, "[Narcobenefactores, el tributo del narco en los márgenes de la Amazonía Peruana](#)", La República, 6 de marzo de 2022.
- 239 Ibid.

- 240 *Ibid.*
- 241 *Ibid.*
- 242 Dan Collyns, [“Perú’s Indigenous communities fear rising violence from drug traffickers”](#), Reuters, 28 de junio de 2022.
- 243 Entrevista telefónica de InSight Crime con Alcaldía de Mariscal Ramón Castilla, 20 de septiembre de 2022.
- 244 Siscod, [“Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca monitoreada en 2021”](#), septiembre de 2022.
- 245 Gobierno de Perú, [“Ocho laboratorios de droga fueron destruidos por fuerzas del orden durante operación Armagedon IV, en el Putumayo”](#), 24 de octubre de 2019.
- 246 Gobierno de Perú, [“Fuerzas del orden destruyen laboratorios clandestinos de droga e intervienen a 4 personas”](#), 14 de marzo de 2020.
- 247 *Ibid.*
- 248 Gobierno de Perú, [“Loreto: Fuerzas del orden detienen a cuatro presuntos narcotraficantes colombianos e incautan más de media tonelada de clorhidrato de cocaína”](#), 13 de febrero de 2021.
- 249 RPP Noticias, [“Ejército destruyó 40 laboratorios del narcotráfico en frontera con Colombia y detuvo a más de 50 personas”](#), 23 de octubre de 2019.
- 250 Entrevista de InSight Crime con soldado de marina, Santa Rosa, Perú, 11 de agosto, 2022.
- 251 *Ibid.*
- 252 Fundación Ideas para la Paz (FIP), [“Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y Ambiental. Tendencias en la pandemia. Enero a abril de 2020”](#), 2020.
- 253 Entrevista de InSight Crime con Jhon Fredy Valencia, secretario de agricultura, medio ambiente y productividad del departamento de Amazonas, Leticia, Amazonas, 12 de agosto de 2022.
- 254 Entrevistas de InSight Crime con líderes indígenas en la XXXVII Mesa Permanente de Concertación Interadministrativa entre las Autoridades Indígenas y la Gobernación del Amazonas, Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022.
- 255 Entrevista de InSight Crime con delegado de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Leticia, Amazonas, 10 de agosto de 2022.
- 256 Perfil de InSight Crime, [“Comandos de la Frontera”](#), Actualizado: 11 de junio de 2022.
- 257 A la Orilla del Río, [“Las guerras del posacuerdo: ¿quiénes son los Comandos de Frontera?”](#), 13 de abril de 2022.
- 258 El trabajo de campo de InSight Crime proporcionó material de fuentes de fuerza pública de Colombia y mapas de rutas de tráfico.
- 259 *Ibid.*
- 260 Entrevista de InSight Crime con funcionario de derechos humanos, Leticia, Amazonas, 9 de agosto de 2022.
- 261 InSight Crime, [“Familia del Norte”](#), 5 de marzo de 2020.
- 262 Joana Queiroz, [“‘Os Crias’: surge uma nova facção criminosa no Amazonas”](#), A Crítica, 24 de julio de 2022.
- 263 Entrevista de InSight Crime con agente de policía, Leticia, Amazonas, 8 de agosto de 2022.
- 264 Diario del Distrito Judicial de Loreto, [“Policía muere en asalto al Banco de la Nación de Santa Rosa”](#), 18 de diciembre de 2021.
- 265 Renato Sérgio Lima, [“Twitter post”](#), 6 de junio de 2022.
- 266 Vinicius Sassine, [“Piratas atacam traficantes e garimpeiros, simulam PF e ampliam violência em rios da Amazônia”](#), Folha de S. Paulo, 1 de agosto de 2022.
- 267 The Guardian, [“Three charged in Brazil with murder of Dom Phillips y Bruno Pereira”](#), 22 de julio de 2022.
- 268 Tom Phillips, [“Brazilian police name alleged ‘mastermind’ behind murders of Dom Phillips y Bruno Pereira”](#), The Guardian, 23 de enero de 2023.
- 269 *Ibid.*
- 270 InSight Crime, [“El Dorado de Maduro: Bandas, guerrillas y el oro de Venezuela”](#), 17 de noviembre de 2021.
- 271 Gobierno de Brasil (Governo do Brasil), [“Constituição da República Federal do Brasil de 1988”](#).
- 272 Instituto Socioambiental (Instituto Socioambiental – ISA), [“Terra Indígena Alto Rio Negro”](#).
- 273 El Instituto Socioambiental (Instituto Socioambiental – ISA), [“Terra Indígena Yanomami”](#).
- 274 Luís Roberto Barroso y Patrícia Perrone Campos Mell, [“In Defense of the Amazon Forest: The Role of Law y the Courts”](#), Harvard International Law Journal, marzo de 2021.
- 275 Proyecto de Ley, [PL 191/120](#).
- 276 Rafael Neves, [“Após críticas, projeto de mineração em terras indígenas trava na Câmara”](#), UOL, 12 de abril de 2022.
- 277 Fabiano Maisonave, [“Mining companies back away from Brazil’s Indigenous areas”](#), Associated Press, 20 de mayo de 2022.
- 278 Rádio Nacional, [“STF anula lei de Roraima que liberava uso do mercúrio no garimpo”](#), 16 de septiembre de 2021.
- 279 MPF comunicado de prensa, [“Lei estadual de Roraima que restringe combate ao garimpo é inconstitucional”](#), 5 de julio de 2022.

- 280 Bruno Meyerfeld, "[Brazil: Deforestation in the Amazon can be traced to Jair Bolsonaro's policies](#)", Le Monde, 30 de octubre de 2022.
- 281 Katie Jones, Maria Fernanda Ramírez y Juan Diego Cárdenas, "[GameChangers 2021: La selva amazónica sucumbe bajo la voracidad del crimen organizado](#)", InSight Crime, 28 de diciembre de 2021.
- 282 Roberto Peixoto, "[Amazônia: 2022 já tem pior marca da série histórica de alertas de desmate do Inpe](#)", O Globo, 28 de octubre de 2022.
- 283 Luciana V Gatti, Luana S. Basso, Miller, John B. Miller, et al., "[Amazonia as a carbon source linked to deforestation y climate change](#)", Nature, Vol. 595, 14 de julio de 2021.
- 284 Reuters, "[COP27:Brazil's Lula says Amazon rainforest vital to global climate security](#)", 16 de noviembre de 2022.
- 285 Adriana Ramos, Ilona Szabó, Marcio Astrini y Beto Veríssimo, "[Lula: plano prevê combate a crimes ambientais e desmatamento, sem detalhar ações](#)", Plenamata, 27 de septiembre de 2022.
- 286 Vinicius Sassine, "[Garimpo na terra Yanomami vive inflação no preço de voo clandestino e busca de fuga a país vizinho](#)", Folha de S. Paulo, 5 de febrero de 2023; Anthony Boadle, "[Brazil readies task force to expel miners from Yanomami lands, officials say](#)", Reuters, 1 de febrero de 2023.
- 287 Chris Dalby, "[Garrote y zanahoria: los trucos de Lula en la criminalizada Amazonía de Brasil](#)", InSight Crime, 1 de febrero de 2023.
- 288 Carlos Henrique Pires Luiz y Valdir Adilson Steinke, "[Recent Environmental Legislation in Brazil y the Impact on Cerrado Deforestation Rates](#)", Sustainability, 2 Julio, 2022.
- 289 Felipe Werneck, "[Bolsonaro amplia vantagem em cidades que mais desmatam na Amazônia](#)", Observatório do Clima, 27 de octubre de 2022.
- 290 Luis Palacios, "[Orinoco's Mining Arc: An environmental crime with global effects](#)", Environmental, Natural Resources, & Energy Blog, Lewis y Clark Law School, 19 de agosto de 2020.
- 291 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, "[Delimitación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco](#)", 24 de febrero de 2016.
- 292 Reuters, "[Venezuela says signs \\$5.5 bln mining deals with companies](#)", 26 de agosto de 2016.
- 293 Bram Ebus, "[Venezuela's Mining Arc boom sweeps up Indigenous people y cultures](#)", Mongabay, 15 de enero de 2018.
- 294 InSight Crime, "[El Dorado de Maduro: Bandas, guerrillas y el oro de Venezuela](#)", 17 de noviembre de 2021.
- 295 Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicado de prensa, "[Treasury Sanctions Venezuela's State Gold Mining Company y its President for Propping Up Illegitimate Maduro Regime](#)", 19 de marzo de 2019.
- 296 Cristina Vollmer Burelli, "[The Destruction of Venezuela's Amazon Is Going Virtually Unnoticed](#)", Americas Quarterly, 18 de octubre de 2022.
- 297 Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicado de prensa, "[Treasury Sanctions Venezuela's State Gold Mining Company y its President for Propping Up Illegitimate Maduro Regime](#)", 19 de marzo de 2019.
- 298 Entrevista telefónica de InSight Crime con político opositor, 12 de junio de 2020.
- 299 Transparencia Venezuela, "[Oro mortal](#)", diciembre de 2019.
- 300 Mark Lowen, "[Turkey warned over Venezuela gold trade](#)", BBC, 2 de febrero de 2019.
- 301 Gabriele Steinhauser y Nicholas Bariyo, "[How 7.4 Tons of Venezuela's Gold Landed in Africa—and Vanished](#)", The Wall Street Journal, 18 de junio de 2019.
- 302 Mayela Armas, "[UPDATE 1-UAE's Noor Capital says it bought 3 tonnes of gold from Venezuela](#)", Reuters, 1 de febrero de 2019.
- 303 Lisseth Boon y Lorena Meléndez, "[BCV: la exprimidora oficial del oro venezolano](#)", RunRunes.
- 304 Otto Huber, "[Conservation y Environmental Concerns in the Venezuelan Amazon](#)", Biodiversity and Conservation, octubre de 2001.
- 305 Ibid.
- 306 InSight Crime e Instituto Igarapé, "[La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países](#)", 9 de noviembre de 2022.
- 307 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, "[Ley Orgánica del Ambiente](#)", 22 de diciembre de 2006; InSight Crime e Instituto Igarapé, "[La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países](#)", 9 de noviembre de 2022.
- 308 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, "[Ley Penal del Ambiente](#)", 2 de mayo, 2012.
- 309 Francisco Dallmeier y Cristina V. Burelli, "[The World Must Act to Stop Venezuela's Environmental Destruction](#)", The Washington Post, 22 de febrero de 2021.
- 310 Elsa Gabriela Rodríguez, "[Situación socioambiental de Venezuela 2021](#)", Observatorio de Ecología Política de Venezuela, febrero de 2022.
- 311 Global Forest Watch, "[Venezuela](#)".
- 312 Ana Cucalón, "[Colombia y Venezuela restablecen relaciones bilaterales con la llegada de embajadores a Bogotá y Caracas](#)", CNN, 29 de agosto de 2022; El Nuevo Siglo, "[Lula anuncia que Brasil restablecerá relaciones con Venezuela](#)", 23 de enero de 2023.
- 313 Unidad de Investigación de Venezuela, "[Continúan dudas sobre esfuerzos de Venezuela para detener la minería ilegal](#)", InSight Crime, 17 de febrero de 2023.

- 314 Unidad de Investigación de Venezuela, [“Continúan dudas sobre esfuerzos de Venezuela para detener la minería ilegal”](#), InSight Crime, 17 de febrero de 2023.
- 315 Unidad de Investigación de Venezuela, [“Continúan dudas sobre esfuerzos de Venezuela para detener la minería ilegal”](#), InSight Crime, 17 de febrero de 2023; Fabiana Márquez, [“Desmantelan campamento de minería ilegal en el Parque Nacional Yacapana”](#), Venezuela News, 30 de enero de 2023.
- 316 Katie Jones y Maria Fernanda Ramírez, [“Deforestación en la Amazonía colombiana: delimitación del problema”](#), InSight Crime, 1 de septiembre de 2021.
- 317 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), [“Resultados de monitoreo de la deforestación 2019”](#), 9 de julio de 2020.
- 318 Oliver Griffin, [“Colombia’s President Duque confident in cutting deforestation in half”](#), Reuters, 28 de octubre de 2020.
- 319 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), [“Resultados de monitoreo de la deforestación 2019”](#), 9 de julio de 2020.
- 320 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, [“Se reduce y se contiene la deforestación en Colombia durante los últimos cuatro años”](#), Comunicado de prensa, 15 de julio de 2022.
- 321 EFE, [“Deforestación aumentó 10% en el primer trimestre en Colombia”](#), 21 de julio de 2022.
- 322 César Giraldo Zuluaga, [“Los 5 puntos claves de la estrategia del Gobierno Petro para frenar la deforestación”](#), El Espectador, 7 de septiembre de 2022.
- 323 El Tiempo, [“Ley crea seis nuevos delitos ambientales y fortalece las sanciones de cinco delitos ya existentes”](#), 10 de agosto de 2021.
- 324 Antonio Paz Cardona, [“Punto de quiebre en la Amazonía peruana y colombiana: las raíces de los delitos ambientales | Entrevista”](#), Mongabay, 12 de junio de 2022.
- 325 Katie Jones y Maria Fernanda Ramírez, [“Un largo camino: respuestas a delitos ambientales en la Amazonía colombiana”](#), InSight Crime, 29 de septiembre de 2021.
- 326 Dejusticia, [“Campaña Artemisa en Serranía de La Macarena no puede atropellar los derechos del campesinado”](#), 25 de febrero de 2020; David Tarazona y Julián Parra De Moya, [“Artemisa: radiografía de una operación gubernamental que no frenó la deforestación en Colombia”](#), Mongabay, 5 de diciembre de 2022.
- 327 Christina Noriega, [“Colombia’s new anti-deforestation law provokes concern for small-scale farmers”](#), Mongabay, 10 de enero de 2022.
- 328 El Tiempo, [“Gustavo Petro: salvar la selva amazónica es ‘asunto de seguridad nacional’”](#), 19 de agosto de 2022.
- 329 Gustavo Petro, [“Programa de Gobierno 2022-2026”](#), Comunicado de prensa.
- 330 Camilo Andrés Garzón, [“Memo para Petro: el país que recibe en temas ambientales”](#), La Silla Vacía, 15 de junio de 2022.
- 331 Asuntos de la ONU, [“Irrational war on drugs, destruction of the Amazon, expose humanity’s failures, Colombia’s Petro tells UN”](#), Comunicado de prensa, 20 de septiembre de 2022.
- 332 Caracol Noticias, [“Presidente Petro propone pagarles a campesinos cocaleros si cambian cultivos por conservar la selva”](#), 22 de octubre de 2022.
- 333 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), [“Des-Cifrando. Las familias guardabosques. Indicadores año 2006”](#), octubre de 2007.
- 334 Simon Jessop y Jake Spring, [“COP27 Countries band together to keep forest promise”](#), Reuters, 7 de noviembre de 2022.
- 335 Ibid.
- 336 Gobierno de Perú, [“Ley General del Ambiente, Ley N. 28611”](#), 2013.
- 337 Ministerio del Ambiente, [“Compendio de la Legislación Ambiental Peruana”](#).
- 338 Gobierno de Perú, [“Ley General del Ambiente, Ley N. 28611”](#), 2013.
- 339 El Comercio, [“Ministerio de Cultura: inscripción de reserva Yavari Tapiche en Sunarp brinda seguridad jurídica en más de un millón de hectáreas”](#), 27 de diciembre de 2021.
- 340 Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), [“AIDSESEP y ORPIO reiteran a Serfor pedido de anulación de las 47 concesiones forestales ilegales en territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento”](#), Comunicado de prensa, 14 de noviembre de 2022.
- 341 Timber Trade Portal, [“Legal Framework for Forest Management y Timber Trade of Perú”](#), Resumen.
- 342 Elisabetta Marinoni y Scott Mistler-Ferguson, [“Resiliencia estatal: la poca voluntad política para proteger la Amazonía peruana”](#), InSight Crime, 2 de junio de 2022.
- 343 Yvette Sierra Praeli, [“Perú alcanza cifra deforestación más alta en los últimos 20 años”](#), Mongabay, 7 de octubre de 2021.
- 344 Nicol León, [“Congreso insiste en aprobar ley que fomenta deforestación en la Amazonía”](#), Infobae, 10 de noviembre de 2022.
- 345 Yvette Sierra Praeli, [“Los desafíos ambientales de Perú en el 2023: nuevos gobernadores regionales, leyes ambientales en peligro y la deforestación imparable de la Amazonía”](#), Mongabay, 16 de enero de 2023.

- 346 Entrevista telefónica de InSight Crime con representante de ORPIO, 24 de junio de 2022; Yvette Sierra Praeli, [“Perú: proyecto de ley pone en peligro a pueblos indígenas en aislamiento al negar su existencia”](#), Mongabay, 6 de febrero de 2023.
- 347 *Ibid.*
- 348 InSight Crime e Instituto Igarapé, [“La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países”](#), 9 de noviembre de 2022; Elisabetta Marinoni y Scott Mistler-Ferguson, [“Resiliencia estatal: la poca voluntad política para proteger la Amazonía peruana”](#), InSight Crime, 2 de junio de 2022; InSight Crime e Instituto Igarapé, [“Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía colombiana”](#), 1 de septiembre de 2021.
- 349 Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, [“Amazon Cooperation Treaty Organization – ACTO”](#), 10 de noviembre de 2020; María Antonia Tigre, [“Regional Cooperation in Amazonia: a comparative environmental law analysis”](#), Leiden, Boston, 2017.
- 350 Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, [“Organización del Tratado de Cooperación Amazónica \(OTCA\)”](#).
- 351 *Ibid.*
- 352 María Antonia Tigre, [“Regional Cooperation in Amazonia: a comparative environmental law analysis”](#), Leiden, Boston, 2017.
- 353 Convención de Minamata sobre el Mercurio, [“Parties y signatories”](#).
- 354 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, [“Aprobado Acuerdo de Escazú a 63 días de iniciar Gobierno del presidente Petro”](#), Comunicado de prensa, 10 de octubre de 2022.
- 355 Naciones Unidas, [“Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America y the Caribbean”](#), 2018.
- 356 Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, [“Presidente Gustavo Petro sanciona la ley que aprueba el Acuerdo de Escazú”](#), Comunicado de prensa, 5 de noviembre de 2022.
- 357 *Ámbito Jurídico*, [“Tras más de tres años, Congreso aprueba Acuerdo de Escazú”](#), 11 de octubre de 2022.
- 358 *Matías Jara*, [“Defensores ambientales: catorce países de América Latina han ratificado Acuerdo de Escazú”](#), Ojo Público, 12 de octubre de 2022.
- 359 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), [“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”](#).
- 360 CITES, [“What is CITES?”](#).
- 361 Ministerio de Relaciones Exteriores, [“Pacto de Leticia por la Amazonía”](#).
- 362 Anastasia Moloney y Fabio Teixeira, [“Two years on, forest pact’s ‘good intentions’ do little to protect Amazon”](#), Reuters, 6 de septiembre de 2021.
- 363 Portafolio, [“Las claves de la primera reunión entre Petro y Maduro: de qué hablaron”](#), 1 de noviembre de 2022.
- 364 AFP, [“Presidentes Maduro y Petro se unen para protección de la Amazonía”](#), 8 de noviembre de 2022.
- 365 *Ibid.*
- 366 Guilherme Balza, [“Lula articula inédita Cúpula da Amazônia para este semestre”](#), G1 Globo, 4 de enero de 2023.
- 367 *Ibid.*
- 368 MapBiomias, [“About”](#).
- 369 Amazon Mining Watch, [“About”](#).
- 370 Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), [“About”](#).
- 371 Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), [“What is RAISG”](#).
- 372 InfoAmazonia, [“About”](#).
- 373 Repórter Brasil, [“About”](#).
- 374 Ana María Machado, Talita Bedinelli, y Eliane Brum, [“No conseguimos ni contar los cuerpos”](#), Sumaúma, 20 de enero de 2023.
- 375 Parques Nacionales Cómo Vamos, [“Informe de Indicadores 2022”](#).
- 376 *Ibid.*
- 377 SOS Orinoco, [“La minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional”](#), enero de 2019.
- 378 Ojo Público, [“Nosotros”](#).
- 379 Proética, [“¿Quiénes Somos?”](#).
- 380 Sociedad Peruana derecho Ambiental (SPDA), [“Quiénes somos”](#).
- 381 Environmental Investigation Agency (EIA), [“About us”](#).
- 382 Entrevista telefónica de InSight Crime con representante de ORPIO, 24 de junio de 2022; Yvette Sierra Praeli, [“Perú: proyecto de ley pone en peligro a pueblos indígenas en aislamiento al negar su existencia”](#), Mongabay, 6 de febrero de 2023.

- 383 Hutukara Associação Yanomami e Instituto Socioambiental (ISA), [“Yanomami Under Attack: Illegal Mining on Yanomami Indigenous Lands y Proposals to Combat it”](#), abril de 2022.
- 384 Ibid.
- 385 Marta Ranucci, [“Brasil: seguridad, defensa e integración regional. ¿la Amazonia como oportunidad o límite del camino al liderazgo?”](#) Spanish Institute for Strategic Studies (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 6 de febrero de 2014; Juan Carlos Aristizábal Cortés, [“Crimen organizado transnacional en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú”](#), Seguridad y Poder Terrestre, diciembre de 2022.
- 386 Ibid.
- 387 Gobierno de Brasil, [“Constituição da República Federal do Brasil de 1988”](#).
- 388 Ibid.
- 389 Ibid.
- 390 Agência Brasil, [“Justiça pede que Funai reabra postos de vigilância em terra Yanomami”](#), 24 de noviembre de 2018.
- 391 Ibid.
- 392 Ibid.
- 393 Manuela Andreoni, Blacki Miglozzi, Pablo Robles y Denise Lu, [“The Illegal Airstrips Bringing Toxic Mining to Brazil's Indigenous Land”](#), New York Times, 2 de agosto de 2022.
- 394 Anthony Boadle, [“Brazil readies task force to expel miners from Yanomami lands, officials say”](#), Reuters, 1 de febrero de 2023.
- 395 SOS Orinoco, [“La minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional”](#), enero de 2019.
- 396 Ibid.
- 397 Ejército de Colombia, [“Divisiones Ejército de Colombia”](#).
- 398 Armada de Colombia, [“Reseña Histórica de la Fuerza Naval del Oriente”](#).
- 399 Comunicado del gobierno de Colombia, [“‘Anostomus’: exitoso resultado contra la minería ilegal y criminal”](#), 10 de mayo de 2015.
- 400 Ana Jimena Bautista, [“Artemisa: Operación anticampesina vestida de verde”](#), Dejusticia, 5 de abril de 2022.
- 401 Juan Carlos Aristizábal Cortés, [“Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera entre Brasil, Colombia y Perú”](#), Seguridad y Poder Terrestre, diciembre de 2022.
- 402 Ibid.
- 403 Sociedad Peruana derecho Ambiental (SPDA), [“Madre de Dios: 1200 policías y 300 militares realizarán operativos contra minería ilegal”](#), Actualidad Ambiental, 19 de febrero de 2019.
- 404 Entrevista de InSight Crime con funcionario de la Alcaldía, Santa Rosa, Perú, 11 de octubre de 2022.
- 405 WWF, [“Perú y Colombia unen esfuerzos para detener el tráfico de madera”](#), 18 de noviembre de 2021.
- 406 Nelly Luna Almancio, [“Operación Amazonas: la historia del mayor decomiso de madera de origen ilegal”](#), Ojo Público, 3 de diciembre de 2015.
- 407 Defensoría del Pueblo de Colombia, [“Alerta Temprana No. 002-21”](#), 26 de enero de 2021.
- 408 Anna Beatriz Anjos y Bruno Fonseca, [“Vale do Javari teve multa recorde por pesca ilegal de pirarucu no Amazonas”](#), Publica, 8 de junio de 2022.
- 409 Ibid.
- 410 Caio Freitas Paes, [“Brazil's Roraima state at mercy of 2019 wildfires as federal funds dry up”](#), Mongabay, 25 de junio de 2019.
- 411 Entrevista de InSight Crime en la XXXVII Mesa Permanente de Coordinación Interadministrativa, Leticia, Amazonas, 10 de julio de 2022.
- 412 Helena N. Alves-Pinto, [“The role of different governance regimes in reducing native vegetation conversion and promoting regrowth in the Brazilian Amazon”](#), Biological Conservation, vol. 267, marzo de 2022.
- 413 MapBiomias, [“Vegetação nativa perde espaço para a agropecuária nas últimas três décadas”](#), agosto de 2021.
- 414 Naidú Duque-Cante, [“Áreas no municipalizadas y autonomía de los pueblos indígenas en Colombia”](#), Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 22 de junio de 2020.
- 415 Ibid.
- 416 Laura Trajber Waisbich, Terine Husek y Vinicius Santos, [“Territórios e caminhos do crime ambiental na Amazônia brasileira: da floresta às demais cidades do país”](#), Instituto Igarapé, julio de 2022.
- 417 Entrevista telefónica de InSight Crime con funcionario del Concejo Municipal de Mariscal Ramón Castilla, 20 de septiembre de 2022.
- 418 Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), [“Alternative Development Success Stories”](#).
- 419 Global Witness, [“In Colombia, implementing the Escazú Agreement is a matter of life and death”](#), 7 de octubre de 2022.
- 420 Lisseth Boon, [“Acuerdo Escazú | A Venezuela no le interesa firmar el pacto regional para proteger el planeta”](#), Tal Cual, 22 de abril de 2021.



INSTITUTO IGARAPÉ
a think and do tank



**InSight
Crime**

El Instituto Igarapé es un think tank independiente, que realiza investigaciones, desarrolla soluciones y establece alianzas con el objetivo de impactar en las políticas y prácticas públicas y corporativas para abordar los principales desafíos globales. Su misión es contribuir a la seguridad pública, digital y climática en Brasil y en el mundo. Igarapé es una institución sin fines de lucro y apartidista, con sede en Río de Janeiro y con presencia a nivel local y global.

Para conocer más sobre el programa de seguridad climática del Instituto Igarapé visite: igarape.org.br/climate-security

Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel/Fax: +55 (21) 3496-2114
contato@igarape.org.br
facebook.com/institutoigarape
twitter.com/igarape_org
instagram.com/igarape_org

www.igarape.org.br

InSight Crime es una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe: el crimen organizado. Durante una década, InSight Crime ha cruzado fronteras e instituciones —como una amalgama de medio periodístico, centro de pensamiento y recurso académico— con el fin de profundizar y orientar el debate sobre el crimen organizado en el continente americano. Los reportajes en terreno, la investigación minuciosa y las investigaciones de alto impacto han sido características distintivas de la organización desde sus inicios.

Para conocer más sobre la cobertura de InSight Crime en torno a los delitos ambientales visite: es.insightcrime.org/indepth/delitos-ambientales

info@insightcrime.org
facebook.com/InSightCrime
twitter.com/insightcrime

www.insightcrime.org

Autores

Jeremy McDermott

Director del proyecto

María Fernanda Ramírez

Gerente de proyectos de InSight Crime

Seth Robbins y Juan Diego Cárdenas

Investigadores de InSight Crime

Annie Pforzheimer

Reportajes adicionales

Sean Doherty

Investigación de fuentes abiertas

Diseño y diagramación

**Ana Isabel Rico, Juan José Restrepo y
María Isabel Gaviria**

Diseñadores gráficos de InSight Crime

Elisa Roldán

Directora creativa de InSight Crime

Raphael Durão

Coordinador de diseño del Instituto Igarapé

André Guttierrez

Diseño gráfico y diagramación del Instituto Igarapé

Traducción

**Diego García, María Luisa Valencia y
Marina Vargas.**

Edición

**Seth Robbins, Peter Appleby y
Juan Diego Posada**

Editores de InSight Crime

Mike LaSusa

Subdirector de contenido de InSight Crime

Revisión

Melina Risso

Directora de investigación del Instituto Igarapé

Laura Waisbich y Katherine Aguirre

Investigadoras del Instituto Igarapé

Carolina Andrade

Asesora del Programa de clima y seguridad del Instituto Igarapé

Comunicación

Eliane Azevedo

Gerente de Comunicación del Instituto Igarapé

Ana Carolina Duccini

Coordinadora de Comunicación del Instituto Igarapé



INSTITUTO IGARAPÉ
a think and do tank



InSight
Crime